



Índice  
de Finanzas  
Sostenibles 2024  
(con datos a 2023)

Retos y oportunidades para acelerar la  
transición hacia finanzas más sostenibles  
en América Latina y el Caribe



**gflac**

GRUPO DE  
FINANCIAMIENTO  
CLIMÁTICO  
LAC

## **Autores:**

### **Dra. Sandra Guzmán Luna**

Fundadora y Directora General, GFLAC

### **Mtro. Orlando Barbosa Mejía**

Asociado de Investigación y Divulgación, GFLAC

## **Estrategia de comunicación y diseño:**

### **Mtra. Marisol Marín**

Coordinadora de Comunicación Estratégica, GFLAC

### **Lic. Federika Logwinczuk**

Asociada en Comunicación Social, GFLAC

### **Lic. Jhon Cortés**

Asociado en Diseño Creativo, GFLAC



Esta publicación se encuentra bajo licencia Creative Commons.  
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.  
No es una licencia de Cultura Libre.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>



## Agradecimientos

Las y los autores expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), cuyo compromiso y colaboración han sido fundamentales para el desarrollo de esta quinta edición del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS). Durante estos cinco años, el IFS ha proporcionado un análisis integral del panorama de finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe, consolidándose como una herramienta clave para la toma de decisiones en la región. En particular en un contexto internacional en el que es fundamental conocer las brechas de financiamiento para transitar hacia finanzas más sostenibles.

Un agradecimiento especial a los gobiernos que participaron activamente en este proceso, proporcionando información valiosa para la estimación del IFS 2024:

- **Argentina:** Ministerio de Economía, Ministerio del Interior, Secretaría de Energía, Subsecretaría de Ambiente y Subsecretaría de Hidrocarburos.
- **Brasil:** Ministerio de Planeación y Presupuesto, y Secretaría Nacional de Cambio Climático.
- **Chile:** Ministerio de Ambiente y Sistema Nacional de Información Ambiental.
- **Colombia:** Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento de Planeación y Subdirección de Recaudo.
- **Costa Rica:** Ministerio de Hacienda, y Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles.
- **Ecuador:** Ministerio de Economía y Subsecretaría de Cambio Climático.
- **Guatemala:** Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y Ministerio de Finanzas.
- **México:** Secretaría de Energía, y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- **Panamá:** Secretaría de Energía y Dirección de Cambio Climático.
- **Paraguay:** Ministerio de Economía y Finanzas.
- **República Dominicana:** Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Hacienda y Dirección de Análisis Económico.
- **Uruguay:** Ministerio de Economía y Finanzas.

Agradecemos también a los gobiernos que, aunque no proporcionaron información directa, demostraron disposición para dialogar sobre los resultados del IFS y trabajar en la mejora de la desagregación y presentación de los datos relacionados con las finanzas sostenibles. Este esfuerzo conjunto contribuye a identificar brechas de información y financiamiento, fortaleciendo la capacidad de tomar decisiones estratégicas en la región.

Reconocemos la valiosa contribución de aliadas y aliados, quienes con sus aportaciones han enriquecido tanto el informe como la metodología del IFS a lo largo de sus cinco ediciones. Asimismo, expresamos nuestra gratitud a instituciones filantrópicas que han confiado en nuestro trabajo, permitiendo que este esfuerzo continúe realizándose y mejorándose año tras año.

**Dra. Sandra Guzmán**  
**Fundadora y Directora General, GFLAC**

# Tabla de contenido

<b>Introducción</b>	<b>9</b>
<b>Principales resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (con datos a 2023)</b>	<b>11</b>
Contexto general	11
Respecto a los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024	12
<b>1. Índice de Finanzas Sostenibles</b>	<b>15</b>
1.2 Metodología del Índice de Finanzas Sostenibles	15
1.2.1 Indicadores cualitativos	16
Tabla 1. Indicadores cualitativos del Índice de Finanzas Sostenibles	16
1.2.2 Variables cuantitativas	21
Tabla 2. Indicadores cualitativos del IFS	21
1.2.3 Cálculo de las variables del ranking del Índice de Finanzas Sostenibles	22
1.2.4 Ranking por variable	22
Tabla 3. Clasificación de los niveles de las variables cuantitativas	22
Tabla 4. Ejemplo hipotético de la estimación del IFS	23
<b>2. Implementación del Índice de Finanzas Sostenibles</b>	<b>25</b>
2.1 Contexto regional: Análisis de las variables cualitativas	25
2.1.1 Indicadores ambientales	25
Gráfica 1. Tasa de agotamiento de los recursos naturales en 2021	26
Gráfica 2. Índice del riesgo climático en 2021	27
Gráfica 3. Tasa de mortalidad por contaminación del aire en el hogar y en el ambiente en 2019	28
Gráfica 4. Consumo de energía eléctrica en Teravatio hora en 2021	29
Gráfica 5. Consumo de energía per cápita en Megavatio hora en 2021	30
Gráfica 6. Consumo de energía por tipo de fuente: fósil versus renovable (% del total) en 2022	31
Gráfica 7. Emisiones de GEI en MtCO <sub>2</sub> e en 2021	32
Gráfica 8. Emisiones de GEI en MtCO <sub>2</sub> e/per cápita en 2021	33
2.1.2 Indicadores económicos	33
Gráfica 9. Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares en 2023	34
Gráfica 10. Producto Interno Bruto per cápita en dólares en los países de estudio en 2023	35
Gráfica 11. Comparación entre ingresos y egresos en miles de millones de dólares en 2023	36
Gráfica 12. Comparación entre ingresos y egresos per cápita en dólares en 2023	37

2.1.3 Indicadores de financiamiento y cooperación internacional	37
Gráfica 13. Financiamiento total para el desarrollo comprometido y desembolsado en miles de millones de dólares en 2021	38
Gráfica 14. Financiamiento comprometido para la biodiversidad y el cambio climático con respecto del total del financiamiento para el desarrollo por tipo de instrumentos: préstamos versus subvenciones en porcentaje en 2021	39
Gráfica 15. Financiamiento total para el desarrollo comprometido y desembolsado destinado a la biodiversidad en miles de millones de dólares en 2021	40
Gráfica 16. Flujo de financiamiento comprometido para la biodiversidad en los países de estudio en millones de dólares en 2021	41
Gráfica 17. Financiamiento total para el desarrollo comprometido y desembolsado destinado al cambio climático en miles de millones de dólares en 2021	42
Gráfica 18. Financiamiento comprometido para el cambio climático para actividades de mitigación, adaptación y para ambos objetivos en millones de dólares en 2021	43
Gráfica 19. Flujo de financiamiento comprometido para el cambio climático en millones de dólares en 2021	44
Gráfica 20. Financiamiento recibido por la Facilidad del Medio Ambiente Mundial acumulado en millones de dólares en 2024	45
Gráfica 21. Financiamiento recibido por el Fondo de Inversión Climática acumulado en millones de dólares en 2024	46
Gráfica 22. Financiamiento recibido por el Fondo Verde del Clima acumulando en millones de dólares en 2024	47
2.1.4 Indicadores de política	48
Tabla 5. Síntesis de las NDCs de los 20 países de estudio	49
Gráfica 23. Índice de Presupuesto Abierto en 2023	56
2.1.5 Indicadores sociales	57
Gráfica 24. Población total en millones de habitantes en los 20 países de estudio en 2023	58
Gráfica 25. Índice de Desarrollo Humano en los 20 países de estudio en 2022	59
Gráfica 26. Índice Global de Brecha de Género en los 20 países de estudio en 2024	60
Gráfica 27. Tasa de desempleo en los 20 países de estudio en 2023	61
Gráfica 28. Índice de Pobreza Multidimensional en los 20 países de estudio en 2022	62
2.2 Contexto regional: Resultados del Índice de Finanzas Sostenibles caso del análisis de las variables cuantitativas	63
2.2.1 Índice de Finanzas Sostenibles 2024	64
Gráfica 29. Ranking de finanzas sostenibles 2024	64
2.2.2 Ingresos Sostenibles	66
2.2.2.1 Tendencias regionales	67

Gráfica 30. Financiamiento comprometido y desembolsado en América Latina y el Caribe para la biodiversidad y el cambio climático en millones de dólares en 2021	68
Gráfica 31. Financiamiento comprometido y desembolsado destinados para la biodiversidad en los 20 países de estudio en millones de dólares en 2021	69
Gráfica 32. Financiamiento comprometido y desembolsado destinados para el cambio climático en los 20 países de estudio en millones de dólares en 2021	70
2.2.2.2 Resultados de la variable de Ingresos Sostenibles	71
Gráfica 33. Ranking de Ingresos Sostenibles 2023	71
Tabla 6. Rubros de la variable de ingresos sostenibles en los países de estudio en dólares	73
Tabla 7. Financiamiento destinado a la biodiversidad y el cambio climático vía préstamos y subvenciones en dólares y en porcentaje	75
2.2.3 Ingresos Intensivos en Carbono	76
2.2.3.1 Tendencias regionales	76
Gráfica 34. Ingresos públicos obtenidos por concepto de combustibles, hidrocarburos y minería en los 20 países de estudio en porcentaje en 2023	77
2.2.3.2 Resultados de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono	78
Gráfica 35. Ranking de Ingresos Intensivos en Carbono 2023	78
Tabla 8. Ingresos públicos destinados a los rubros de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono en dólares en 2023	80
2.2.3.3 Impuestos al carbono	81
Gráfica 36. Impuesto al carbono en Argentina, Colombia, México y Uruguay en millones de dólares en 2023	82
2.2.4 Presupuestos Sostenibles	82
2.2.4.1 Tendencias regionales	83
Gráfica 37. Presupuesto sostenible asignado en conjunto a los 20 países con relación al presupuesto total en porcentaje en 2023	84
Gráfica 38. Presupuesto sostenible destinado en conjunto de los 20 países por sector de la variable de presupuestos sostenibles en porcentaje en 2023	85
Gráfica 39. Presupuesto asignado al sector ambiente con respecto al presupuesto destinado a los Ministerios o Secretaría de Medio Ambiente en conjunto de los 20 países en porcentaje en 2023	86
Gráfica 40. Presupuesto asignado al sector energético con respecto al presupuesto destinado al sector energía en conjunto de los 20 países en porcentaje en 2023	87
Gráfica 41. Presupuesto asignado al sector de atención de desastres naturales con respecto al presupuesto destinado al sector que encargado de este sector en conjunto de los 20 países de estudio en 2023	88
2.2.4.2 Resultados de la variable de Presupuestos Sostenibles	89



Gráfica 42. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2023	89
Tabla 9. Presupuesto destinado a los sectores de la variable de Presupuestos Sostenibles en dólares en 2023	91
Gráfica 43. Presupuesto destinado al sector ambiental con respecto al total del presupuesto sostenible en porcentaje en 2023	93
Gráfica 44. Presupuesto destinado al sector energético con respecto al total del presupuesto sostenible en porcentaje en 2023	94
Gráfica 45. Presupuesto destinado al sector de atención a los desastres naturales con respecto al total del presupuesto sostenible en porcentaje en 2023	95
2.2.5 Presupuestos Intensivos en Carbono	96
2.2.5.1 Tendencias regionales	96
Gráfica 46. Presupuesto Intensivo en Carbono asignado en conjunto a los 20 países con relación al presupuesto total en porcentaje en 2023	97
2.2.5.2 Resultados de la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono	98
Gráfica 47. Ranking de Presupuestos Intensivos en Carbono 2023	98
Tabla 10. Presupuesto destinado a la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono (hidrocarburos) en dólares en 2023	100
2.3 Resultados del análisis comparativo de las variables	101
2.3.1 Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono	101
2.3.1.1 Tendencias regionales	101
Gráfica 48. Análisis regional: Ingresos Sostenibles (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)	102
Gráfica 49. Análisis regional: Ingresos Sostenibles, considerando únicamente el financiamiento climático (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)	103
2.3.1.2 Tendencias por país	103
Gráfica 50. Análisis por país: Ingresos Sostenibles (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)	104
2.3.2 Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono	104
2.3.2.1 Tendencias regionales	105
Gráfica 51. Análisis regional: Presupuestos Sostenibles (2023) versus Presupuestos Intensivos en Carbono (2023)	105
2.3.2.2 Tendencias por país	106
Gráfica 52. Análisis por país: Presupuestos Sostenibles (2023) versus Presupuestos Intensivos en Carbono (2023)	107
2.3.3 Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado	107
2.3.3.1 Tendencias regionales	108
Gráfica 53. Presupuesto Sostenible versus presupuesto necesario estimado con respecto del 2% del PIB como porcentaje del presupuesto total en conjunto de los 20	

países de estudio en 2023	109
2.3.3.2 Tendencias por país	109
Gráfica 54. Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado con respecto del 2% del PIB como porcentaje del presupuesto total para los 20 países de estudio en 2023	110
<b>3. Evolución del Índice de Finanzas Sostenibles: Un análisis comparativo a través del tiempo</b>	<b>111</b>
Gráfica 55. Análisis comparativo: Índice de Finanzas Sostenibles	112
3.1 Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles	115
Gráfica 56. Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles (% del total de su financiamiento)	115
3.2 Análisis comparativo: Ingresos Intensivos en Carbono	116
Gráfica 57. Análisis comparativo: Ingresos Intensivos en Carbono (% del total de sus ingresos)	117
3.3 Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles	118
Gráfica 58. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles (% del total de sus presupuestos)	118
3.4 Análisis comparativo: Presupuestos Intensivos en Carbono	119
Gráfica 59. Análisis comparativo: Presupuestos Intensivos en Carbono (% del total de sus presupuestos)	120
3.5 Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono	121
Gráfica 60. Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono	121
3.6 Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono	122
Gráfica 61. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono	123
<b>4. Conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados del IFS</b>	<b>124</b>
<b>5. Fuentes de información</b>	<b>130</b>
5.1 Fuentes de información general	130
5.2 Fuentes de información de finanzas públicas por país	131





## Introducción

El cambio climático es indudablemente uno de los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad y todos los ecosistemas que existen en el planeta Tierra. Tras años de estudio, es claro que sus impactos trascienden fronteras y sectores económicos. Estos impactos han generado cada vez más afectaciones y con ello, mayores pérdidas y daños. Esto ha traído consigo una creciente necesidad de financiamiento, no solo para atender la crisis, sino para hacer frente a las actividades que hoy son causantes del problema, como la creciente explotación y quema de combustibles fósiles.


Ante este escenario y a lo largo de las cuatro ediciones anteriores el Índice de Finanzas Sostenibles ha sido capaz de identificar que para América Latina y el Caribe es fundamental avanzar en diversas direcciones. Por un lado, es necesario fortalecer el acceso al financiamiento internacional, que sigue siendo limitado en la región. De esto dependerá la contribución de los países de la región en las acciones globales que son necesarias para limitar el aumento de la temperatura global en 1.5°C, reduciendo las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010 (IPCC, 2020). Esta es una urgencia, ya que lo hecho hasta el momento ha sido insuficiente.

Por otro lado, también es necesario hacer un cambio fundamental en la gestión de las finanzas públicas a nivel nacional, pues es necesario repensar la manera en que los países hacen su recaudación de ingresos y su asignación presupuestal. Lo anterior, porque si bien el financiamiento internacional es necesario, no será suficiente si las finanzas públicas siguen atadas a un modelo extractivo altamente dependiente de los ingresos fósiles.

Por ello, este camino de transformación debe darse tanto a nivel internacional, como nacional. A nivel internacional es fundamental asegurar que la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático (NCQG, por sus siglas en inglés) se cumpla, tanto la meta de transferir 300 mil millones de dólares anuales hacia países en desarrollo, como la ruta hacia la movilización de 1.3 billones anuales, como se acordó en la COP 29. Si bien el NCQG es clave, será también fundamental avanzar hacia la reforma del sistema financiero en general.

Por su parte, los países de la región deberán avanzar hacia el rediseño de sus finanzas públicas. Para ello, el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS), que es una herramienta que permite el monitoreo de ingresos y egresos nacionales e internacionales que se tienen en países en desarrollo para atender el problema del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible asociados al mismo, así como conocer aquellos recursos que podrían estar obstaculizando dicho progreso, como actividades asociadas a la extracción y producción de combustibles fósiles, busca plasmar las grandes brechas financieras existentes para proveer recomendaciones que permitan cerrarlas y transitar hacia finanzas más sostenibles, con miras a alcanzar el objetivo 2.1.c del Acuerdo de París.

Esta quinta edición del IFS 2024, con datos a 2023, es aplicada a los 20 países más emisores de gases contaminantes en la región de América Latina y el Caribe, a través de cuatro variables: 1) Ingresos



Sostenibles (IS); 2) Ingresos Intensivos en Carbono (IIC); Presupuestos Sostenibles (PS); y 4) Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC).

En una primera sección, este informe presenta información sobre los objetivos del Índice de Finanzas Sostenibles cómo se compone y detalla la metodología empleada para la estimación de cada una de las 4 variables que lo constituyen y del índice mismo. En una segunda sección, en una primera parte, se realiza un análisis regional de los 20 países de estudio basados en el análisis de diversos indicadores ambientales, económicos, financieros, políticos y sociales. En una segunda parte, se presentan los resultados obtenidos de esta edición del IFS y de cada una de las cuatro variables, enfatizando que las tendencias vistas en años anteriores se mantienen, en donde los ingresos y egresos intensivos en carbono siguen por arriba de los ingresos y egresos asociados a la atención del cambio climático, aunque con algunos matices importantes que se explican en dicha sección.

En la tercera sección, se presenta un análisis comparativo de los resultados del IFS y de cada variable, a lo largo de las cinco ediciones del IFS. Posteriormente, en la cuarta sección se presentan las conclusiones y recomendaciones del IFS. Finalmente, en la quinta sección se presentan las fuentes de información general y las empleadas para la estimación del IFS.


El IFS es una herramienta ciudadana que busca mejorar la calidad de los datos relacionados con las finanzas sostenibles, utilizando fuentes de información pública y de acceso abierto. En este sentido, agradecemos a los gobiernos que mantienen el flujo de información pública y abierta, y hacemos un llamado a los gobiernos a mejorar la calidad de los datos sobre flujos financieros que son importantes para la mejor toma de decisiones, sobre todo a la luz del cumplimiento de mecanismos como el Acuerdo de Escazú.

Desde GFLAC, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar esta labor por el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ende, cualquier sugerencia o recomendación que contribuya a mejorar su contenido será altamente apreciada. No duden en contactarnos a través del siguiente correo electrónico: [alianzas@gflac.org](mailto:alianzas@gflac.org)

# Principales resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (con datos a 2023)

## Contexto general

- **Financiamiento para la biodiversidad:** En 2021, América Latina y el Caribe recibió el 32.58% del financiamiento global destinado a la protección de la biodiversidad, equivalente a 1.3 mil millones de dólares de un total global de 4 mil millones de dólares, (OECD, 2024; datos recopilados en la plataforma Aid Atlas). Este porcentaje destaca la importancia estratégica de la biodiversidad en la región, que alberga algunos de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta, como la Amazonía. Sin embargo, aunque este financiamiento refleja un conocimiento de la relevancia ambiental del territorio, el monto asignado resulta insuficiente para enfrentar los desafíos de la región. Entre los desafíos están la deforestación, la pérdida de hábitats, la sobreexplotación de recursos naturales y los impactos del cambio climático, que ponen en riesgo tanto la biodiversidad como las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Además, surgen interrogantes sobre la distribución y efectividad de estos recursos. Muchos países carecen de capacidades institucionales para gestionar y monitorear adecuadamente los proyectos financiados, lo que limita el impacto de estas inversiones.
- **Financiamiento para el cambio climático:** En 2021 la región captó el 16.19% del financiamiento de desarrollo destinando al cambio climático con 9.6 mil millones de dólares de un total global de 59.3 mil millones (OECD, 2024; datos consultados en la plataforma Aid Atlas). Este financiamiento es fundamental para abordar la mitigación climática, pero sigue siendo insuficiente ante la magnitud de los desafíos que enfrenta la región, lo que evidencia la urgencia de incrementar los recursos financieros y de reforzar las políticas de adaptación y mitigación. La vulnerabilidad de los países en desarrollo y sus limitaciones para financiar acciones climáticas destacan una brecha en la justicia climática global. A pesar de ser responsables de una menor proporción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estas naciones son las más afectadas por los impactos del cambio climático. El financiamiento actual, además de ser insuficiente, enfrenta problemas de distribución desigual y acceso limitado por lo que, es urgente que los compromisos internacionales sean cumplidos y ampliados, lo que incluye incrementar los montos totales y garantizar que estos fondos sean accesibles y estén orientados a estrategias sostenibles.
- **Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI):** América Latina y el Caribe fue responsable del 8.12% de las emisiones globales de GEI en 2021, lo que equivale a 4.1 mil millones de toneladas de CO<sub>2</sub>equivalente (MTCO<sub>2</sub>e), sobre un total mundial de 49.5 MTCO<sub>2</sub>e (ClimateWatch, 2024). Aunque esta cifra representa una proporción moderada en comparación con otras regiones, su impacto es considerable debido a la vulnerabilidad socioambiental de la región y por la necesidad de cumplir con los compromisos climáticos globales.
- **Economía regional:** En 2023, América Latina y el Caribe aportó el 6.73% del Producto Interno Bruto (PIB) global, alcanzó 7.0 mil millones de dólares en un contexto global de 105.4 mil millones de dólares (Banco Mundial, 2023). No obstante, la región experimentó una tasa de crecimiento económico de apenas 1.4%, situándose por debajo del promedio global del 1.8%. Este bajo desempeño refleja limitaciones estructurales que frenan el desarrollo sostenible. El crecimiento económico de la región continúa siendo vulnerable a la volatilidad de los




mercados internacionales y las debilidades en sus sistemas económicos productivos. Estos factores, combinados con desigualdades sociales persistentes, han limitado la capacidad de los países para diversificar sus economías y responder a desafíos globales como el cambio climático.

- **Desempleo:** La tasa de desempleo en América Latina y el Caribe fue de 6.12% en 2023, cifra superior a la tasa mundial del 5.0% (Banco Mundial, 2023). Esta cifra refleja las dificultades persistentes en los mercados laborales de la región, marcadas por una combinación de problemas estructurales, desigualdad y la falta de políticas efectivas para abordar el empleo de manera inclusiva y sostenible.


## Respecto a los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024

- **Desempeño regional:** Ninguno de los 20 países emisores de gases contaminantes de América Latina y el Caribe alcanzó un nivel **“MUY ALTO”** en finanzas sostenibles, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024. Ningún país alcanzó la puntuación máxima de 4.0 puntos, lo que indica que los ingresos sostenibles no superan a los generados por actividades intensivas en carbono. Esto refleja la persistente dependencia de la región en actividades intensivas en carbono y resalta la necesidad urgente de implementar políticas financieras y ambientales para fomentar la transición hacia economías más sostenibles. Además, el desempeño revelado por el IFS es una señal de alerta sobre las limitaciones de las iniciativas actuales. Aunque algunos países han mostrado avances, estos son insuficientes frente a la magnitud de los desafíos climáticos globales. Para revertir esta situación, es primordial que la región priorice políticas integrales que incentiven inversiones en energías renovables y proyectos sostenibles, al mismo tiempo que desincentiven actividades contaminantes.
- **Guatemala presenta avances importantes:** Guatemala fue el país mejor posicionado en el ranking de finanzas sostenibles en la región con una puntuación de 2.6 sobre 4.0 puntos, alcanzando el nivel **“MEDIO ALTO”**. Esto se atribuye a que se trata de un país que no depende de recursos petroleros para generar ingresos, además de haber asignado un presupuesto 35 veces mayor a iniciativas sostenibles en comparación con proyectos intensivos en carbono. Si bien estas cifras ofrecen información relevante, es importante examinarlas desde una perspectiva más amplia. Por un lado, su baja dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono representa un paso en la dirección correcta, aunque no necesariamente implica una transformación estructural de la economía hacia la sostenibilidad. Por otro lado, la proporción del presupuesto asignado a iniciativas sostenibles plantea preguntas sobre la efectividad de las inversiones realizadas y el impacto real en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, el contexto general del país, con diversos desafíos en términos económicos, desigualdad y transparencia, podría limitar la implementación efectiva de estas políticas.
- **Países con menor nivel de finanzas sostenibles:** Bolivia, Trinidad y Tobago ocupan los niveles más bajos en el ranking de finanzas sostenibles, con puntuaciones de 1.0 y 0.6 puntos, respectivamente, clasificándose en el nivel **“BAJO”**. Esta realidad se explica principalmente por la alta proporción de recursos destinados a actividades intensivas en carbono. En el caso de Cuba, la falta de información suficiente sobre las variables de estudio impidió su inclusión en el ranking. Esto evidencia no sólo las limitaciones estructurales en el acceso a datos, sino



también la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y transparencia de actividades financieras y ambientales.

- **Ingresos Intensivos en Carbono:** En conjunto, los países analizados generaron 229.681 mil millones de dólares por actividades intensivas en carbono, frente a los 11.839 mil millones de dólares en financiamiento climático. Esta diferencia de 19 veces entre ingresos sostenibles e intensivos en carbono destaca la necesidad urgente de redirigir recursos hacia actividades sostenibles para facilitar una transición económica baja en emisiones. Este desequilibrio muestra no sólo la persistente dependencia de economías basadas en combustibles fósiles y actividades contaminantes, sino también las insuficiencias en los incentivos para atraer inversiones hacia sectores de bajas emisiones. Además, refuerza la necesidad de implementar políticas fiscales y regulatorias contundentes que desincentiven prácticas perjudiciales para el clima.
- **Presupuestos Intensivos en Carbono:** Los presupuestos asignados a actividades intensivas en carbono son 12 veces mayores que los destinados a la sostenibilidad. De los 20 países evaluados, en conjunto asignaron 66.850 mil millones de dólares a actividades intensivas en carbono, frente a los 5.593 mil millones de dólares destinados a atender el cambio climático. Esta distribución presupuestaria no solo pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París, sino que también perpetúa patrones de desarrollo insostenible que agravan las crisis climáticas y sociales. Para revertir esta tendencia, es necesario que los gobiernos adopten políticas fiscales y presupuestarias que prioricen la sostenibilidad. Incluyendo la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, la implementación de impuestos al carbono y la reasignación de recursos hacia energía renovable e infraestructura verde. Asimismo, se requiere transparencia en el uso de los recursos y garantizar que los presupuestos destinados reflejen un compromiso real con la acción climática.
- **Meta de destinar el 2% del PIB en presupuesto sostenible:** En su informe “*The Economics of Climate Change: The Stern Review*”, Nicholas Stern propuso que los gobiernos deberían asignar al menos el 2% de su PIB anual para enfrentar los desafíos del cambio climático. Esta recomendación se basa en el reconocimiento de que las crisis climática no solo es una amenaza ambiental, sino también un riesgo económico cuyas consecuencias podrían superar ampliamente los costos de la inversión anticipada. Sin embargo, los 20 países analizados en 2023 destinaron únicamente 5.593 mil millones de dólares a iniciativas sostenibles, lo que equivale al 0.27% de sus presupuestos totales. Para cumplir con la meta propuesta, la región debería haber invertido al menos 129.784 mil millones de dólares, lo que representa el 6.18% de su presupuesto total. Entre los países evaluados, Bolivia presenta la menor discrepancia, destinando el 0.14% de su presupuesto, aunque este esfuerzo sigue siendo insuficiente frente a las necesidades climáticas globales. Cerrar estas brechas requiere que los gobiernos reconsideren sus estrategias presupuestarias, integrando la sostenibilidad como un eje central en el diseño de políticas económicas. Esto no solo implica aumentar significativamente los recursos destinados a proyectos sostenibles, sino también garantizar su uso eficaz y transparente.
- **Análisis comparativo del Índice de Finanzas Sostenibles:** Los resultados muestran que 13 países mejoraron su puntuación con respecto a la edición anterior. Entre ellos se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú,



República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Por otro lado, 4 países registraron retrocesos: Cuba, El Salvador, Guatemala y Jamaica, mientras que 3 permanecieron sin cambios: Bolivia, Costa Rica y Nicaragua. Si bien este incremento general en la puntuación puede interpretarse como un indicio de un mayor compromiso con la transición hacia la sostenibilidad, es necesario considerar que estos avances son todavía insuficientes frente a los profundos desafíos climáticos y económicos que enfrenta la región de América Latina y el Caribe. A pesar de los avances registrados, la región continúa rezagada en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales. Entre las principales barreras destacan la limitada proporción de recursos destinados a proyectos sostenibles, la persistente dependencia de actividades intensivas en carbono y la ausencia de un marco regional integrado que permita coordinar y fortalecer los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.



# 1. Índice de Finanzas Sostenibles

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) es una herramienta diseñada para monitorear los ingresos y egresos nacionales e internacionales en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. Además, identifica aquellos recursos que podrían obstaculizar el progreso hacia una transición baja en carbono y resiliente al clima, ocasionado principalmente por actividades causantes del problema como las relacionadas con la extracción y producción de combustibles fósiles y minería. Asimismo, ofrece una guía clave para que los responsables políticos y actores orienten sus decisiones hacia sectores con mayor potencial de crecimiento sostenible y resiliente.

En esta quinta edición con datos de 2023, el IFS se aplicó a los 20 países más emisores de gases contaminantes en la región de América Latina y el Caribe. Su cálculo se basa en cuatro variables compuestas de diversos rubros de finanzas públicas tanto nacionales como internacionales:<sup>1</sup>

- **Ingresos Sostenibles (IS):** Integra el financiamiento internacional para el desarrollo y financiamiento desembolsado por fuentes bilaterales y multilaterales destinados a la biodiversidad y cambio climático.
- **Ingresos Intensivos en Carbono (IIC):** Incluye los ingresos generados por la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y combustibles.
- **Presupuestos Sostenibles (PS):** Representa el presupuesto asignado a los rubros relacionados con biodiversidad, cambio climático, energías renovables, eficiencia energética, forestal y atención a desastres naturales.
- **Presupuesto Intensivo en Carbono (PIC):** Engloba el presupuesto asignado a la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales y el presupuesto a empresas estatales encargadas de la explotación de gas y petróleo, cuando las hay.

Además, el IFS analiza diversos indicadores cualitativos en los ámbitos ambiental, económico, financiero y social, proporcionando una panorámica general de los países analizados. En conjunto, esta herramienta ofrece información clave sobre los avances, brechas y oportunidades de financiamiento para los gobiernos centrales, organizaciones e instituciones no gubernamentales y organismos e instituciones donantes, que desean conocer el estado y el progreso de las finanzas sostenibles en la región.

## 1.2 Metodología del Índice de Finanzas Sostenibles

La metodología del IFS se compone de dos componentes: 1) la selección de los indicadores cualitativos, los cuales permiten analizar el contexto general de los países de estudio; y 2) la selección y estimación de cada una de las cuatro variables que componen el IFS.

---

<sup>1</sup> La selección de las variables y la construcción del Índice de Finanzas Sostenibles se basa en el marco teórico desarrollado por Guzmán, Sandra (2020) en su estudio “*La incorporación del cambio climático en los presupuestos públicos de los países en desarrollo: un análisis de métodos mixtos aplicados a los países de América Latina y el Caribe*”, realizado en el Departamento de Política de la Universidad de York, Reino Unido.

### 1.2.1 Indicadores cualitativos

La selección de los indicadores cualitativos se partió del trabajo de Guzmán (2020), sobre indicadores que pueden influir en la asignación de presupuestos públicos, niveles de gobernanza, niveles de desarrollo humano, niveles de riesgo climático, y niveles de recepción de ayuda oficial al desarrollo. Para ello, se identificaron cerca de 530 indicadores, algunos integrados en otros índices y otros indicadores independientes, con base en lo cual se creó una matriz de comparación que se clasificó en función de la relación de los indicadores con los temas de análisis del IFS. En la siguiente tabla se presenta la selección de 33 indicadores ambientales, económicos, financieros, políticos y sociales.

**Tabla 1. Indicadores cualitativos del Índice de Finanzas Sostenibles**

Indicadores	Descripción	Fuente
<b>Indicadores ambientales</b>		
<b>Índice de riesgo climático</b>	Analiza en qué medida los países se han visto afectados por los impactos de los eventos de pérdidas relacionados con el clima (tormentas, inundaciones, olas de calor, etc.). También, se analizan los impactos humanos (muertes) y las pérdidas económicas directas.	Germanwatch
<b>Agotamiento de los recursos naturales</b>	El agotamiento de los recursos naturales es la suma del agotamiento neto de los bosques, el agotamiento de la energía y el agotamiento de los minerales.	Banco Mundial
<b>Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire doméstico y ambiental</b>	La tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire doméstico y ambiental es el número de muertes atribuibles a los efectos conjuntos de la contaminación del aire doméstico y ambiental en un año por cada 100,000 habitantes.	Banco Mundial
<b>Emisiones de CO2</b>	Es la emisión de dióxido de carbono (CO2) totales generadas por la quema de combustibles fósiles.	Agencia Internacional de Energía
<b>Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita)</b>	Es la emisión de dióxido de carbono (CO2) totales generadas por la quema de combustibles fósiles divididas entre el número de la población del país.	Agencia Internacional de Energía
<b>Emisiones de GEI</b>	Es la emisión total de Gases de Efecto Invernadero (GEI) reportadas en todos los sectores por país.	ClimateWatch
<b>Emisiones de GEI (toneladas métricas per cápita)</b>	Es la emisión total de Gases de Efecto Invernadero (GEI) divididas entre el número de la población del país.	ClimateWatch
<b>Consumo de energía eléctrica</b>	Es el consumo total de energía eléctrica.	Agencia Internacional de Energía

<b>Indicadores</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fuente</b>
<b>Consumo de energía eléctrica per cápita</b>	Es el consumo total de energía eléctrica dividido entre el número de población del país.	Agencia Internacional de Energía
<b>Consumo de gas natural</b>	Es el consumo total de gas natural.	Agencia Internacional de Energía
<b>Consumo de energía por fuentes fósiles</b>	Es el porcentaje del consumo total de energía eléctrica por fuentes fósiles.	Banco Mundial
<b>Consumo de energía por fuentes renovables</b>	Es el porcentaje del consumo total de energía eléctrica por fuentes renovables.	Banco Mundial
<b>Indicadores económicos</b>		
<b>Crecimiento del PIB per cápita (% anual)</b>	Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita basada en moneda local constante.	Banco Mundial
<b>Producto Interno Bruto</b>	El Producto Interno Bruto (PIB) es la suma del valor añadido bruto de todos los productores residentes en la economía, más los impuestos sobre los productos y menos las subvenciones no incluidas en el valor de los productos.	Banco Mundial
<b>Producto Interno Bruto per cápita</b>	El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, es la suma del valor añadido bruto de todos los productores residentes en la economía, más los impuestos sobre los productos y menos las subvenciones no incluidas en el valor de los productos, dividido entre el número de población del país.	Banco Mundial
<b>Ingreso total</b>	Es el ingreso total público estimado u obtenido por los países (en función de la información disponible en cada caso), incluyendo ingresos tributarios y no tributarios.	Información publicada por los gobiernos de los países a través de las instituciones competentes en materia de ingresos.
<b>Ingreso total per cápita</b>	Es el ingreso total público estimado u obtenido por los países (en función de la información disponible en cada caso), incluyendo ingresos tributarios y no tributarios, dividido entre el número de población del país.	Información publicada por los gobiernos de los países a través de las

Indicadores	Descripción	Fuente
		instituciones competentes en materia de ingresos.
<b>Presupuesto total</b>	Es el presupuesto total público asignado por los países.	Información publicada por los gobiernos de los países a través de las instituciones competentes en materia presupuestal.
<b>Presupuesto total per cápita</b>	Es el presupuesto total público asignado por los países, dividido entre el número de población del país.	Información publicada por los gobiernos de los países a través de las instituciones competentes en materia presupuestal.
<b>Indicadores financieros</b>		
<b>Financiamiento para el desarrollo</b>	Está constituida por todos los flujos financieros para el desarrollo, bilaterales y multilaterales, destinados a países en desarrollo.	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas, Stockholm Environment Institute.
<b>Financiamiento para el desarrollo destinado a cambio climático</b>	Es el financiamiento para el desarrollo destinado a la atención del cambio climático dividido en actividades de adaptación, mitigación y ambas.	Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Indicadores	Descripción	Fuente
		Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas, Stockholm Environment Institute.
<b>Financiamiento para el desarrollo destinado a biodiversidad</b>	Es el financiamiento para el desarrollo destinado a la atención de la biodiversidad.	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas, Stockholm Environment Institute.
<b>Fondo Verde del Clima</b>	Es el financiamiento total obtenido por el Fondo Verde del Clima (FVC).	Fondo Verde del Clima
<b>Facilidad para el Medio Ambiente Mundial</b>	Es el financiamiento total obtenido por la Facilidad para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).	Facilidad para el Medio Ambiente Mundial
<b>Fondo de Inversión Climático</b>	Es el financiamiento total obtenido por el Fondo de Inversión Climático (FIC).	Fondo de Inversión Climático
<b>Banco Interamericano de Desarrollo</b>	Es el financiamiento total obtenido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).	Banco Interamericano de Desarrollo

Indicadores	Descripción	Fuente
<b>Indicadores políticos</b>		
<b>Transparencia presupuestaria</b>	Evalúa la disponibilidad pública de diversos documentos presupuestarios clave, que en conjunto proporcionan una visión completa de cómo se han recaudado, planificado y gastado los recursos públicos durante el año presupuestario.	International Budget Partnership
<b>Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés)</b>	Contiene información sobre el estado de las NDCs, los objetivos y metas en mitigación y adaptación, y si tiene información estimada del costo de éstas.	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
<b>Indicadores sociales</b>		
<b>Desempleo</b>	La tasa de desempleo se refiere a la proporción de la fuerza laboral que está sin trabajo, pero disponible para y en busca de empleo.	Banco Mundial
<b>Población</b>	La población total se basa en la definición de facto de población, que cuenta a todos los residentes independientes de su estatus legal o ciudadanía.	Banco Mundial
<b>Índice de Desarrollo Humano</b>	El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida resumida de los logros medios en dimensiones clave del desarrollo: una vida larga y saludable, estar informado y tener un nivel de vida decente.	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
<b>Índice de Brecha de Género</b>	El Índice Global de la Brecha de Género compara anualmente el estado actual y la evolución de la paridad de género en cuatro dimensiones clave: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político.	World Economic Forum
<b>Pobreza multidimensional</b>	El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una medición de pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrenta la población en situación de pobreza.	Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Fuente: Elaboración propia.



## 1.2.2 Variables cuantitativas

La estimación de las variables cuantitativas que conforman el IFS se llevó a cabo con base en cuatro variables que incluyen ingresos y egresos nacionales e internacionales, asociados a la atención del cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible, así como ingresos y egresos asociados a actividades intensivas en carbono relacionadas con la producción y extracción de recursos fósiles y minerales, causantes del problema del cambio climático.

**Tabla 2. Indicadores cualitativos del IFS**

Variables	Descripción	Fuente
 <p><b>Ingresos Sostenibles (IS)</b></p>	<p>Son aquellos ingresos por concepto de financiamiento y cooperación internacional para el desarrollo destinados a la biodiversidad y al cambio climático provenientes de fuentes bilaterales y multilaterales recibidos durante el año analizado.</p>	<p>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas, Stockholm Environment Institute.</p>
 <p><b>Ingresos Intensivos en Carbono (IIC)</b></p>	<p>Son aquellos ingresos fiscales estimados o recaudados (dependiendo de la información disponible en cada país) durante el año analizado, procedentes de la recaudación tributaria y no tributaria aplicable a la producción y extracción de gas, petróleo y minerales, y de los impuestos a los combustibles.</p>	<p>Información publicada por los gobiernos de los países a través de las instituciones competentes en materia de ingresos.</p>
 <p><b>Presupuestos Sostenibles (PS)</b></p>	<p>Es el presupuesto etiquetado para biodiversidad, cambio climático y forestal dentro del sector ambiental; para eficiencia energética y energías renovables dentro del sector energético; y para la atención a desastres naturales dentro del sector encargado de coordinar dicha política en cada país.</p>	<p>Información publicada por los gobiernos de los países a través de las instituciones competentes en materia presupuestal.</p>
 <p><b>Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC)</b></p>	<p>Es el presupuesto asignado para las instituciones, programas y/o actividades del sector energético relacionadas con la explotación de hidrocarburos, incluyendo exploración y extracción, refinación, petroquímica y transporte, entre otros. Además, se incluye información sobre el presupuesto público asignado a empresas estatales encargadas de la explotación de gas y petróleo</p>	<p>Información publicada por los gobiernos de los países a través de las instituciones competentes en materia presupuestal.</p>

Variables	Descripción	Fuente
	en aquellos países que cuenten con este tipo de empresas.	

Fuente: Elaboración propia.

### 1.2.3 Cálculo de las variables del ranking del Índice de Finanzas Sostenibles

**1. Ingresos Sostenibles (IS):** Corresponde a la suma del financiamiento proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales destinado exclusivamente para la protección de la biodiversidad y la atención del cambio climático. Además de los ingresos por la emisión de deuda gubernamental por bonos verdes y sostenibles. Posteriormente, se estima el porcentaje que este monto representa con respecto al financiamiento total recibido para el desarrollo. Este porcentaje representa los ingresos sostenibles.

**2. Ingresos Intensivos en Carbono (IIC):** Corresponde a la suma de los ingresos procedentes de la recaudación tributaria y no tributaria aplicable a la producción y extracción de petróleo, gas y minería. Posteriormente, se estima el porcentaje que este monto representa del ingreso total. Este porcentaje representa los ingresos intensivos en carbono.

**3. Presupuestos Sostenibles (PS):** Corresponde a la suma del presupuesto etiquetado para la biodiversidad, el cambio climático y forestal dentro del sector ambiental; el presupuesto etiquetado para eficiencia energética y energías renovables dentro del sector energético; y el presupuesto etiquetado para la atención de desastres naturales dentro del sector encargado de coordinar dicha política en el país. Posteriormente, se estima el porcentaje que este monto representa del presupuesto total. Este porcentaje representa el presupuesto sostenible.

**4. Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC):** Corresponde la suma del presupuesto etiquetado a instituciones y/o actividades del sector energético asociado con la explotación de hidrocarburos, incluyendo exploración y extracción, refinación, petroquímica y transporte, entre otros. Además del presupuesto asignado a empresas estatales encargadas de la explotación de gas y petróleo, en los países donde esté disponible. Posteriormente, se estima el porcentaje que este monto representa del presupuesto total. Este porcentaje representa el presupuesto intensivo en carbono.

### 1.2.4 Ranking por variable

Una vez obtenido el estimado el valor de cada una de las 4 variables, se clasifican a los países en alguno de los 7 niveles de finanzas sostenibles de acuerdo con la valoración obtenida en cada variable. En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los niveles de las variables cuantitativas.

**Tabla 3. Clasificación de los niveles de las variables cuantitativas**

Variables positivas	Variables negativas
Ingresos Sostenibles (IS)	Ingresos Intensivos en Carbono (IIC)
Presupuestos Sostenible (PS)	Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● MUY ALTO</li> <li>● ALTO</li> <li>● MEDIO ALTO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MUY ALTO</li> <li>● ALTO</li> <li>● MEDIO ALTO</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● MEDIO</li> <li>● MEDIO BAJO</li> <li>● BAJO</li> <li>● MUY BAJO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MEDIO</li> <li>● MEDIO BAJO</li> <li>● BAJO</li> <li>● MUY BAJO</li> </ul>
---	---

Fuente: Elaboración propia.

El cálculo del IFS se basa en la asignación de una puntuación entre 0 y 1 punto para cada una de las cuatro variables estimadas. Las variables de Ingresos Sostenibles y Presupuestos Sostenibles se consideran positivas, lo que significa que aquellos países que generen y/o destinen mayores recursos a actividades a atender el cambio climático y a promover el desarrollo sostenible obtendrán una mayor puntuación cercana a 1 punto, mientras que los que generen y/o destinen menor recursos a estas actividades obtendrán una puntuación más cercana a 0 puntos.


Caso contrario a las variables de Ingresos Intensivos en Carbono y Presupuestos Intensivos en Carbono, en este caso los países que generen y/o asignen mayores recursos a actividades intensivas en carbono obtendrán una puntuación cercana a 0 puntos, mientras los que generen y/o asignen menores recursos a estas actividades obtendrán una puntuación más cercana a 1 punto.

En este sentido, la valoración del IFS dependerá de la puntuación obtenida en cada una de las cuatro variables. Por ejemplo, si un país tiene altos ingresos sostenibles y altos presupuestos sostenibles, podría obtener una puntuación de 1 punto en ambas variables. Sin embargo, si también tiene altos ingresos intensivos en carbono y altos presupuestos intensivos en carbono, su puntuación en estas variables sería de 0 puntos, resultado en una puntuación final de 2 sobre 4 puntos, ubicando al país en el nivel “MEDIO” de finanzas sostenibles. En la siguiente tabla se detalla un ejemplo hipotético de la estimación del IFS.

**Tabla 4. Ejemplo hipotético de la estimación del IFS**

Valoración de las variables	Ecuación operativa	Resultado del IFS	Clasificación de los 7 niveles de finanzas sostenibles
IS: 1.0 PS: 1.0 IIC: 1.0 PIC: 1.0	IS + PS + IIC + PIC = IFS	1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.0 = 4.0  El país obtendría una puntuación de 4.0 puntos, ubicándose en un nivel “MUY ALTO” de finanzas sostenibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MUY ALTO Puntuación: 3.5 - 4.0</li> <li>● ALTO Puntuación: 2.9 - 3.4</li> <li>● MEDIO ALTO Puntuación: 2.3 - 2.8</li> <li>● MEDIO Puntuación: 1.8 - 2.2</li> <li>● MEDIO BAJO Puntuación: 1.2 - 1.7</li> <li>● BAJO Puntuación: 0.6 - 1.1</li> <li>● MUY BAJO Puntuación: 0.0 - 0.5</li> </ul>
IS: 0.5 PS: 0.3 IIC: 0.4 PIC: 0.2	IS + PS + IIC + PIC = IFS	0.5 + 0.3 + 0.4 + 0.2 = 1.4  El país obtendría una puntuación de 1.4 puntos, ubicándose en un nivel “MEDIO BAJO” de finanzas sostenibles.	

Fuente: Elaboración propia.



El objetivo del IFS es proporcionar una evaluación clara y precisa de los flujos de financiamiento relacionados con el cambio climático y desarrollo sostenible, y cómo estos se comparan con los flujos que podrían ser contraproducentes para lograr estos esfuerzos. Esto con el fin de identificar las brechas y oportunidades de financiamiento y guiar a los gobiernos y actores internacionales en la toma de decisiones para promover finanzas más sostenibles en los países en desarrollo.

El IFS es una herramienta que está en constante actualización y mejora metodológica, demostrando su compromiso como referente para el análisis y diseño de políticas financieras sostenibles, contribuyendo a la transformación económica y financiera en los países en desarrollo.

## 2. Implementación del Índice de Finanzas Sostenibles

El Índice de Finanzas Sostenibles se implementó en los 20 países más emisores de gases contaminantes en América Latina y el Caribe, con el propósito de identificar brechas, retos y oportunidades en la transformación de los sistemas de finanzas públicas. Su objetivo principal es promover prácticas financieras más sostenibles que impulsen el desarrollo económico, mitiguen los impactos del cambio climático y fomenten el cumplimiento de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Acuerdo de París.

Esta sección está dividida en dos partes. En la primera, se presentan los resultados regionales de las variables cualitativas, analizando indicadores clave relacionados con aspectos ambientales, económicos, financieros, políticos y sociales. La segunda parte aborda los resultados de las variables cuantitativas, que reflejan el nivel de finanzas sostenibles de cada país.

### 2.1 Contexto regional: Análisis de las variables cualitativas

América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, caracterizada además por su marcada desigualdad en términos ambientales, económicos, políticos y sociales. Estas desigualdades se reflejan de manera diversa en que los países de la región han abordado la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. Mientras algunos países han avanzado en la adopción de marcos regulatorios para fomentar las energías renovables y la eficiencia energética, otros aún dependen en gran medida de industrias extractivas y de fuentes de energías no renovables.

El análisis de estos indicadores cualitativos ofrece un panorama integral de la región permitiendo identificar las diferencias que presentan los países para adoptar prácticas financieras más sostenibles. Además, estos indicadores se complementan con los resultados del IFS, obteniendo una perspectiva de cómo los sistemas financieros de la región responden a los desafíos globales.

#### 2.1.1 Indicadores ambientales

América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas del mundo en recursos naturales, incluyendo extensos bosques tropicales, una biodiversidad excepcional y abundantes recursos hídricos que sustentan ecosistemas vitales y comunidades humanas. Esta riqueza natural desempeña un papel fundamental en la regulación del clima global y en la provisión de sistemas ecosistémicos.

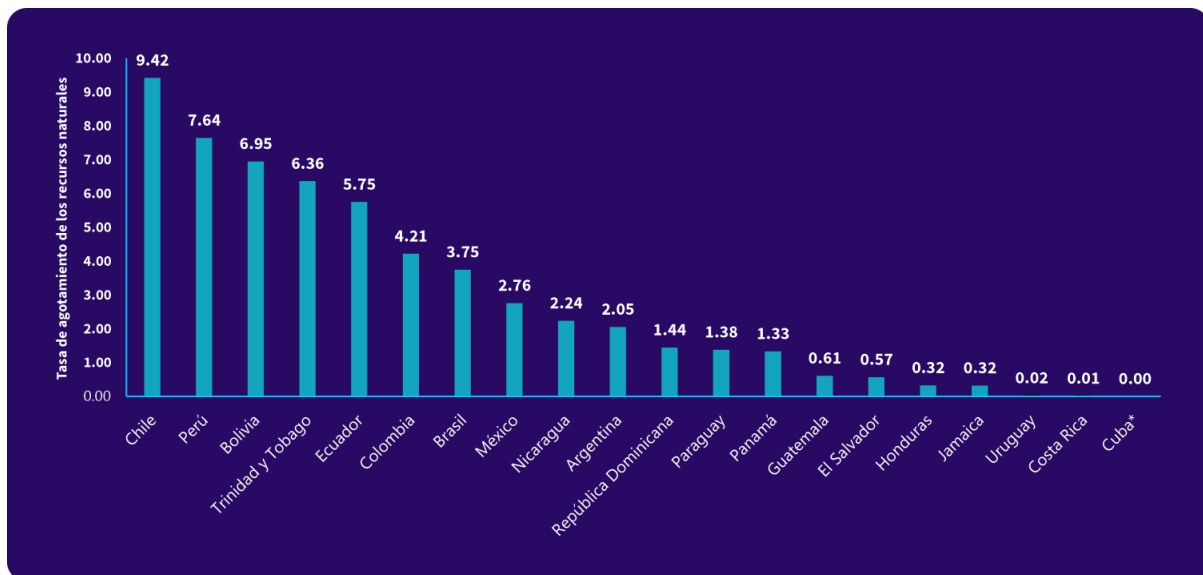
No obstante, la región enfrenta desafíos importantes debido a su alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y la degradación ambiental. Fenómenos como el aumento de la temperatura global, la pérdida acelerada de biodiversidad, la deforestación, la contaminación del agua y del aire, así como eventos climáticos extremos como huracanes, sequías e inundaciones, han incrementado su frecuencia e intensidad en los últimos años. Para comprender la magnitud de estos desafíos y diseñar estrategias efectivas para enfrentarlos, es esencial analizar una variedad de indicadores ambientales.

Un indicador clave en este contexto es la tasa de agotamiento de los recursos naturales, desarrollada por el Banco Mundial. Este indicador mide el impacto de actividades extractivas como la explotación

forestal, energética y minera sobre el capital natural de un país. En 2021, países como Chile con 9.42%, Perú con 7.64% y Bolivia con 6.95% registraron las tasas más altas de agotamiento en la región, lo que evidencia una intensa presión sobre sus recursos naturales, impulsadas principalmente por la minería y la extracción energética, actividades que, plantean importantes desafíos ambientales.

Por otro lado, naciones como Jamaica con 0.32%, Uruguay con 0.02% y Costa Rica con 0.01% presentaron tasas notablemente más bajas, lo que podría reflejar una menor dependencia de actividades extractivas y, en algunos casos, un enfoque más sostenible en la gestión de sus recursos. En la siguiente gráfica se visualizan estas tendencias, que permiten identificar patrones y diseñar estrategias para enfrentar los desafíos ambientales generados por la explotación de los recursos naturales.

**Gráfica 1. Tasa de agotamiento de los recursos naturales en 2021**



(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2021), consultados en 2024.

El Índice de Riesgo Climático, elaborado por Germanwatch, evalúa el grado de afectación de los países frente a eventos climáticos extremos, como tormentas, inundaciones y olas de calor.<sup>2</sup> En 2021, Bolivia con una valoración de 19.7, Paraguay con 30.0, Chile con 33.0 y Brasil con 33.7 figuraron entre las naciones con mayor riesgo climático en América Latina y el Caribe. Esto refleja su alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales que, impulsados por el cambio climático, han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad. Por otro lado, países como Costa Rica, Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago con una valoración de 118.0 se posicionaron como los menos vulnerables, probablemente debido a la implementación de sistemas de adaptación y resiliencia más robustos, que incluyen mejoras en infraestructura y planes de gestión del riesgo. La siguiente gráfica ilustra estas diferencias.

<sup>2</sup> El Índice de Riesgo Climático establece que a menor puntuación obtenida, mayor es el riesgo climático asociado. Para mayor información, puede consultarse en: [Global Climate Risk Index | Germanwatch e.V.](https://www.germanwatch.org/en/global-climate-risk-index/)



Gráfica 2. Índice del riesgo climático en 2021



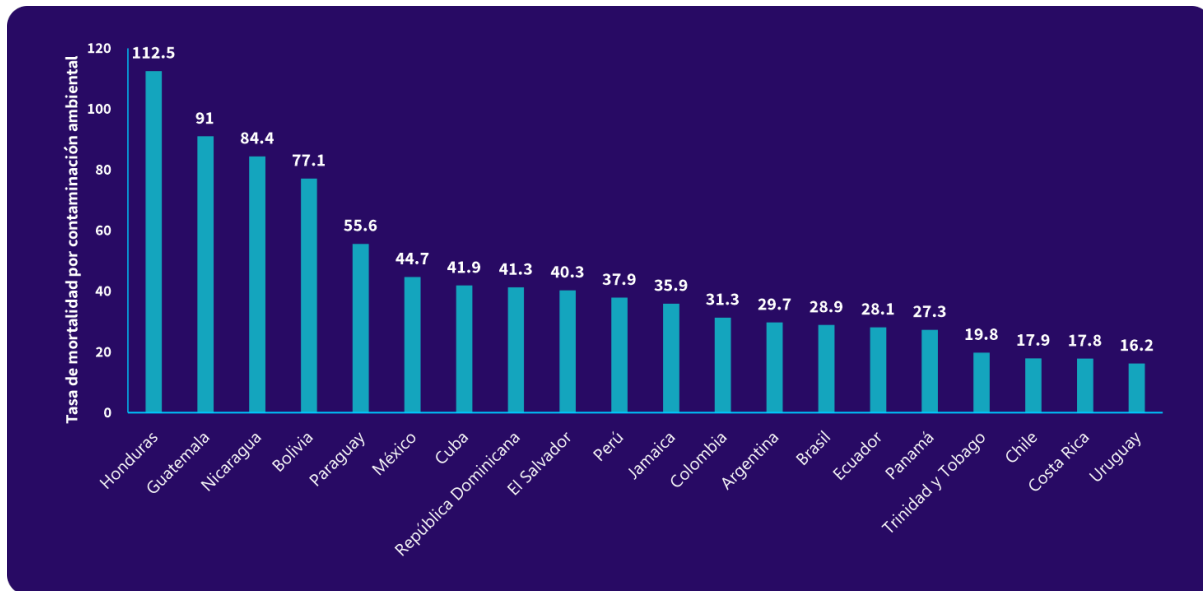
(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del Germanwatch (2021), consultados en 2024.

Otro aspecto crítico es la calidad del aire y su impacto en la salud pública. La tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire es un indicador que mide muertes relacionadas con la exposición a partículas finas y otros contaminantes. Según datos del Banco Mundial para 2019, Honduras con 112.4 muertes por cada 100 mil habitantes, Guatemala con 91.0 y Nicaragua con 84.4 lideraron las tasas más altas de mortalidad, reflejando la urgencia de abordar problemas como el uso de combustibles contaminantes y la quema de biomasas.

En contraste, países como Chile con 17.9, Costa Rica con 17.8 y Uruguay con 16.2 mostraron las tasas más bajas, reflejando ambientes relativamente más limpios y posiblemente políticas más efectivas de control de emisiones y monitoreo ambiental. La siguiente gráfica detalla estas tasas para los 20 países analizados.

**Gráfica 3. Tasa de mortalidad por contaminación del aire en el hogar y en el ambiente en 2019**



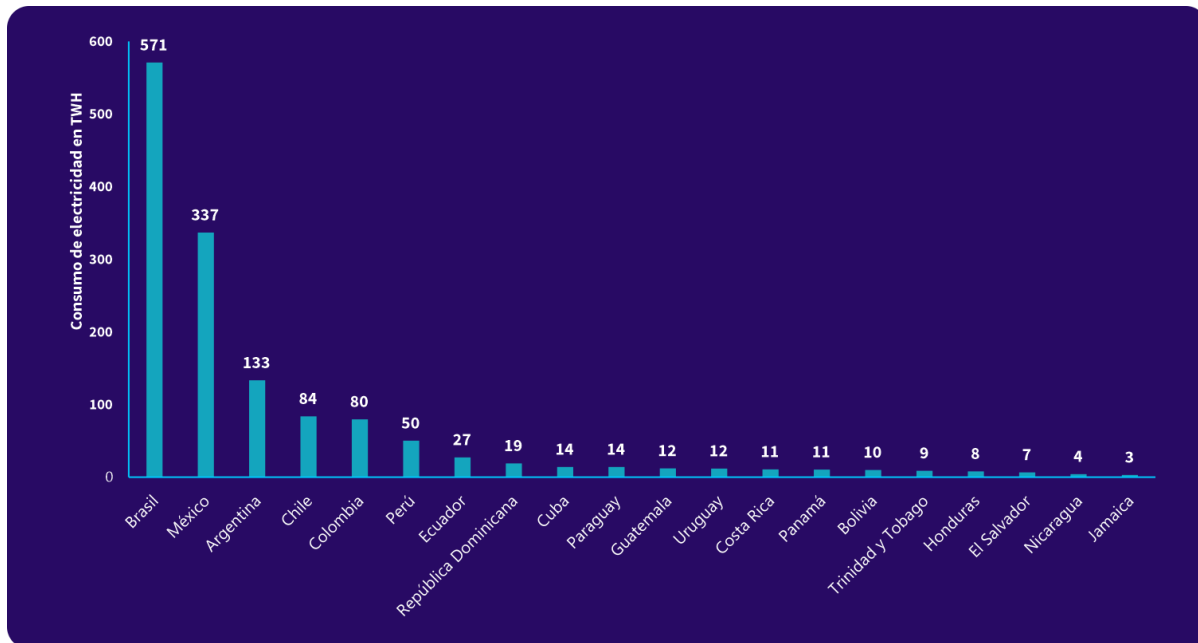
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019), consultados en 2024.

En cuanto al consumo de energía eléctrica, los datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) de 2021 evidencian marcadas diferencias en la demanda energética de los países de la región. Brasil lideró el consumo total con 571 TWh,<sup>3</sup> seguido de México con 337 TWh y Argentina con 133 TWh, cifras que reflejan tanto el tamaño de sus economías como su nivel de industrialización.

Por otro lado, países más pequeños como El Salvador con 7 TWh, Nicaragua con 4 TWh y Jamaica con 1 TWh registraron los consumos más bajos, consistentes con su menor escala económica y poblacional. La siguiente gráfica ilustra el consumo de energía eléctrica en los países analizados.

<sup>3</sup> TWh, o teravatio-hora, es una unidad de medida de energía empleada para cuantificar el consumo, la producción o la transferencia de electricidad a gran escala.

**Gráfica 4. Consumo de energía eléctrica en Teravatio hora en 2021**

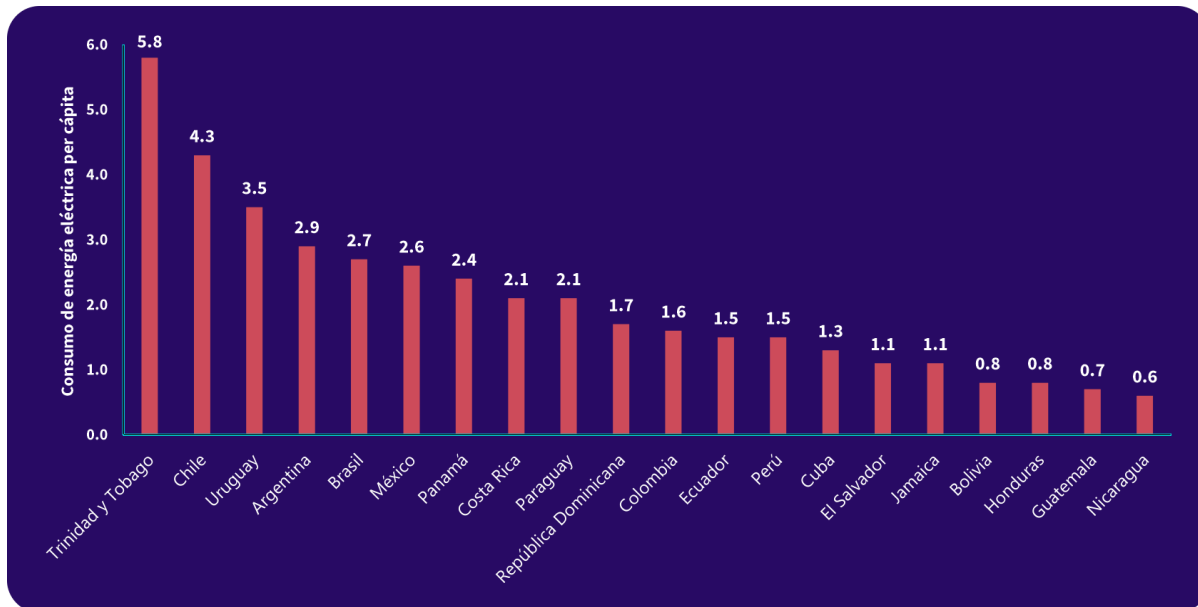


Fuente. Elaboración propia con datos del IEA (2021), consultados en 2024.

El análisis de consumo energético per cápita revela otra dimensión de las diferencias en el uso de recursos. Trinidad y Tobago, con un consumo de 5.8 MWh por habitante,<sup>4</sup> encabezó la región, seguido de Chile con 4.3 MWh y Uruguay con 3.5 MWh, lo que está relacionado con una mayor dependencia del sector energético. En el extremo opuesto, Bolivia y Honduras con 0.8 MWh, Guatemala con 0.7 MWh y Nicaragua con 0.6 MWh presentaron los menores consumos per cápita, como se observa en la siguiente gráfica.

<sup>4</sup> MWh, o megavatio-hora, es una unidad de medida de energía utilizada para cuantificar la electricidad generada, consumida o almacenada durante un período específico.

**Gráfica 5. Consumo de energía per cápita en Megavatio hora en 2021**



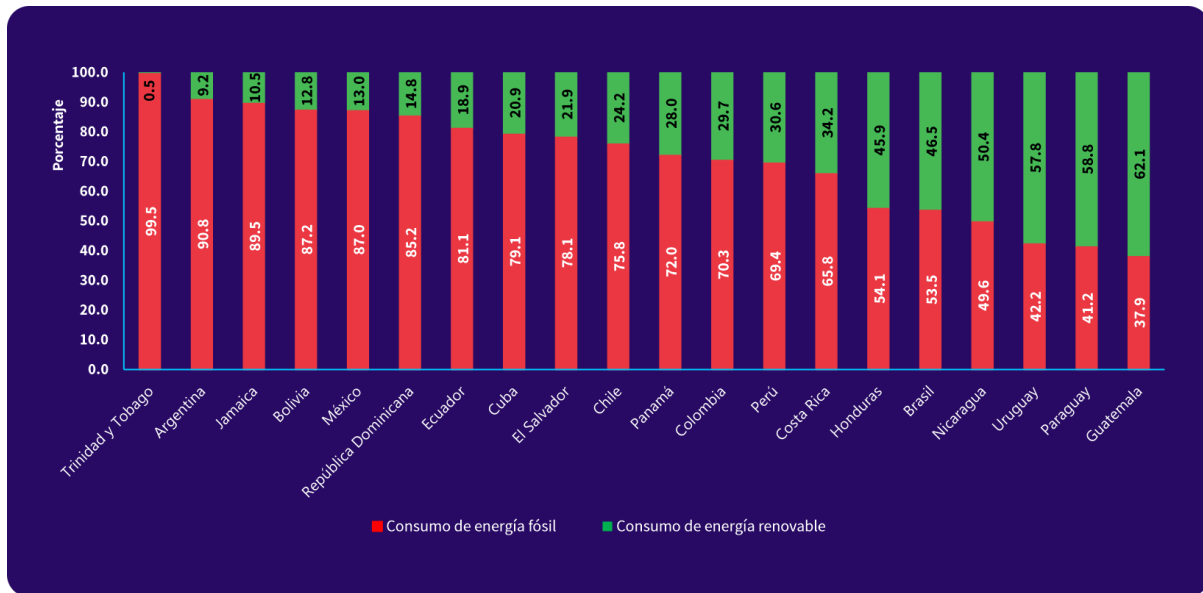
Fuente. Elaboración propia con datos del IEA (2021), consultados en 2024.

Al analizar las fuentes de energía utilizadas en la región, con datos del Banco Mundial, se observa que una proporción significativa del consumo energético de varios países sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. En 2022, Trinidad y Tobago registró un 99.5% de su consumo energético proveniente de fuentes fósiles, seguido por Argentina con un 90.8% y Jamaica con 89.5%. Esta alta dependencia de petróleo, gas natural y carbón no solo aumenta las emisiones de gases contaminantes, sino que también resalta los desafíos asociados con la transición hacia fuentes de energía más limpia y sostenibles.

No obstante, algunos países de la región están avanzando hacia una matriz energética más sostenible, destacando por su creciente uso de fuentes renovables. Guatemala, con un 62.1%, Paraguay con 58.8% y Uruguay con 57.8% lideraron el consumo de energía renovable. Esta tendencia refleja un esfuerzo por diversificar las fuentes de energía, reducir la huella de carbono y promover la sostenibilidad.

Estas diferencias en las fuentes de energía utilizadas en la región resaltan la urgencia de una transición energética que promueva el uso de energías renovables, con el fin de mitigar el cambio climático, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la seguridad energética a largo plazo. La gráfica a continuación ilustra estas tendencias, reflejan las disparidades en el uso de energías renovables y no renovables en los países de estudio.

**Gráfica 6. Consumo de energía por tipo de fuente: fósil versus renovable (% del total) en 2022**

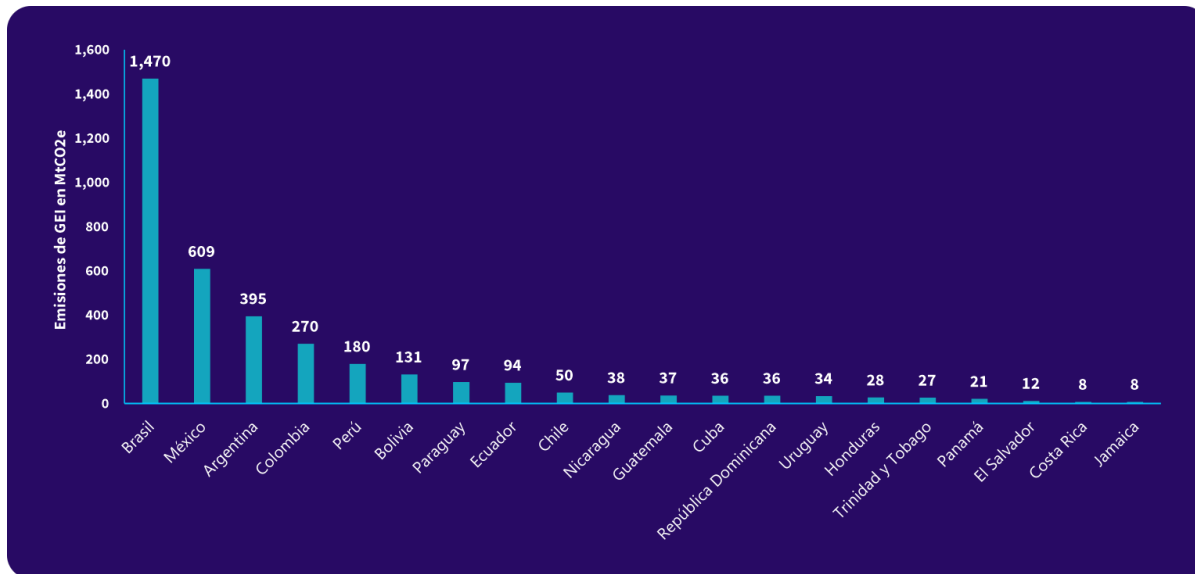


Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2022), consultados en 2024.

En cuanto a las emisiones de GEI, datos del ClimateWatch de 2021 ubican a Brasil como el principal emisor de la región con 1,469 millones de toneladas de carbono equivalente (MtCO<sub>2e</sub>), lo que representa el 3.09% de las emisiones globales y lo ubica en el séptimo lugar a nivel mundial. Estas emisiones se distribuyen principalmente en el sector agrícola con el 34%, el energético con el 32% y el cambio de uso del suelo y deforestación con el 25%, destacando la contribución de la deforestación en la Amazonía.

México ocupó el segundo lugar a nivel regional y decimoquinto a nivel global con 609 MtCO<sub>2e</sub>, con un 67% proveniente del sector energético, seguido por Argentina con 394 MtCO<sub>2e</sub>, donde el 48% de las emisiones están relacionadas con la energía. Por otro lado, los menores emisores regionales fueron El Salvador con 12 MtCO<sub>2e</sub>, Costa Rica y Jamaica con 8 MtCO<sub>2e</sub>, representando menos del 0.03% de las emisiones globales. Estas cifras reflejan el tamaño de la economía y la matriz energética de cada país, como se muestra en la siguiente gráfica.

**Gráfica 7. Emisiones de GEI en MtCO2e en 2021**

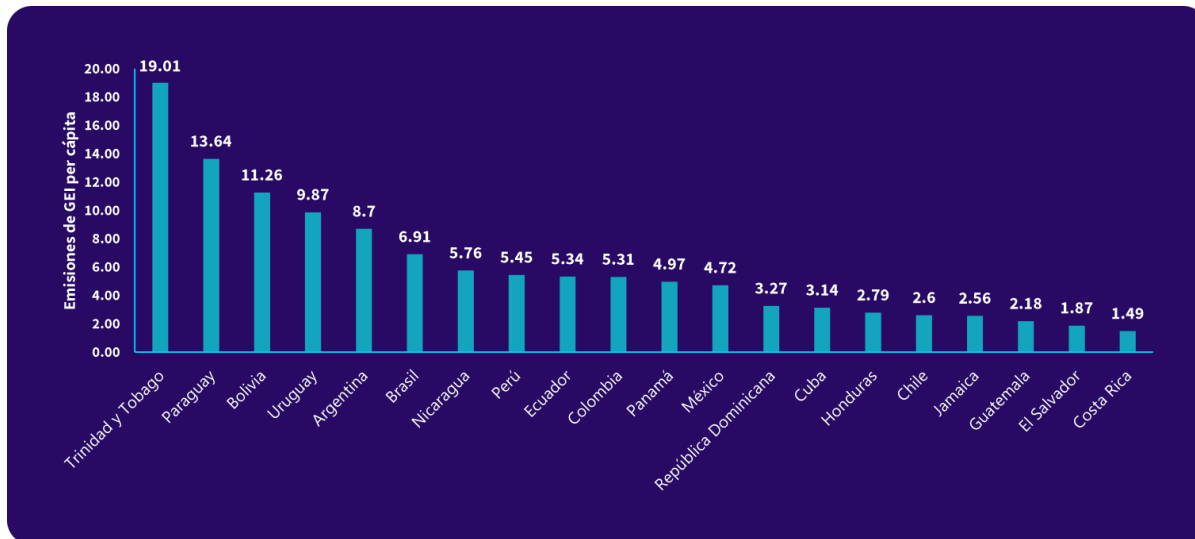


Fuente. Elaboración propia con datos del ClimateWatch (2021), consultados en 2024.

En cuanto a las emisiones de GEI per cápita, Trinidad y Tobago ocupa el primer lugar con 19.1 MtCO2e per cápita, seguido de Paraguay con 13.6 MtCO2e y Bolivia con 11.26 MtCO2e. Estos altos valores están asociados a economías dependientes de combustibles fósiles, que generan emisiones significativas. Por otro lado, los países con menores emisiones per cápita fueron Guatemala con 2.18 MtCO2e, El Salvador con 1.87 MtCO2e y Costa Rica con 1.49 MtCO2e, reflejando una menor intensidad de carbono en sus actividades económicas y energéticas.

Estos indicadores son fundamentales para evaluar la responsabilidad ambiental de cada país y diseñar estrategias diferenciadas para reducir las emisiones. Las discrepancias entre las naciones muestran la urgencia de implementar políticas integrales que consideren la transición energética, la eficiencia en el uso de los recursos y la mitigación del cambio climático. La siguiente gráfica ilustra las tendencias en emisiones per cápita.

**Gráfica 8. Emisiones de GEI en MtCO2e/per cápita en 2021**



Fuente. Elaboración propia con datos del ClimateWatch (2021), consultados en 2024.

El análisis de los indicadores ambientales en América Latina y el Caribe evidencian una paradoja, una región rica en recursos naturales y biodiversidad, pero altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Esta vulnerabilidad, afectada por el aumento de eventos climáticos extremos, la deforestación, y la dependencia de combustibles fósiles, evidencian la necesidad urgente de adoptar medidas más efectivas para proteger el medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible.

En este sentido, la región debe mitigar los impactos del cambio climático y adaptarse a sus efectos, para ello, es crucial fortalecer la cooperación internacional y desarrollar estrategias de adaptación basadas en las particularidades de cada país. Esta transición no solo contribuirá a la lucha global contra el cambio climático, sino que también garantizará un desarrollo más justo, equitativo y sostenible para la región.

### 2.1.2 Indicadores económicos

El análisis de los indicadores económicos en América Latina y el Caribe resulta esencial para comprender las dinámicas de desarrollo, los retos estructurales y las oportunidades de la región en un contexto globalizado. La diversidad económica y social reflejan grandes disparidades en términos económicos y niveles de desarrollo, lo que genera una amplia brecha en ingresos, gastos y calidad de vida entre los países.

Para evaluar el desempeño económico regional, se debe examinar diferentes métricas como el Producto Interno Bruto (PIB), tanto en cifras absolutas como per cápita, así como los flujos de ingresos y egresos nacionales. Este análisis permite identificar las fortalezas y debilidades, guiar las estrategias para transitar a un crecimiento económico sostenible y fomentar la integración regional.

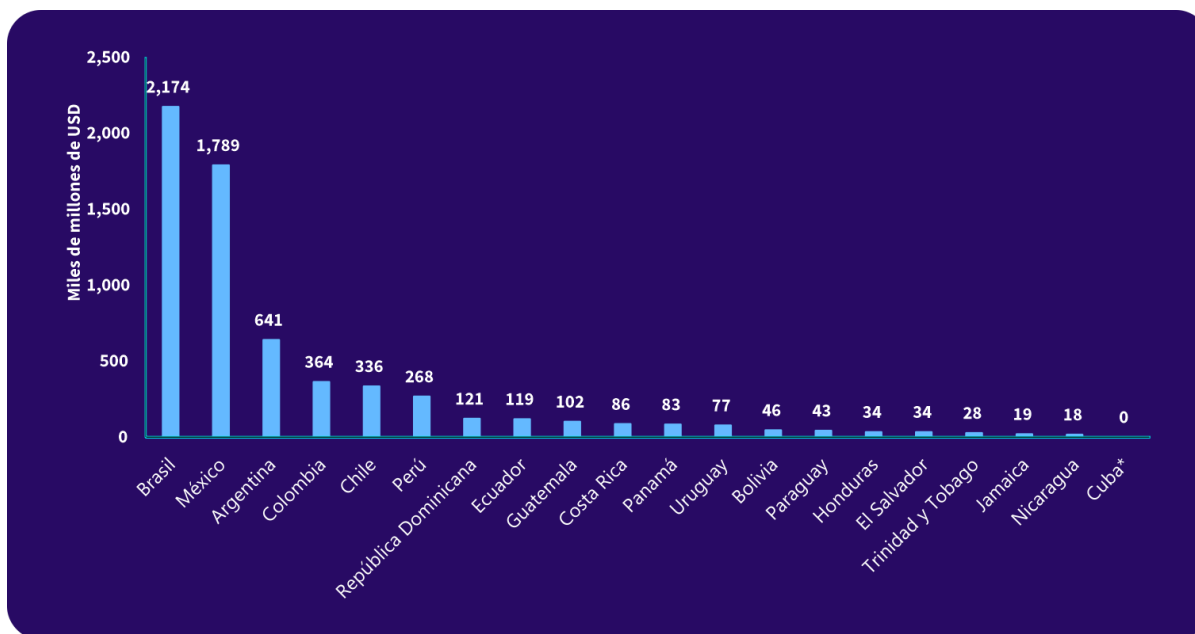
Según datos del Banco Mundial en 2023, el PIB mundial alcanzó los 105,435 mil millones de dólares, de los cuales América Latina y el Caribe aportaron 7,094 mil millones de dólares, representando el



6.73% del total global. Dentro de la región, Brasil con un PIB de 2,174 mil millones de dólares, México con 1,789 mil millones y Argentina con 641 mil millones de dólares, lideraron como las principales economías, concentrando el 64% del PIB regional, posicionándose como actores clave para la estabilidad económica y el crecimiento de la región.

En contraste, las economías más pequeñas incluyen a Trinidad y Tobago con 28 mil millones de dólares, Jamaica con 19 mil millones y Nicaragua con 17 mil millones de dólares, cifras que evidencian diferencias estructurales significativas. Estas economías más pequeñas enfrentan desafíos únicos, como una mayor dependencia de sectores específicos y limitaciones para atraer inversiones extranjeras. La gráfica siguiente presenta una comparación del PIB de los países de la región, destacando las brechas entre las economías más grandes y las más pequeñas.

**Gráfica 9. Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares en 2023**



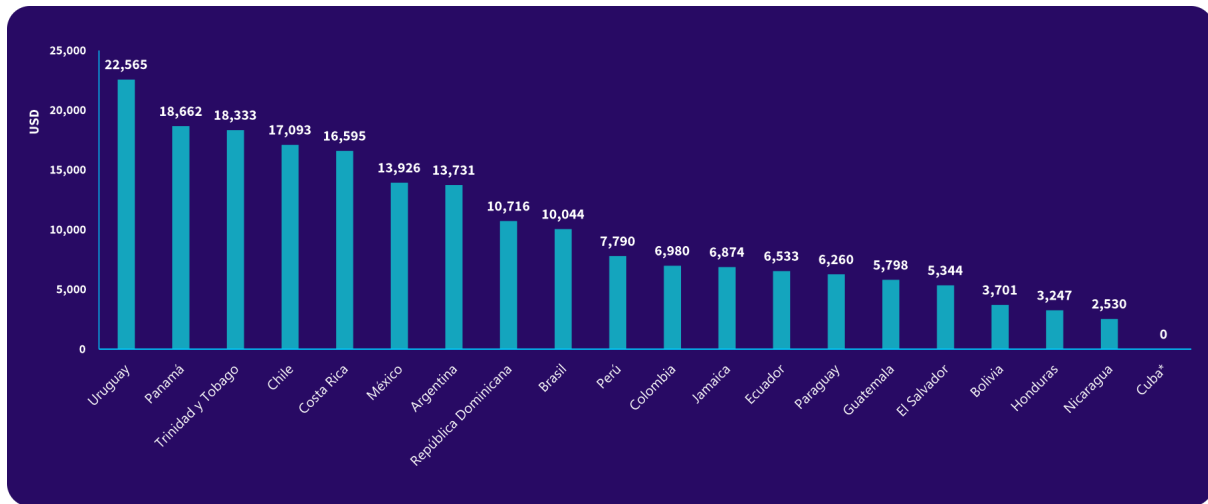
(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), consultados en 2024.

El PIB per cápita, que mide el ingreso promedio por habitante y sirve como un indicador aproximado del nivel de vida, revela marcadas desigualdades en la región. Uruguay lidera con un PIB per cápita de 22,565 dólares, seguido de Panamá con 18,622 dólares y Trinidad y Tobago con 18,333 dólares. Estos valores reflejan economías que, aunque relativamente pequeñas en tamaño total, logran una distribución más equitativa de la riqueza.

En el otro extremo, Bolivia con 3,701 dólares, Honduras con 3,247 dólares y Nicaragua con 2,530 dólares registran los niveles más bajos del PIB per cápita. La gráfica siguiente muestra las diferencias en el PIB per cápita entre los países de estudio, permitiendo una visión más clara de las desigualdades económicas que persisten en la región.

**Gráfica 10. Producto Interno Bruto per cápita en dólares en los países de estudio en 2023**



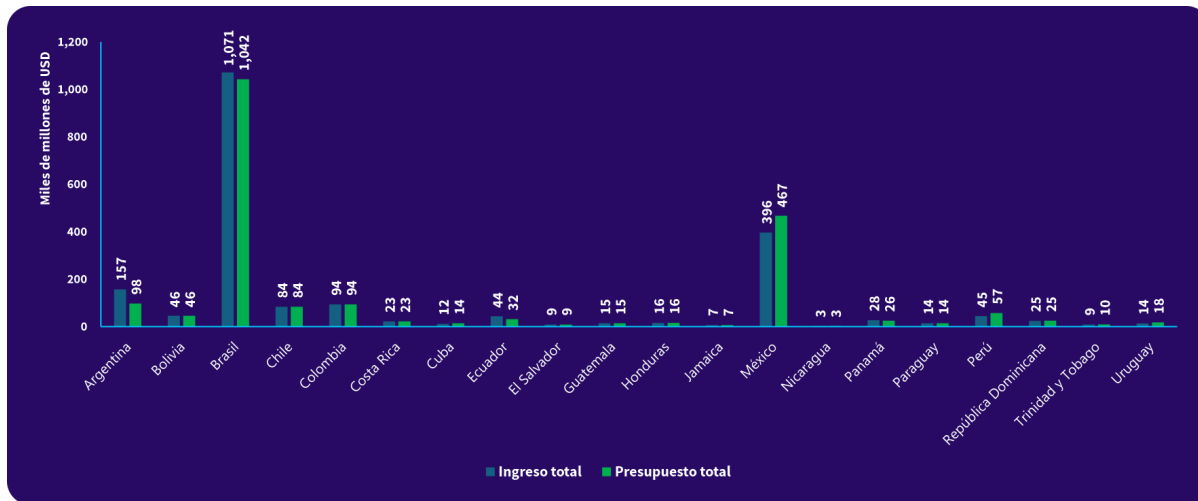
(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), consultados en 2024.

El análisis de los ingresos y egresos en América Latina y el Caribe durante 2023 evidencia diversas disparidades entre las economías de la región, destacando diferencias tanto en la capacidad fiscal como en el gasto público. Brasil, la mayor economía de la región, lideró con 1,071 mil millones de dólares y un presupuesto de 1,040 mil millones de dólares, lo que demuestra su gran capacidad de recaudación y gasto público. México ocupa el segundo lugar con ingresos de 396 mil millones de dólares y un presupuesto de 467 mil millones de dólares, mientras que Argentina reportó ingresos de 157 mil millones de dólares frente a un presupuesto de 98 mil millones de dólares.

En el extremo opuesto, los países con los ingresos y presupuestos más bajos fueron El Salvador, Jamaica y Nicaragua. El Salvador y Jamaica registraron ingresos y presupuestos de 9 mil millones de dólares y 7 mil millones de dólares, respectivamente. Nicaragua reportó ingresos y egresos de apenas 3 mil millones de dólares, lo que representa 354 veces menos ingresos y 460 veces menor presupuesto que Brasil. Estas cifras ponen de manifiesto las brechas económicas entre los países más grandes y los más pequeños de la región. La gráfica siguiente ilustra claramente estas diferencias.

**Gráfica 11. Comparación entre ingresos y egresos en miles de millones de dólares en 2023**

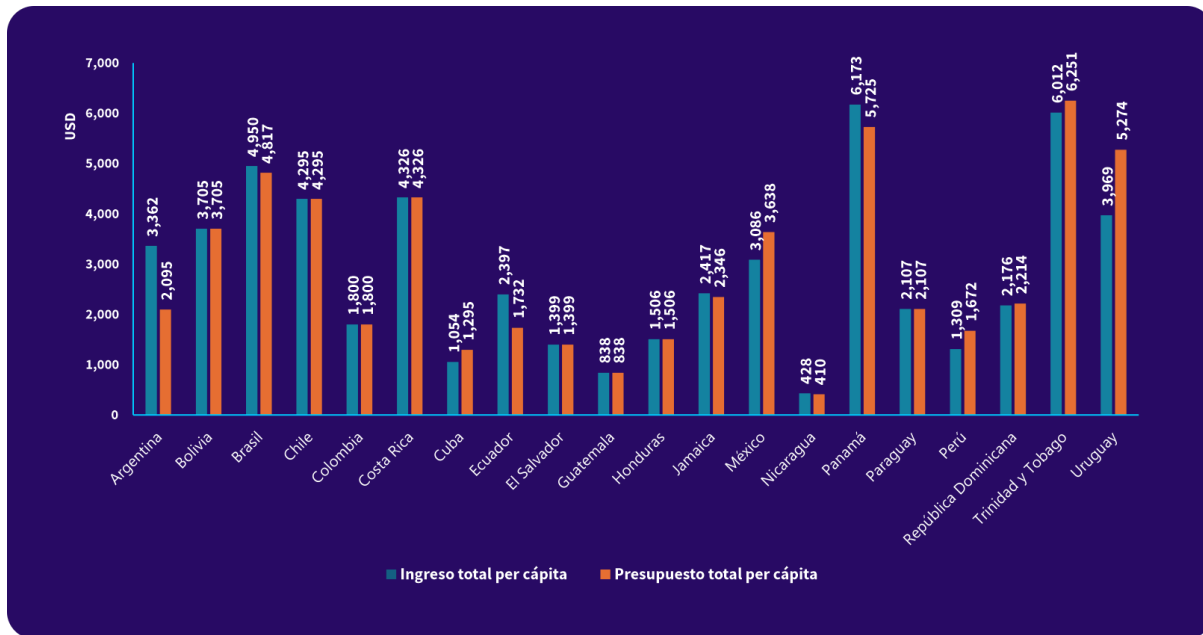


Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

El análisis desde la perspectiva per cápita presenta un panorama diferente. Panamá lideró en ingresos per cápita con 6,173 dólares, seguido de Trinidad y Tobago con 6,012 dólares y Brasil con 4,950 dólares, lo que refleja una mayor capacidad de recaudación relativa a la población en estos países. En contraste, Cuba con 1,054 dólares, Guatemala con 838 dólares y Nicaragua con 428 dólares registraron los niveles más bajos de ingresos per cápita, evidenciando limitaciones en la capacidad fiscal que afectan la inversión en servicios públicos y de desarrollo.

En cuanto a los egresos per cápita, Trinidad y Tobago se posicionó como el país con mayores gastos, con 6,521 dólares, seguido de Panamá con 5,725 dólares y Uruguay con 5,274 dólares. Por otro lado, Cuba con 1,295 dólares, Guatemala con 838 dólares y Nicaragua con 410 dólares tuvieron los menores egresos per cápita, lo que implica limitaciones en la inversión pública y en la provisión de servicios fundamentales en estos países. La gráfica a continuación muestra en detalle la comparación de ingresos y egresos per cápita en la región.

**Gráfica 12. Comparación entre ingresos y egresos per cápita en dólares en 2023**



Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

El análisis de los indicadores económicos en la región muestra un panorama de grandes contrastes, donde países como Brasil y México desempeñan un rol destacado en el contexto regional y global, mientras que economías más pequeñas, como Nicaragua y Jamaica, enfrentan diversas limitaciones estructurales que obstaculizan su desarrollo. Estas desigualdades reflejan profundas brechas en términos de PIB, capacidad fiscal e inversión en servicios públicos.

Para que América Latina y el Caribe logre avanzar hacia un desarrollo equitativo, es vital implementar políticas orientadas a reducir las desigualdades económicas y sociales, impulsando un crecimiento inclusivo que garantice la generación de empleo de calidad, el acceso universal a servicios básicos y en la diversificación de sus economías.

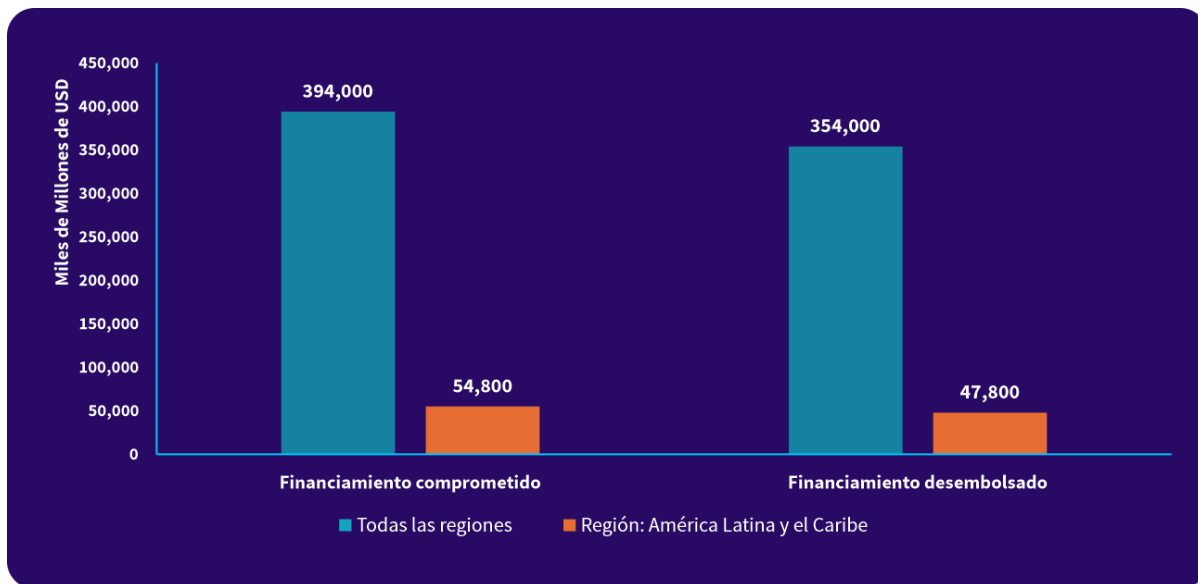
### 2.1.3 Indicadores de financiamiento y cooperación internacional

El análisis de los indicadores de financiamiento en América Latina y el Caribe es fundamental para comprender cómo los recursos internacionales apoyan los esfuerzos de la región frente a desafíos globales como la protección de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible. Estos flujos financieros no solo reflejan la disponibilidad de los recursos, sino también la estructura de los instrumentos utilizados, como préstamos y subvenciones, lo que determina en gran medida la capacidad de los países para implementar políticas efectivas en estos ámbitos.

Con datos provenientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas del Instituto de Estocolmo, en 2021, el financiamiento internacional comprometido para el desarrollo global alcanzó los 394 mil millones de dólares, con un desembolso efectivo de 354 mil millones de dólares. De este total, América Latina y el

Caribe recibió 54 mil millones de financiamiento comprometido y 47 mil millones de dólares desembolsados, lo que representa el 13% del financiamiento global. La siguiente gráfica compara estas cifras.

**Gráfica 13. Financiamiento total para el desarrollo comprometido y desembolsado en miles de millones de dólares en 2021**



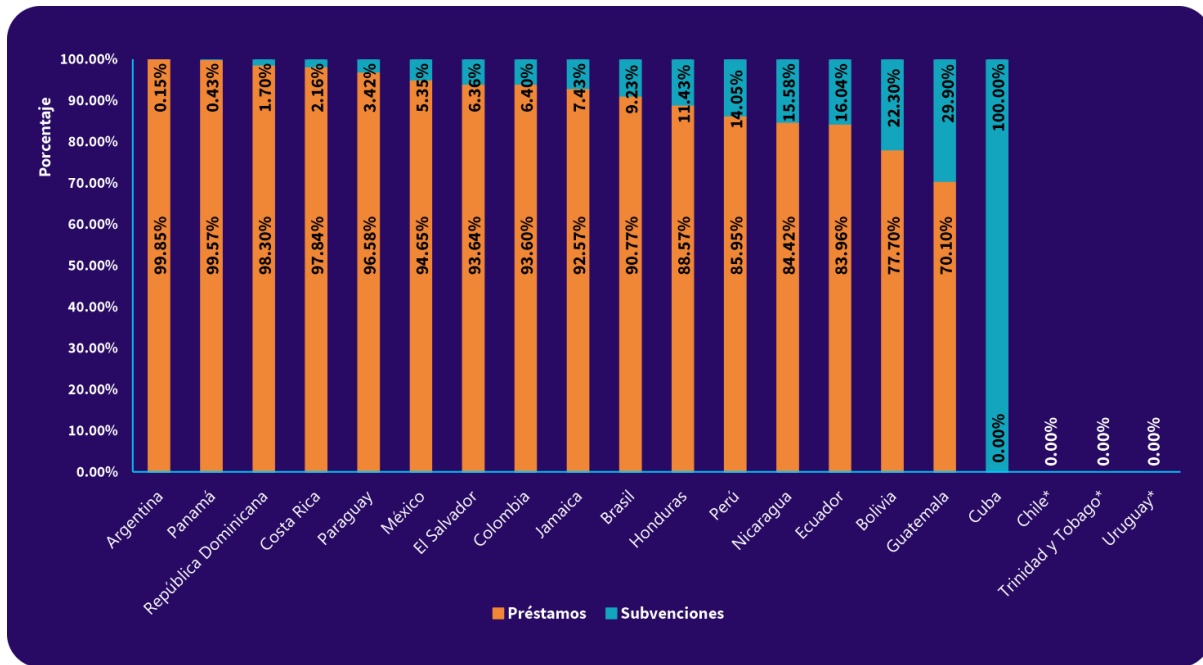
Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

En términos específicos, el financiamiento para los sectores de biodiversidad y el cambio climático a nivel global sumó 63 mil millones de dólares en compromisos, pero solo 17 mil millones fueron desembolsados. América Latina y el Caribe recibió 10 mil millones de dólares en compromisos para estos sectores, aunque apenas 2 mil millones llegaron como desembolsados, lo que evidencia desafíos en la implementación y ejecución de estos recursos.

Un aspecto crítico del financiamiento internacional en la región es la prevalencia de los préstamos sobre las subvenciones. Del total comprometido para la biodiversidad y el cambio climático en América Latina y el Caribe, el 92.6% (9 mil millones de dólares) se otorgó en préstamos, mientras que solo el 7.4% (763 millones de dólares) correspondió a subvenciones. Esta distribución refleja la dependencia de los países de la región en instrumentos que generan obligaciones financieras a largo plazo, lo que limitaría su capacidad de acción, especialmente en aquellas economías débiles.

Países como Argentina, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Paraguay recibieron más del 95% de su financiamiento a través de préstamos, lo que los posiciona en una situación de alto endeudamiento para cumplir con objetivos climáticos y de biodiversidad. En contraste, naciones como Bolivia, Guatemala y Cuba destacaron por recibir un porcentaje significativo de su financiamiento en forma de subvenciones, siendo Cuba el único país que recibió el 100% de su apoyo bajo esta modalidad, lo que muestra un enfoque diferenciado en el tipo de apoyo financiero otorgado. La gráfica siguiente ilustra el financiamiento que recibieron los países por tipo de instrumento.

**Gráfica 14. Financiamiento comprometido para la biodiversidad y el cambio climático con respecto del total del financiamiento para el desarrollo por tipo de instrumentos: préstamos versus subvenciones en porcentaje en 2021**



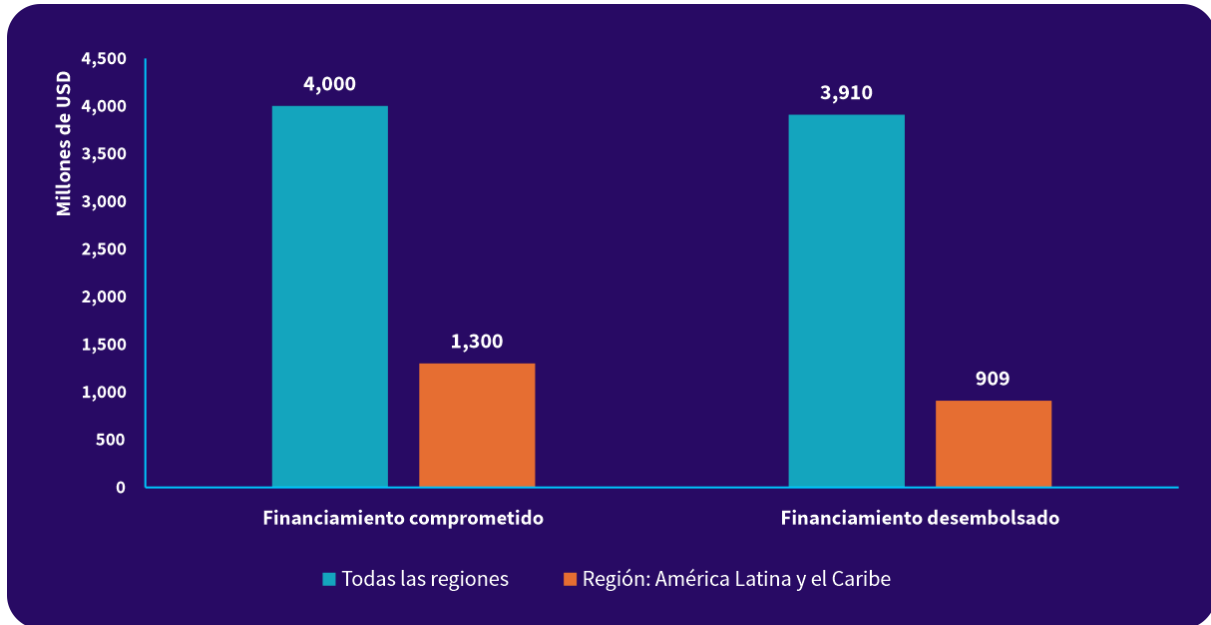
(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

A nivel global, en 2021 se comprometieron 4.0 mil millones de dólares para el sector de biodiversidad, de los cuales se desembolsaron 3.9 mil millones de dólares, reflejando una alta tasa de efectividad en los desembolsos. América Latina y el Caribe recibió 1.3 mil millones de dólares comprometidos (32.5% del total global) y 909 millones de dólares desembolsados. La gráfica siguiente ilustra esta comparativa.



**Gráfica 15. Financiamiento total para el desarrollo comprometido y desembolsado destinado a la biodiversidad en miles de millones de dólares en 2021**

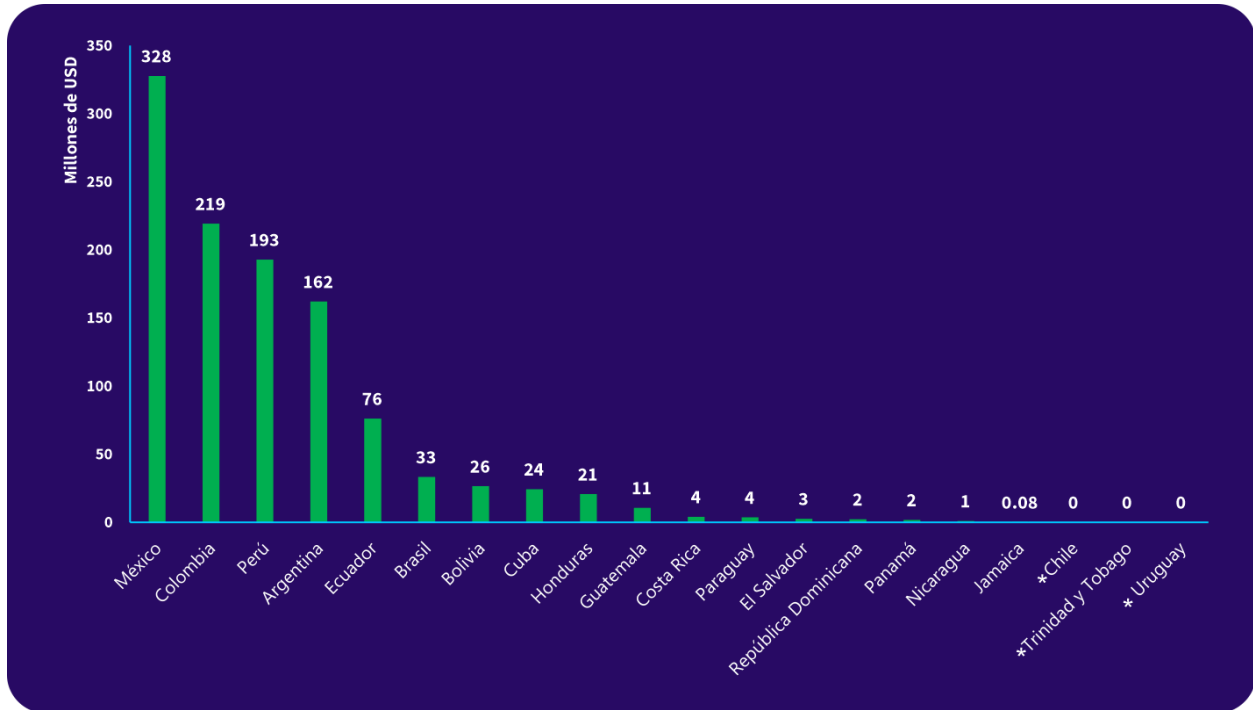


Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

México fue el principal receptor en la región, con 328 millones de dólares comprometidos, cifra que representa el 5.14% de su financiamiento total para el desarrollo. De este monto, el 87.61% (287 millones de dólares) se otorgó vía préstamos y el 12.39% (41 millones de dólares) como subvenciones. Colombia ocupó la segunda posición con 219 millones de dólares comprometidos, donde el 64.75% (141 millones de dólares) se destinó en préstamos y el 32.25% (77 millones de dólares) en subvenciones. Perú, en el tercer lugar, recibió 193 millones de dólares, con un 68.84% (132 millones de dólares) en préstamos y un 31.16% (60 millones de dólares) en subvenciones.

En el extremo opuesto, países como República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Jamaica recibieron menos de 2.0 millones de dólares, lo que representa menos del 0.15% del financiamiento global destinado a la biodiversidad. Esta discrepancia evidencia la necesidad de implementar estrategias que aseguren una distribución más equitativa y con un mayor acceso al financiamiento por parte de los países de la región. La siguiente gráfica muestra el financiamiento comprometido para la conservación de la biodiversidad en los países analizados.

**Gráfica 16. Flujo de financiamiento comprometido para la biodiversidad en los países de estudio en millones de dólares en 2021**

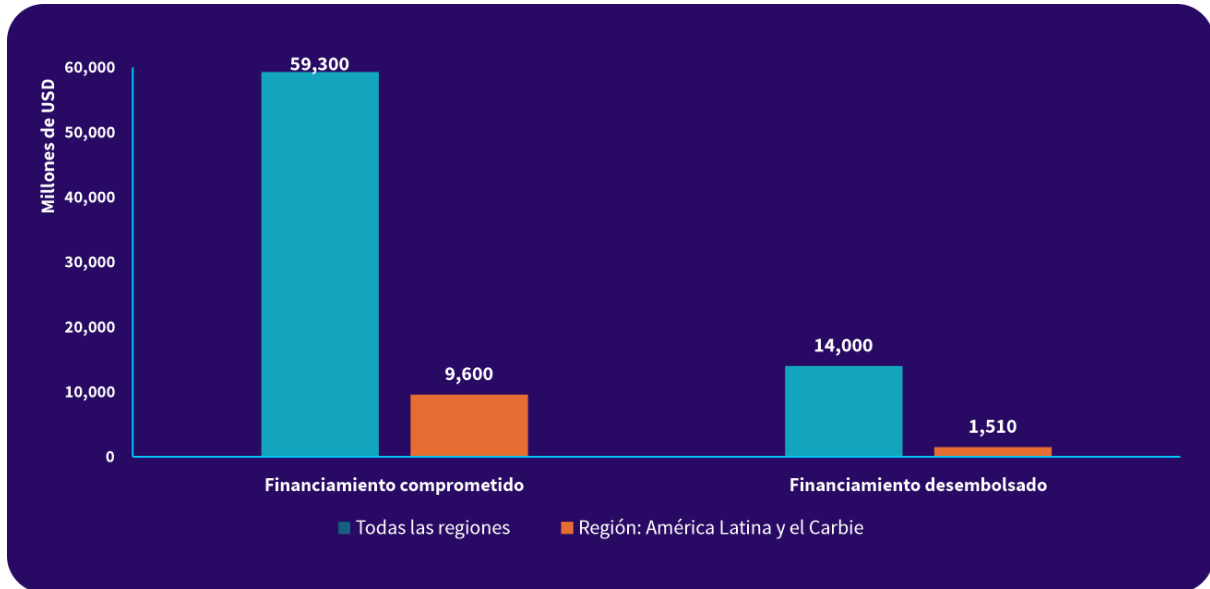


(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

El financiamiento comprometido específicamente para el cambio climático en 2021 fue de 59 mil millones de dólares, de los cuales solo 14 mil millones de dólares fueron desembolsados, lo que muestra una considerable brecha entre los recursos prometidos y entregados. América Latina y el Caribe recibió 9.0 mil millones de dólares comprometidos (15.2% del total global), pero apenas 1.5 mil millones de dólares desembolsados, lo que representa un reto importante en la implementación de los proyectos climáticos. La gráfica siguiente muestra la comparativa del financiamiento comprometido y desembolsado.

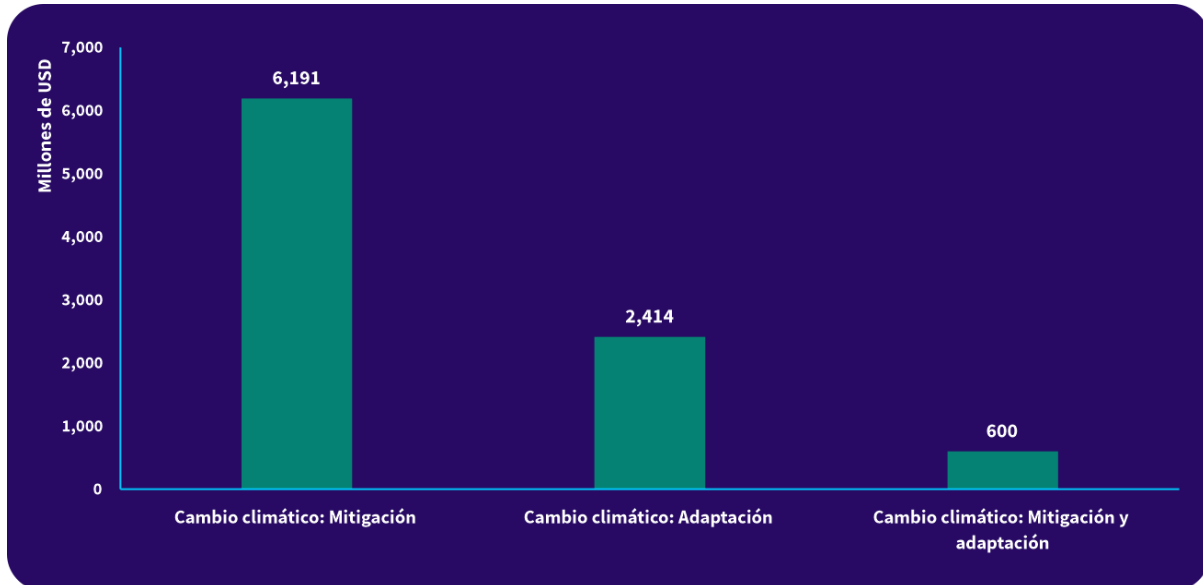
**Gráfica 17. Financiamiento total para el desarrollo comprometido y desembolsado destinado al cambio climático en miles de millones de dólares en 2021**



Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

De los 9.0 mil millones de dólares comprometidos para la región, 6.1 mil millones de dólares se destinaron a mitigación, 2.4 mil millones de dólares a adaptación y 0.6 mil millones a proyectos que combinan ambos objetivos. Esto indica que el financiamiento para mitigación fue de casi 2.5 veces mayor que el destinado a la adaptación y 10.3 veces superior al destinado a ambos objetivos. Esta diferencia evidencia la importancia de incrementar recursos para la adaptación, especialmente en una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. La siguiente gráfica presenta el financiamiento asignado a la mitigación, la adaptación y a iniciativas que abarcan ambos objetivos.

**Gráfica 18. Financiamiento comprometido para el cambio climático para actividades de mitigación, adaptación y para ambos objetivos en millones de dólares en 2021**



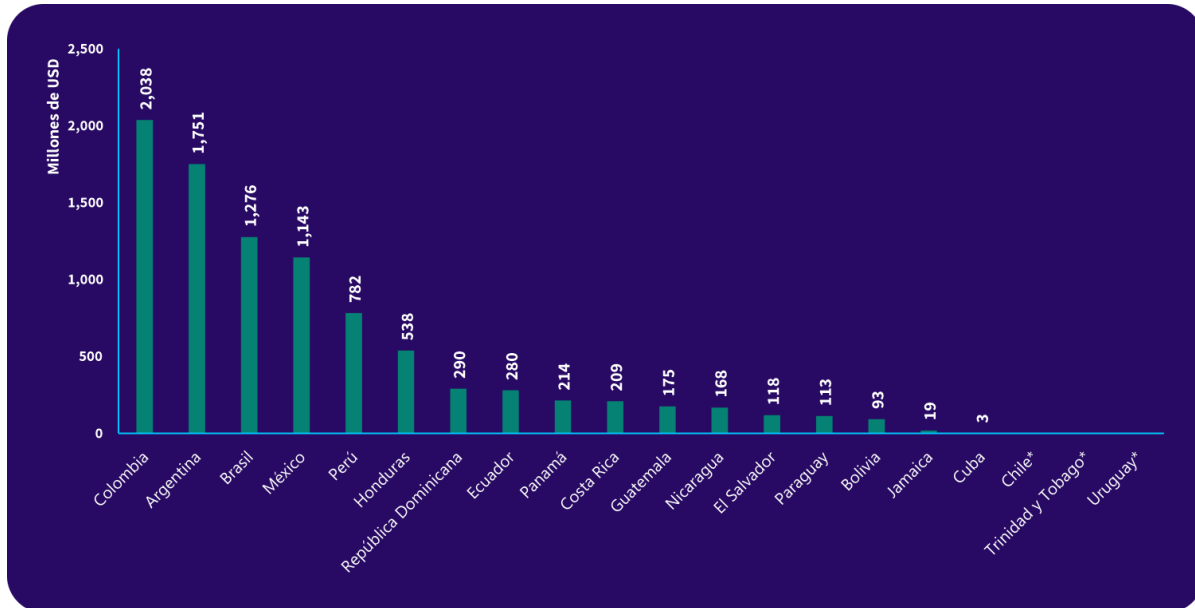
Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

Colombia fue el principal receptor de la región, con 2.1 mil millones de dólares comprometidos, lo que equivale al 25.0% de su financiamiento total para el desarrollo. Del total, 1.5 mil millones de dólares se destinaron a la mitigación, 398 millones de dólares a adaptación y 105 millones de dólares a ambos objetivos. La mayor parte de su financiamiento, el 96.71% (1.9 mil millones de dólares) provino de préstamos, mientras que solo el 3.29% (67 millones de dólares) correspondió a subvenciones.

Argentina ocupó la segunda posición con 1.7 mil millones de dólares comprometidos, distribuidos en 1.2 mil millones de dólares para mitigación, 509 millones de dólares para adaptación y 42 millones de dólares para ambos objetivos. Del total, el 99.91% (1.7 mil millones de dólares) provino de préstamos y solo el 0.09% (2 millones de dólares) de subvenciones. Brasil se ubicó en la tercera posición, con 1.2 mil millones de dólares comprometidos, de los cuales 954 millones de dólares se destinaron a mitigación, 66 millones de dólares a adaptación y 256 millones de dólares a ambos objetivos. El 92.75% (1.1 mil millones de dólares) del financiamiento se otorgó en préstamos y el 7.25% (93 millones de dólares) como subvenciones.

En el extremo opuesto, países como Bolivia con 92 millones de dólares, Jamaica con 18 millones de dólares y Cuba con 2 millones de dólares recibieron los montos más bajos de financiamiento climático comprometido. Cabe destacar que, en el caso de Cuba, el 100% de su financiamiento fue otorgado en forma de subvenciones, lo que destaca como una excepción la región, generalmente predominada por préstamos. La siguiente gráfica muestra el flujo de financiamiento comprometido para el cambio climático, desglosado por cada uno de los países analizados.

**Gráfica 19. Flujo de financiamiento comprometido para el cambio climático en millones de dólares en 2021**



(\*) Sin datos

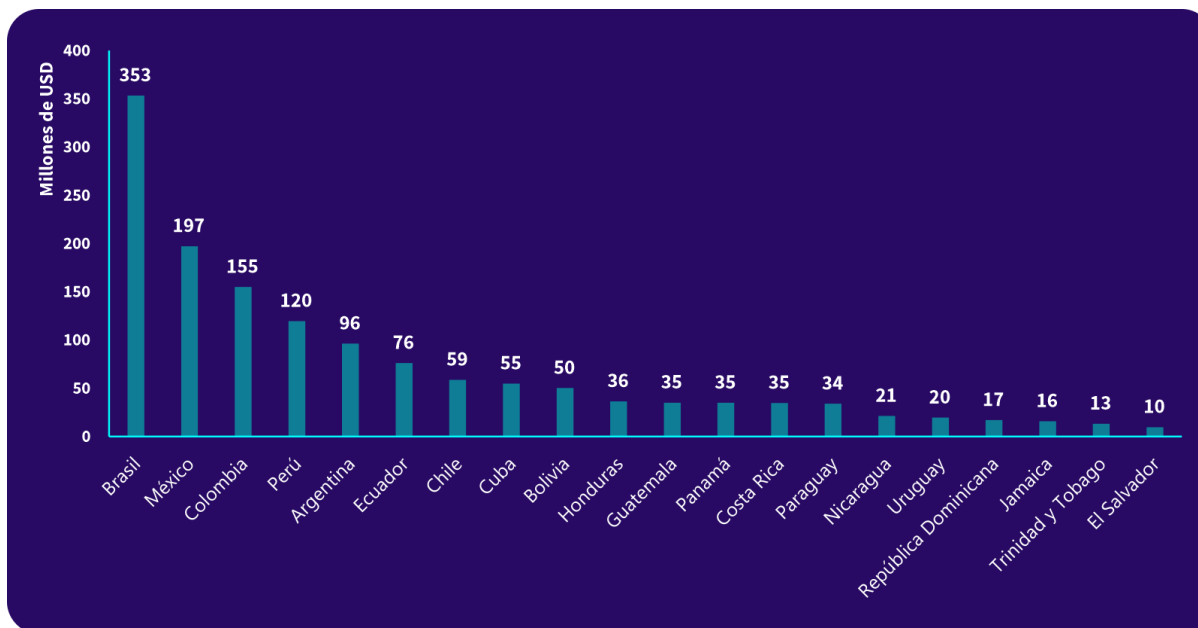
Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

América Latina y el Caribe se beneficia de diversos mecanismos multilaterales que canalizan recursos significativos hacia la región para enfrentar los desafíos del cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Entre los mecanismos más relevantes destacan la Facilidad para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), el Fondo de Inversión Climática (CIF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Estos fondos desempeñan un papel fundamental en la implementación de proyectos que abordan tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, además de otros objetivos vinculados a la sostenibilidad.

La Facilidad para el Medio Ambiente Mundial (GEF) ha desempeñado un papel importante en el financiamiento climático y ambiental en la región. Hasta octubre de 2024, el GEF comprometió un total de 1.4 mil millones de dólares, distribuidos en 379 proyectos regionales, de los cuales 247 proyectos están directamente relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Brasil es el principal beneficiario, con 353 millones de dólares destinados a 29 proyectos, consolidando su liderazgo regional en la ejecución de programas climáticos y ambientales. Le siguen México con 197 millones de dólares asignados a 26 proyectos enfocados en conservación de recursos y mitigación climática, y Colombia con 155 millones de dólares destinados a 21 proyectos, que incluyen programas de reforestación y energías renovables.

Por otro lado, Jamaica con 17 millones de dólares, Trinidad y Tobago con 13 millones de dólares y El Salvador con 10 millones de dólares, son los países que recibieron menos recursos. La siguiente gráfica ilustra la distribución de estos recursos y plantea la necesidad de fortalecer los flujos hacia economías más pequeñas y vulnerables.

**Gráfica 20. Financiamiento recibido por la Facilidad del Medio Ambiente Mundial acumulado en millones de dólares en 2024**



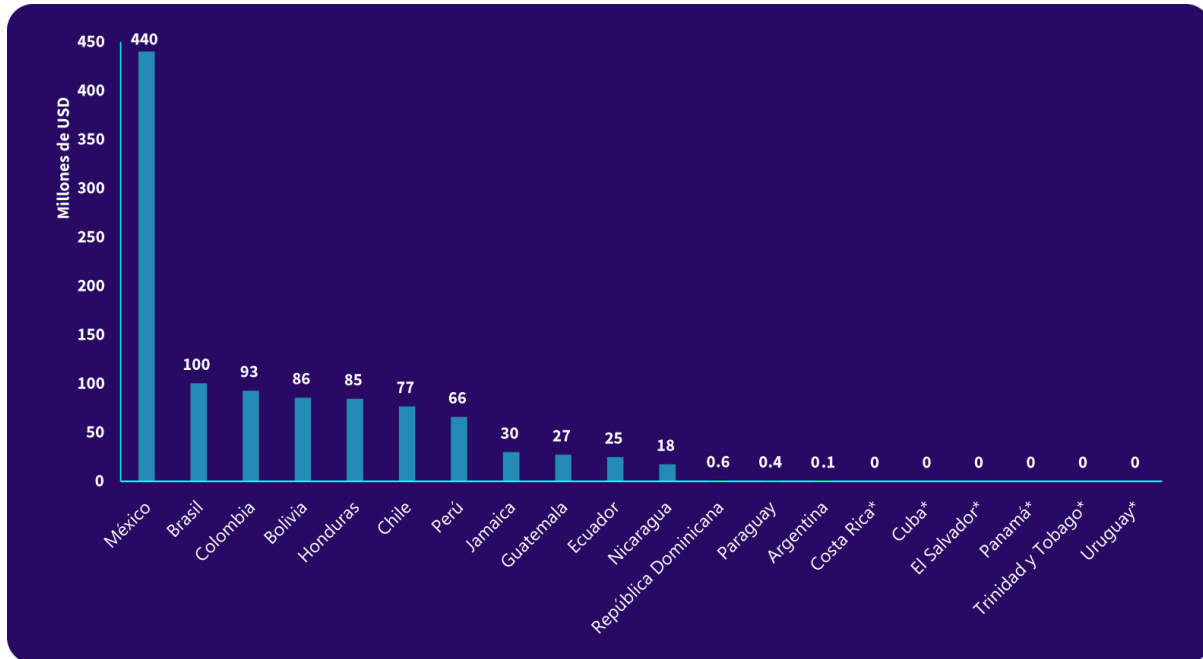
Fuente. Elaboración propia con datos del GEF en 2024.

El Fondo de Inversión Climática (CIF), creado para apoyar a países en desarrollo en sus transiciones hacia economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático, ha comprometido hasta octubre de 2024 un total de 1.1 mil millones de dólares para América Latina y el Caribe. Este financiamiento está dirigido a la implementación de proyectos que promuevan la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático. México es el principal receptor con 440 millones de dólares, que representa el 40% de los recursos comprometidos para la región. Los fondos se distribuyen en 17 proyectos, principalmente enfocados en energías renovables, eficiencia energética y resiliencia climática. Brasil es el segundo receptor con 100 millones de dólares, destinados a 13 proyectos que incluyen la conservación de la Amazonía y la transición energética hacia fuentes renovables. Colombia recibió 93 millones de dólares asignados a 11 proyectos, priorizando la adaptación al cambio climático y la promoción de ciudades sostenibles.

Aunque el CIF ha logrado comprometer recursos significativos para la región, la distribución aún presenta desafíos, como se observa en la siguiente gráfica, con una mayor concentración en países de economías grandes y medianas. En contraste, con aquellos países con economías más pequeñas o con menos capacidad institucional, limitando su capacidad para enfrentar los retos del cambio climático.



**Gráfica 21. Financiamiento recibido por el Fondo de Inversión Climática acumulado en millones de dólares en 2024**



(\*) Sin datos

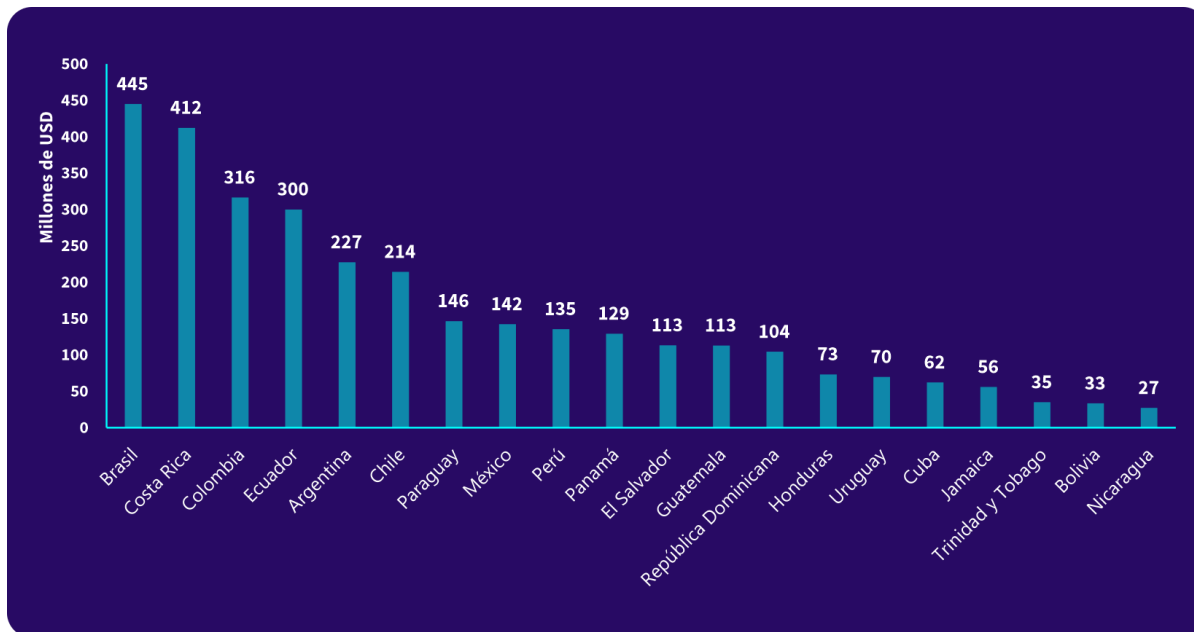
Fuente. Elaboración propia con datos del CIF en 2024.

Hasta octubre de 2024, el Fondo Verde del Clima (GCF) ha comprometido un total de 3.1 mil millones de dólares para 154 proyectos en América Latina y el Caribe. Este fondo, diseñado para apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático, se enfoca en proyectos de adaptación, mitigación y enfoques transversales que combinan ambos objetivos. De los 154 proyectos, 31 están enfocados exclusivamente en adaptación, 67 en mitigación y 56 integran ambos enfoques.

El acceso a los recursos del GCF varía significativamente entre los países de la región, Brasil es el principal receptor con 445 millones de dólares distribuidos en 13 proyectos, 3 proyectos de adaptación: enfocados en la protección de ecosistemas vulnerables, 4 proyectos de mitigación: destacando inversiones en energía renovable, y 6 proyectos transversales. Costa Rica ocupa la segunda posición con 412 millones de dólares destinados a 11 proyectos, 6 corresponden a proyectos de mitigación, 2 a proyectos de adaptación y 3 a proyectos transversales. Colombia es el tercer receptor con 316 millones de dólares asignados a 13 proyectos, 2 corresponden a proyectos de adaptación, 4 a proyectos de mitigación y 7 a proyectos transversales.

En contraste, países como Trinidad y Tobago con 35 millones de dólares, Bolivia con 33 millones de dólares y Nicaragua con 27 millones de dólares se posicionan como los de menor acceso a los recursos del GCF. La siguiente gráfica muestra las diferencias de los países para acceder a financiamiento, un desafío recurrente en los países de menores ingresos en la región.

**Gráfica 22. Financiamiento recibido por el Fondo Verde del Clima acumulando en millones de dólares en 2024**




Fuente. Elaboración propia con datos del GCF en 2024.

El análisis de los flujos financieros destinados a la biodiversidad y el cambio climático en América Latina y el Caribe destacan la importancia de acceder a la cooperación internacional y de los mecanismos de financiamiento que promueven el desarrollo sostenible en la región. Sin embargo, aunque los compromisos financieros alcanzan montos significativos, los desembolsados efectivos suelen ser considerablemente bajos, lo que representa un desafío para la implementación de los proyectos que abordan las crecientes amenazas del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Además, otro reto importante es que la mayor parte del financiamiento internacional se canaliza mediante préstamos, mientras que las subvenciones representan una menor proporción. Esto incrementa los niveles de endeudamiento de los países receptores, especialmente aquellos con economías más débiles, lo que puede limitar su capacidad para priorizar acciones climáticas de largo plazo. Para contrarrestar esta situación, es necesario que se establezcan acuerdos internacionales en los cuales se aumenten el acceso a financiamiento no reembolsable, asegurando que los países en mayor necesidad puedan proteger su biodiversidad y fortalecer su resiliencia climática sin comprometer su estabilidad financiera.

Para que la región avance hacia un desarrollo sostenible y resiliente al cambio climático, es necesario que se fortalezcan las capacidades institucionales: aumentando la capacitación en los países con la finalidad de diseñar, ejecutar y supervisar los proyectos climáticos; promover la cooperación regional: compartiendo conocimientos y buenas prácticas entre los países de la región; diversificar las fuentes de financiamiento: involucrar a diversos sectores tanto públicos como privados y fomentar esquemas innovadores, como bonos verdes y sustentables. Es decir, la región necesita implementar una



estrategia que combine el financiamiento adecuado, la transparencia y colaboración estratégica que permita avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente.

#### **2.1.4 Indicadores de política**

El análisis de los indicadores de política, como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y la transparencia presupuestaria, resulta fundamental para evaluar el compromiso de los países de América Latina y el Caribe frente al cambio climático y la gestión responsable de los recursos públicos. Las NDC reflejan las metas nacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático, mientras que la transparencia presupuestaria mide la accesibilidad, claridad y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, permitiendo garantizar la efectividad en la implementación de las políticas climáticas y garantizar una gobernanza efectiva y transparente.

Los 20 países de la región analizados han presentado sus NDC ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), demostrando un esfuerzo regional por alinearse con el Acuerdo de París.<sup>5</sup> Sin embargo, sólo 18 de estos países han actualizado o revisado sus compromisos; Ecuador y Trinidad y Tobago aún no han realizado este proceso, lo que limita la alineación de sus metas con las necesidades actuales.<sup>6</sup> Además, sólo 5 países (Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) mencionan un plan nacional de adaptación, una herramienta que contempla medidas que protejan los ecosistemas, gestionen los recursos hídricos y fortalezcan la resiliencia de las comunidades vulnerables frente al cambio climático.

El análisis de las NDCs realizado por GFLAC con información consultada al 31 de julio de 2024, revela que las necesidades anuales de financiamiento para alcanzar las metas climáticas de la región hasta 2030 ascienden a 27.1 mil millones de dólares. Este monto contempla inversiones en mitigación, adaptación y acciones combinadas, reflejando los esfuerzos necesarios para combatir los efectos del cambio climático y avanzar hacia un desarrollo sostenible. Sin embargo, únicamente la mitad de los países analizados han cuantificado sus necesidades de financiamiento. Esta falta de información detallada limita la capacidad de planificación estratégica y dificulta la atracción de recursos internacionales.

Entre los países que sí han calculado sus necesidades financieras, se observa una prioridad hacia las iniciativas de mitigación, que concentran 22.9 mil millones de dólares, equivalentes al 84.59% del total estimado. Estas inversiones se destinan principalmente a la transición energética, la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes. En contraste, la adaptación, a pesar de la creciente vulnerabilidad de la región ante fenómenos como sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos, recibe únicamente 1.2 mil millones de dólares (4.43% del total). Por otro lado, las acciones combinadas, que incluyen estrategias integrales de mitigación y adaptación, representan 2.9 mil millones de dólares (10.97% del total).

---

<sup>5</sup> Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) están disponibles para su consulta en el Registro de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, accesible en: [Nationally Determined Contributions Registry | CMNUCC](#)

<sup>6</sup> Información consultada en octubre de 2024.

Estos montos resaltan la importancia de fortalecer los mecanismos de planificación financiera, mejorar la capacidad técnica de los países para calcular sus necesidades y fomentar la cooperación internacional. En la tabla siguiente, se sintetizan los datos de las NDC de los 20 países analizados, proporcionando un panorama detallado de las prioridades y desafíos en el financiamiento climático de la región.

**Tabla 5. Síntesis de las NDCs de los 20 países de estudio**

País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
<b>Argentina</b>	- Primera NDC en 2016. - NDC nueva o actualizada en 2021. - Cuarto informe bial de actualización en 2022. - Estrategia de largo plazo en 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Argentina se compromete a establecer un límite incondicional de emisiones netas para toda la economía de 394 MtCO<sub>2</sub>e en 2030.</li> <li>● Cuenta con objetivos de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de cero emisiones netas para 2050.</li> </ul>	- Adaptación: No reporta. - Mitigación: No reporta. - Transversales: 15 mil millones de dólares.
<b>Bolivia</b>	- Primera NDC en 2016. - NDC nueva o actualizada en 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bolivia cuenta con objetivos de adaptación.</li> <li>● Cuenta con un objetivo sectorial reforzado o añadido.</li> </ul>	- Adaptación: No reporta. - Mitigación: No reporta. - Transversales: No reporta.
<b>Brasil</b>	- Primera NDC en 2020. - NDC nueva o actualizada en 2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Brasil se compromete a reducir sus emisiones en un 48.4% respecto de los niveles de 2005 para 2025, y en un 53.1% respecto de los niveles de 2005 para 2030.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con un objetivo de cero emisiones netas para 2050.</li> </ul>	- Adaptación: No reporta. - Mitigación: 17 mil millones de dólares. - Transversales: No reporta.
<b>Chile</b>	- Primera NCD en 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Chile se compromete a un objetivo de 95 MtCO<sub>2</sub>e para</li> </ul>	- Adaptación: No reporta.

País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Estrategia de largo plazo en 2021.</li> <li>- Quinto informe bienal de actualización en 2022.</li> </ul>	<p>2030, y un máximo de emisiones de GEI de no más de 1,100 MtCO<sub>2</sub>e en el periodo 2020 – 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de neutralidad climática para 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Colombia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2018.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Estrategia de largo plazo en 2021.</li> <li>- Tercer informe bienal de actualización en 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Colombia se compromete a un máximo de 169.44 MtCO<sub>2</sub>e en 2030, equivalente a una reducción del 51% respecto al BAU.</li> <li>● Reducir las emisiones de carbono negro en un 40% respecto a 2014 en 2030.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: 600 millones de dólares.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Costa Rica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2016.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Estrategia de largo plazo en 2020.</li> <li>- Segundo informe bienal de actualización en 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Costa Rica se compromete a un máximo absoluto de emisiones netas para 2030 de 9.11 MtCO<sub>2</sub>e, y un presupuesto máximo de emisiones netas durante 2021 – 2030 de 106.53 MtCO<sub>2</sub>e.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de cero emisiones netas para 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>

País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
	- Plan Nacional de Adaptación en 2022.		
<b>Cuba</b>	- Primera NDC en 2016. - NDC nueva o actualizada en 2020.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con objetivo de adaptación.</li> </ul>	- Adaptación: No reporta. - Mitigación: 13.7 mil millones de dólares. - Transversales: No reporta.
<b>Ecuador</b>	- Primera NDC en 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con objetivo de adaptación.</li> </ul>	- Adaptación: No reporta. - Mitigación: No reporta. - Transversales: No reporta.
<b>El Salvador</b>	- Primera NDC en 2017. - NDC nueva o actualizada en 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Salvador se compromete a reducir sus emisiones anuales del sector de energía entre 640 KtCO<sub>2</sub>e<sup>7</sup> (incondicional) y 819 KtCO<sub>2</sub>e (condicional) respecto al nivel BAU para 2030, y para el período 2035 – 2040, a reducir sus emisiones acumuladas en el sector AFOLU desde 2015 en MtCO<sub>2</sub>e (condicional).</li> <li>• Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>• Cuenta con objetivo de adaptación.</li> </ul>	- Adaptación: 22.5 millones de dólares. - Mitigación: No reporta. - Transversales: 57 millones de dólares.
<b>Guatemala</b>	- Primera NDC en 2017. - Plan Nacional de Adaptación en 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guatemala se compromete a reducir sus emisiones en 11.2% (incondicional) y en 22.6% (condicional) al 2030 respecto al BAU.</li> </ul>	- Adaptación: No reporta. - Mitigación: No reporta. - Transversales: No reporta.

<sup>7</sup> KtCO<sub>2</sub>e representa la cantidad total de emisiones expresadas en kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente.



País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NDC nueva o actualizada en 2022.</li> <li>- Estrategia de largo plazo en 2021.</li> <li>- Primer informe bienal de actualización en 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de reducción del 59% de las emisiones respecto a la situación actual para 2050.</li> </ul>	
<b>Honduras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2016.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2021.</li> <li>- Primer informe bienal de actualización en 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Honduras se compromete a reducir las emisiones en un 16% (excluyendo UTCUTS) para 2030, en comparación con el escenario BAU, junto con los objetivos sectoriales no relacionados con GEI.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Jamaica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2017.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Primer informe bienal de actualización en 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jamaica se compromete a lograr una reducción del 25.4% con respecto a las emisiones habituales en 2030 sin apoyo internacional (incondicional) y una reducción del 28.5% con respecto a las emisiones habituales en 2030 condicionada con el apoyo internacional.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de cero emisiones netas en 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>México</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2016.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● México se compromete a reducir sus emisiones en un</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> </ul>

País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NDC nueva o actualizada en 2022.</li> <li>- Estrategia de largo plazo en 2016.</li> <li>- Tercer informe bienal de actualización en 2022.</li> </ul>	<p>35% (incondicional), y en un 40% (condicional) para 2030 en comparación con BAU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● México se compromete a reducir sus emisiones de carbono negro en un 51% (incondicional), y en un 70% (condicional) para 2030 en comparación con BAU.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de la reducción del 50% respecto a los niveles de 2000 para 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitigación: 185 mil millones de dólares.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Nicaragua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2018.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2022.</li> <li>- Primer informe bienal de actualización en 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Nicaragua se compromete al objetivo de 69 MtCO<sub>2</sub>e en 2030 o 10% de reducción en comparación con BAU (77 MtCO<sub>2</sub>e).</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: 1.6 mil millones de dólares.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Panamá</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2016.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Segundo informe bienal de actualización en 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Panamá se compromete a reducir las emisiones del sector energético en al menos 11.5% para 2030 y al menos 24% para 2050 respecto a BAU.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo cuantificado de emisiones a largo plazo a mantenerse carbono – negativo para 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: 2.6 mil millones de dólares.</li> <li>- Mitigación: 1.2 mil millones de dólares.</li> <li>- Transversales: 14 mil millones de dólares.</li> </ul>

País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
<b>Paraguay</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2016.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2021.</li> <li>- Tercer informe bienal de actualización en 2021.</li> <li>- Plan Nacional de Adaptación en 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Paraguay se compromete a reducir las emisiones de GEI en un 10% (incondicional) y un 20% (condicional) al 2030 respecto al BAU.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Perú</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2016.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Segundo informe bienal de actualización en 2023.</li> <li>- Plan Nacional de Adaptación en 2021.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perú se compromete a limitar sus emisiones de GEI a un nivel máximo de 208.8 MtCO<sub>2</sub>e (incondicional) y 179 MtCO<sub>2</sub>e (condicional) en 2030.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de cero emisiones netas en 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>República Dominicana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2017.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2020.</li> <li>- Primer informe bienal de actualización en 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● República Dominicana se compromete a una reducción del 27% (7% incondicional a las finanzas internas y 20% condicional a las finanzas externas) para 2030 en comparación con BAU.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de cero emisiones netas en 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: 8.7 mil millones de dólares.</li> <li>- Mitigación: 8.9 mil millones de dólares.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>
<b>Trinidad y Tobago</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2018.</li> <li>- Primer informe bienal de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Trinidad y Tobago se comprometen a la reducción del 15% (equivalente a 103 MtCO<sub>2</sub>e) en las emisiones de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: 2 mil millones de</li> </ul>

País	NDC	Objetivos y estrategia de largo plazo	Cuantificación de costos y necesidades de financiamiento con respecto a su NDC más reciente.
	actualización en 2021.	<p>GEI en los sectores de generación de energía, transporte e industria para 2030 en comparación con el escenario BAU; reducción (incondicional) del 30% en las emisiones de GEI del transporte público para 2030 en comparación con 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> </ul>	<p>dólares.</p> <p>- Transversales: No reporta.</p>
<b>Uruguay</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primera NCD en 2017.</li> <li>- NDC nueva o actualizada en 2022.</li> <li>- Cuarto informe bienal de actualización en 2022.</li> <li>- Estrategia de largo plazo en 2021.</li> <li>- Plan Nacional de Adaptación en 2019.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uruguay se compromete incondicionalmente a no superar los 9,267 Gg de emisiones de CO<sub>2</sub>, 818 Gg de metano y 32 Gg de N<sub>2</sub>O para 2030, y a reducir las emisiones de HFC en un 10% con respecto a la situación actual. Además, se compromete a reducir las emisiones en otros 960 Gg de CO<sub>2</sub>, 61 Gg de metano y 2 Gg de N<sub>2</sub>O, y a reducir sus emisiones de HFC en un 5% adicional, sujeto al apoyo internacional.</li> <li>● Cuenta con objetivo de GEI en su contribución a la mitigación.</li> <li>● Cuenta con objetivo de adaptación.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050.</li> <li>● Cuenta con el objetivo de cero emisiones netas en 2050.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptación: No reporta.</li> <li>- Mitigación: No reporta.</li> <li>- Transversales: No reporta.</li> </ul>

Fuente. Elaboración propia con información del Climatewatch (2023) y de las NDC de los 20 países de estudio consultados en 2024.

La transparencia presupuestaria es un pilar fundamental para la implementación efectiva de las políticas climáticas, ya que permite a diferentes actores monitorear y evaluar el uso de los recursos

públicos. Esto permite no solo fortalecer la rendición de cuentas, sino que también mejorar la confianza en las instituciones y facilitar la atracción de financiamiento externo, clave para avanzar en la agenda climática.

El Índice de Presupuestos Abiertos, desarrollado por el International Budget Partnership (IBP), mide la calidad y accesibilidad de la información presupuestaria nacional en una escala de 0 a 100, donde una mayor puntuación refleja un mayor nivel de transparencia. En la edición 2023, Brasil y México sobresalen en la región con una puntuación de 80 sobre 100, lo que indica que proporcionan al público un volumen significativo de información sustancial sobre sus presupuestos. Le siguen países como República Dominicana (77 puntos) y Perú (71 puntos), que también alcanzan niveles satisfactorios. Sin embargo, aunque estos países han logrado avances importantes, todavía enfrentan desafíos para cumplir con los estándares más altos de transparencia.

En el extremo opuesto, países como Trinidad y Tobago (38 puntos), El Salvador (24 puntos) y Bolivia (11 puntos) presentan los niveles más bajos de transparencia presupuestaria en la región. Particularmente preocupante es el caso de Bolivia, clasificada con un nivel “insuficiente”, donde la información sobre el uso de recursos públicos es mínima o inexistente. Esta falta de transparencia impide evaluar la eficacia y efectividad de los presupuestos, afectando la confianza pública como la capacidad de atraer inversiones internacionales para implementar medidas climáticas. En la siguiente gráfica, se presentan las puntuaciones del Índice de Presupuestos Abiertos para los países de estudio.


**Gráfica 23. Índice de Presupuesto Abierto en 2023**



(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del IBP (2023), consultados en 2024.

El análisis de estos indicadores revela avances importantes, pero también desafíos significativos que deben abordarse para garantizar un progreso sostenible en la lucha contra el cambio climático. Aunque muchos países han actualizado sus NDC, mostrando un claro compromiso con los objetivos globales del Acuerdo de París, persisten brechas críticas en su implementación. En particular, falta



incorporar estrategias de largo plazo y planes de adaptación robustos que permitan abordar los crecientes desafíos climáticos de manera efectiva en los horizontes de mediano y largo plazo.

Un componente fundamental para la ejecución de estas políticas climáticas es la transparencia presupuestaria, que actúa como catalizador para la gestión eficiente y responsable de los fondos climáticos. Este indicador no solo asegura que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada, sino que también genera confianza entre los actores nacionales e internacionales involucrados en el financiamiento y ejecución de iniciativas climáticas. Sin embargo, mientras algunos países de la región han alcanzado niveles satisfactorios de divulgación y accesibilidad de la información presupuestaria, otros enfrentan importantes deficiencias. La falta de claridad y disponibilidad de los datos presupuestarios dificulta el monitoreo de los avances, la rendición de cuentas y la evaluación de la efectividad de los recursos asignados a la acción climática.

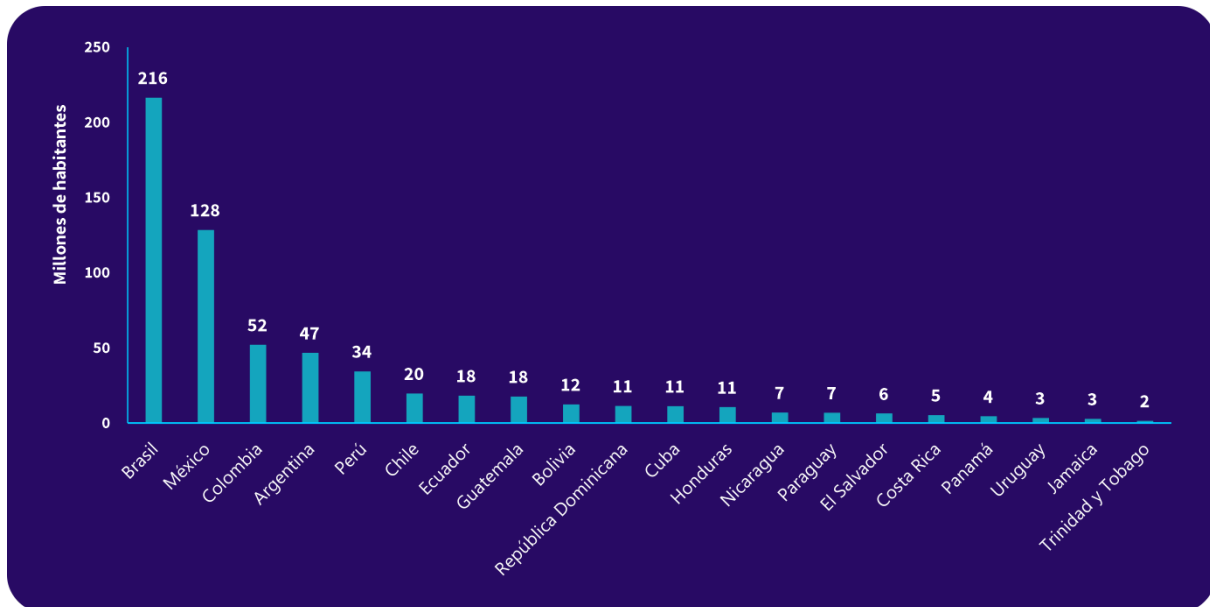
### **2.1.5 Indicadores sociales**

Los indicadores sociales analizan el bienestar y el progreso de las naciones, proporcionando datos claves sobre temas como la educación, el empleo, la pobreza, la desigualdad y la calidad de vida. Estos indicadores permiten entender las dinámicas sociales y económicas, identificar brechas críticas y diseñar políticas públicas más equitativas y sostenibles.

La población es un indicador básico pero fundamental para comprender las dimensiones de los retos sociales y económicos. Según datos del Banco Mundial en 2023, Brasil con 216 millones de habitantes, es el país más poblado de la región, seguido por México (128 millones) y Colombia (52 millones). Estos países enfrentan desafíos asociados a la gestión de grandes poblaciones, como el acceso a servicios básicos, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

En contraste, países más pequeños como Uruguay (3.4 millones), Jamaica (2.8 millones) y Trinidad y Tobago (1.5 millones) tienen poblaciones significativamente menores. Sin embargo, esto no necesariamente implica menos desafíos, ya que muchos enfrentan limitaciones económicas y sociales vinculadas a su tamaño y recursos. La siguiente gráfica ilustra la distribución poblacional en la región, resaltando las variaciones entre países y sus implicaciones sociales y económicas.

**Gráfica 24. Población total en millones de habitantes en los 20 países de estudio en 2023**



Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), consultados en 2024.

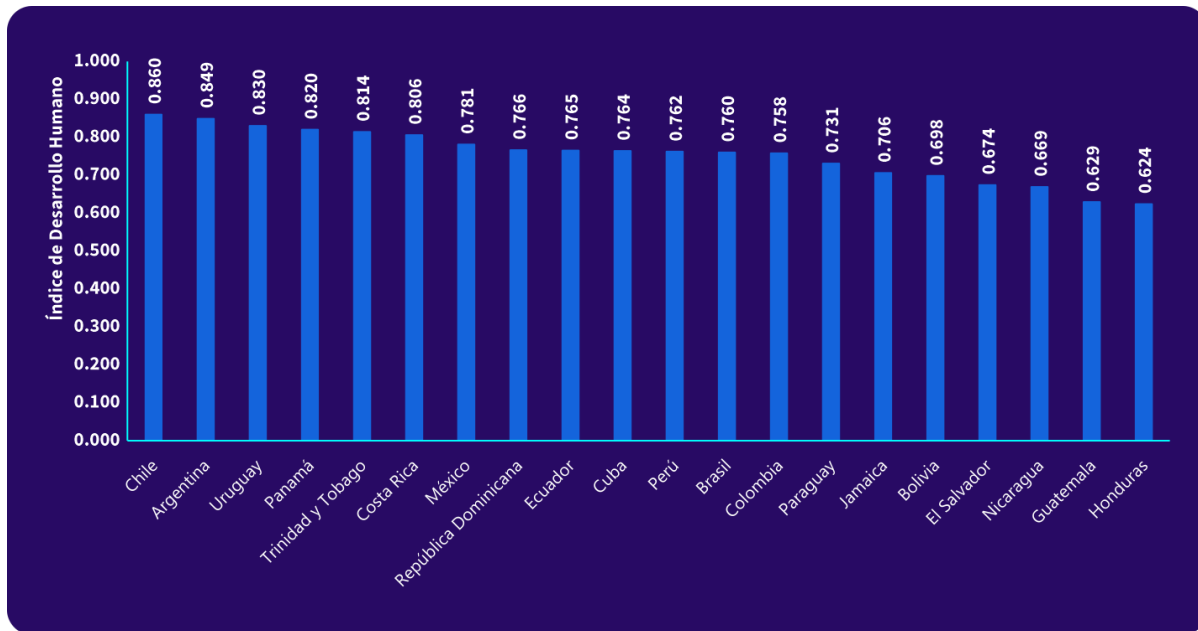
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es una herramienta clave para evaluar el progreso de los países en tres dimensiones fundamentales: salud y longevidad, acceso a la educación y calidad de vida medida a través del ingreso nacional bruto per cápita. Este índice ofrece una perspectiva integral del desarrollo humano, más allá de los indicadores económicos, permitiendo identificar desigualdades y áreas prioritarias de mejora.

En 2022, varios países de la región destacaron por su elevado nivel de desarrollo humano. Chile lidera la región con un IDH de 0.860, consolidándose como un referente en términos de salud, educación y bienestar económico. Le siguen Argentina (0.849) y Uruguay (0.830), también ubicados en la categoría “muy alto” de desarrollo humano. Otros países como Panamá, Trinidad y Tobago y Costa Rica alcanzaron valores superiores a 0.800, reflejando un progreso constante en la reducción de brechas sociales y fortalecimiento de servicios públicos esenciales.

En contraste, varios países de la región registraron un IDH de nivel “medio”, lo que evidencia importantes desafíos. Bolivia (0.698), El Salvador (0.674), Nicaragua (0.669), Guatemala (0.629) y Honduras (0.624) reflejan las mayores brechas en la región, con altas limitaciones en el acceso a servicios educativos y de salud de calidad. La gráfica que se presenta a continuación ilustra las disparidades en el IDH entre los países de la región.



Gráfica 25. Índice de Desarrollo Humano en los 20 países de estudio en 2022

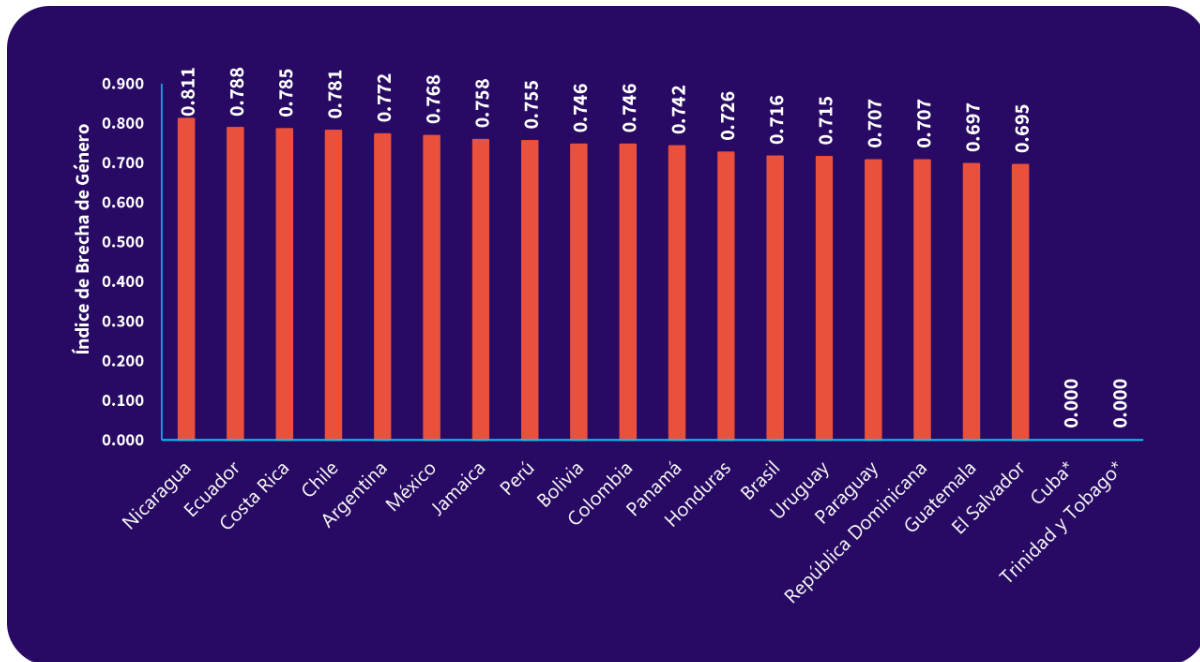


Fuente. Elaboración propia con datos del PNUD (2022), consultados en 2024.

El Índice Global de Brecha de Género, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), mide el grado de paridad de género en cuatro dimensiones claves: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político. En 2024, Nicaragua lidera la región con un índice de 0.811 consolidándose como uno de los países más avanzados en términos de igualdad de género. Le siguen Ecuador (0.788), Costa Rica (0.785) y Chile (0.781). Estos países han implementado políticas públicas que fomentan la participación de las mujeres en el mercado laboral y en la toma de decisiones, así como iniciativas para reducir las brechas salariales y mejorar el acceso a la educación.

En el otro extremo, países como Paraguay y República Dominicana (0.707), Guatemala (0.697) y El Salvador (0.695) registran las mayores disparidades de género en la región. Estos países enfrentan desafíos importantes en empoderamiento político, con una baja representación de mujeres en cargos públicos, así como en participación económica, reflejada en brechas salariales amplias y tasas reducidas de empleo formal para las mujeres. En la gráfica siguiente se presenta el desempeño de los 20 países de estudio, ilustrando las variaciones en el nivel de paridad de género en la región.

**Gráfica 26. Índice Global de Brecha de Género en los 20 países de estudio en 2024**



(\*) Sin datos

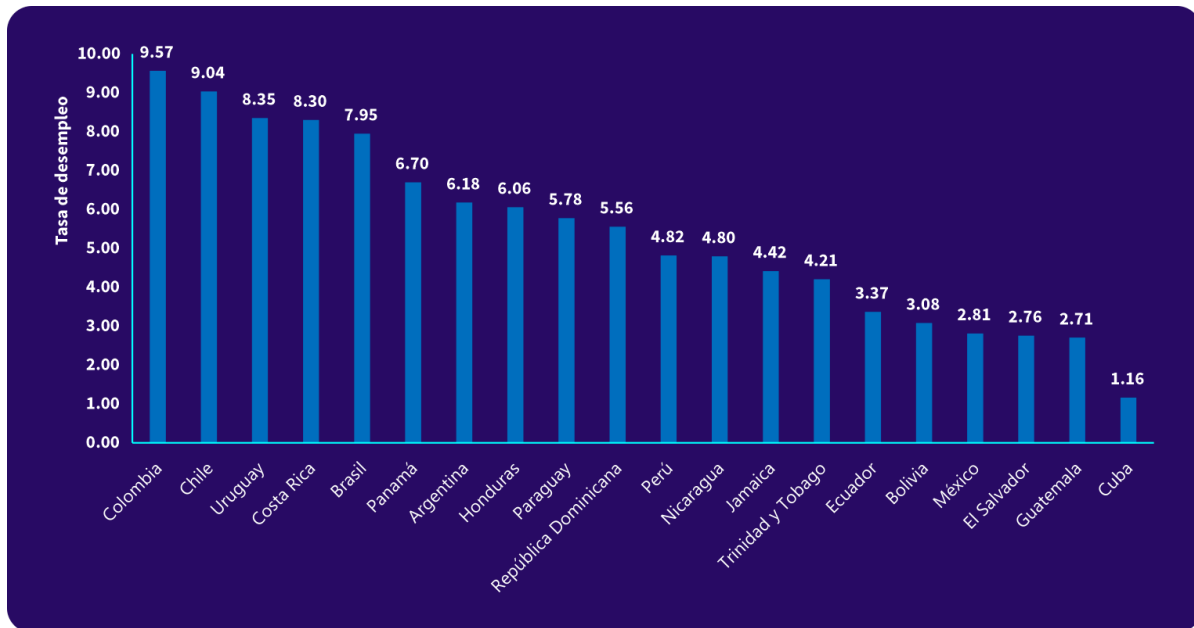
Fuente. Elaboración propia con datos del WEF (2024), consultados en 2024.

La tasa de desempleo, que mide el porcentaje de la fuerza laboral sin empleo, pero disponible y en búsqueda activa, es uno de los indicadores clave para evaluar el bienestar económico y la dinámica laboral de una región. Aunque proporciona un panorama general del acceso del mercado laboral, no refleja otros aspectos críticos como la calidad del empleo, la informalidad laboral, factores especialmente relevantes en América Latina y el Caribe.

En 2023, según datos del Banco Mundial, Colombia reportó la mayor tasa de desempleo en la región con 9.57%, reflejando los desafíos estructurales del mercado laboral, como la alta informalidad y las dificultades para generar empleo formal sostenible. Le siguen Chile (9.04%), Uruguay (8.35%) y Costa Rica (8.30%). En estos países, el desempleo se asocia principalmente a la desaceleración económica global y las barreras para la reinserción laboral.

Por otro lado, las tasas de desempleo más bajas se registraron en México (2.81%), El Salvador (2.76%), Guatemala (2.71%) y Cuba (1.16%). Aunque estos países presentan cifras que podrían sugerir estabilidad laboral, es importante considerar que estas tasas no necesariamente indican un mercado laboral saludable. La alta informalidad laboral, común en gran parte de la región, puede subestimar el verdadero alcance del desempleo. En la gráfica siguiente se presentan las tasas de desempleo de los 20 países analizados, proporcionando un panorama del mercado laboral en la región.

**Gráfica 27. Tasa de desempleo en los 20 países de estudio en 2023**

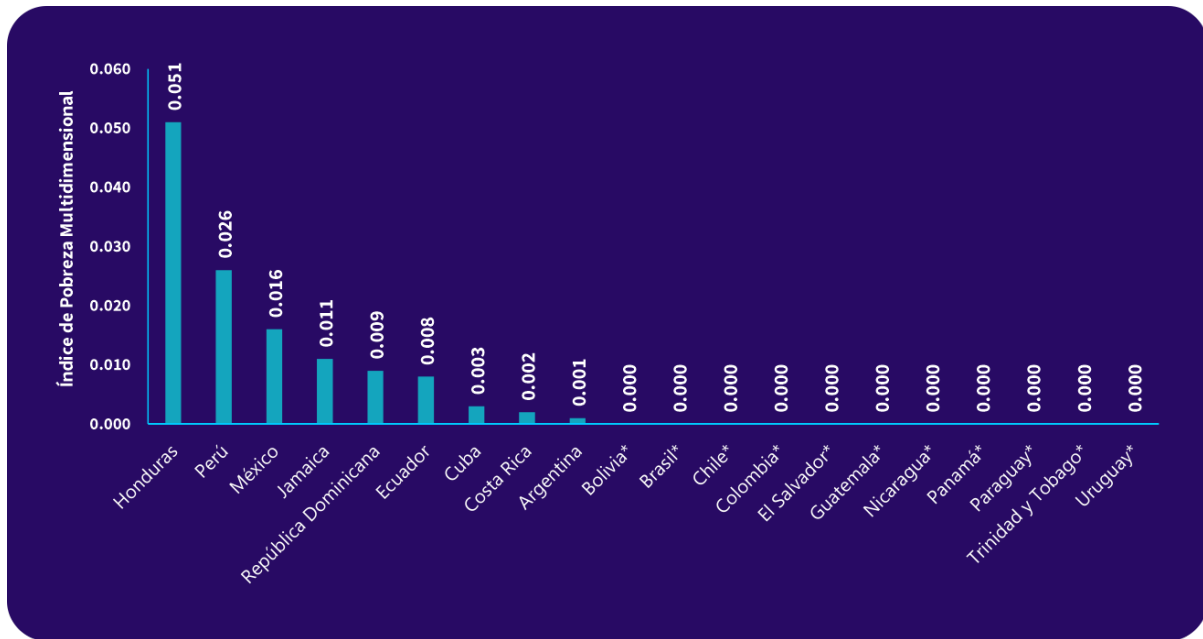


Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2023), consultados en 2024.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es una herramienta que mide las privaciones simultáneas que enfrenta una población en tres dimensiones clave: salud, educación y condiciones de vida. En 2022, los datos revelan que algunos países de la región enfrentan importantes desafíos, Honduras con un índice de 0.051 presenta el nivel más alto de pobreza multidimensional, reflejando carencias significativas en todas las dimensiones, especialmente en el acceso a servicios de salud y condiciones de vida digna. Perú (0.026) y México (0.016) también muestran niveles preocupantes de privaciones, principalmente en zonas rurales, donde los servicios básicos son limitados y las brechas de desigualdad son más profundas.

En el otro extremo, países como Cuba (0.003), Costa Rica (0.002) y Argentina (0.001) registran los niveles más bajos de pobreza multidimensional en la región. Esto se debe, en gran parte, a políticas públicas que han priorizado el acceso universal a la salud, la educación y la mejora de las condiciones de vida. Por otro lado, una limitación importante en el análisis regional del IPM es la falta de datos actualizados para varios países clave, entre ellos: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y Uruguay. Esta limitación de información impide una evaluación más completa y precisa del panorama de pobreza multidimensional en la región, dificultando la comparación y el diseño de políticas regionales coordinadas. En la siguiente gráfica se presentan los niveles de IPM reportados en los países, evidenciando las disparidades dentro de la región.

**Gráfica 28. Índice de Pobreza Multidimensional en los 20 países de estudio en 2022**



(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con datos del PNUD (2022), consultados en 2024.

El análisis de los indicadores sociales permite identificar las prioridades y diseñar políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales y promuevan un desarrollo sostenible. La distribución poblacional, combinada con otros factores como el IDH, la pobreza y las desigualdades de género, ofrece un panorama integral de los retos y oportunidades de la región. Para enfrentar estos desafíos, es necesario fortalecer la cooperación regional, incrementar las inversiones en educación y salud, y promover políticas inclusivas que beneficien a los grupos más vulnerables.



## **2.2 Contexto regional: Resultados del Índice de Finanzas Sostenibles caso del análisis de las variables cuantitativas**

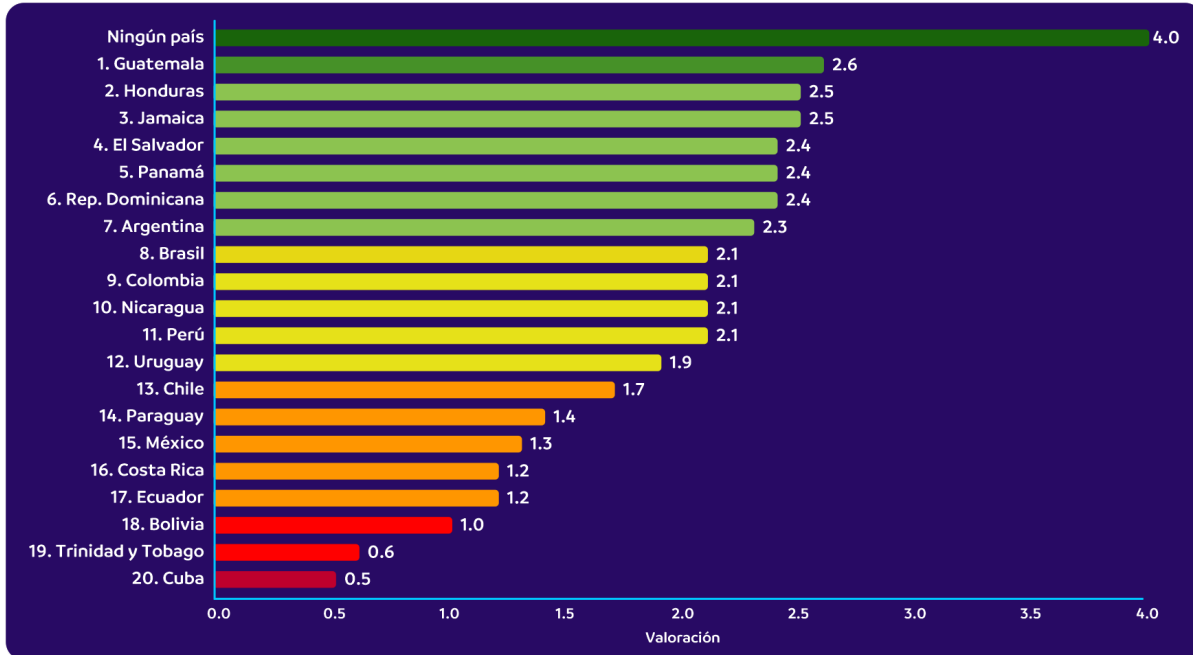
El Índice de Finanzas Sostenibles es una herramienta que permite monitorear y evaluar los flujos financieros, tanto nacionales como internacionales, en países en desarrollo. Su principal propósito es identificar cómo estos recursos están siendo utilizados para abordar el cambio climático. Además, el índice permite detectar fondos que podrían estar obstaculizando el progreso, como aquellos destinados a actividades vinculadas con la extracción y producción de combustibles fósiles.

El IFS no solo clasifica a los países en función de sus niveles de financiamiento sostenible, sino que también identifica las brechas, necesidades y oportunidades. Esto lo convierte en un recurso valioso para orientar políticas públicas y fomentar un desarrollo más equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Su enfoque permite a los tomadores de decisiones identificar áreas prioritarias para la acción y optimizar el uso de recursos financieros en iniciativas que promuevan la sostenibilidad.

En su quinta edición, correspondiente al año 2023, el índice analiza los 20 países más emisores de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, una región especialmente vulnerable al cambio climático y clave por su rica biodiversidad. Los datos utilizados en el análisis provienen de fuentes públicas y se actualizan constantemente para garantizar su precisión y relevancia. Esta metodología no solo permite capturar las tendencias de inversión climática en la región, sino también promover la rendición de cuentas y el diseño de estrategias financieras más sostenibles.

## 2.2.1 Índice de Finanzas Sostenibles 2024

Gráfica 29. Ranking de finanzas sostenibles 2024




Fuente. Elaboración propia con datos de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024 presenta un panorama preocupante para América Latina y el Caribe: ninguno de los 20 países más emisores de gases de efecto invernadero en la región de América Latina y el Caribe logró ubicarse en los niveles **“MUY ALTO”** o **“ALTO”** de finanzas sostenibles. Este resultado evidencia la persistente brecha entre los flujos financieros provenientes de actividades sostenibles y aquellos generados por industrias intensivas en carbono. Esta situación refleja la urgencia de orientar las inversiones hacia modelos económicos más sostenibles para acelerar la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono y abordar los retos del cambio climático.

Guatemala, con una puntuación de 2.6 sobre un máximo de 4.0 puntos, se ubica en el nivel **“MEDIO ALTO”** del ranking de finanzas sostenibles. Este posicionamiento se debe a sus esfuerzos en la reducción de la dependencia de ingresos provenientes de actividades altamente intensivas en carbono, así como al aumento en la asignación presupuestaria para iniciativas relacionadas con la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos y la conservación de la biodiversidad.

Otros países que alcanzaron el nivel **“MEDIO ALTO”** de finanzas sostenibles son Honduras y Jamaica con una puntuación de 2.5 puntos; El Salvador, Panamá y República Dominicana con 2.4 puntos; y Argentina con 2.3 puntos. Argentina, en particular, experimentó un avance significativo respecto a la edición anterior debido a que en esta edición se incluyó información relacionada con el financiamiento para la biodiversidad. Sin embargo, aunque estos países muestran avances hacia una mayor sostenibilidad financiera, aún enfrentan importantes desafíos, como diversificar sus



economías, reducir la dependencia de industrias extractivas y de combustibles fósiles, y mejorar la asignación de recursos hacia actividades de bajo impacto ambiental.

En el nivel **“MEDIO”** de finanzas sostenibles se encuentran Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá, todos con una puntuación de 2.1 puntos, seguidos de Uruguay con 1.9 puntos. Aunque estos países han mostrado algunos avances, su progreso sigue siendo limitado y está lejos de satisfacer las necesidades de inversión necesarias en sectores críticos como la transición hacia fuentes renovables, la conservación de la biodiversidad y la adaptación a los impactos del cambio climático. Esta falta de recursos compromete su capacidad para alcanzar los objetivos climáticos globales. Además, la mayoría de estos países suelen enfrentarse a barreras estructurales, como economías dependientes de actividades extractivas o intensivas en carbono, capacidades institucionales limitadas y marcos regulatorios para incentivar la transición hacia modelos económicos más sostenibles.


En el nivel **“MEDIO BAJO”** de finanzas sostenibles, se ubican Chile con 1.7 puntos, seguido de Paraguay con 1.4 puntos, México con 1.3 puntos, Costa Rica y Ecuador con 1.2 puntos. Estos países reflejan avances limitados y serias deficiencias en la asignación de recursos hacia sectores sostenibles, lo que compromete su capacidad para enfrentar los retos climáticos y ambientales de manera efectiva. En el caso de México, aunque logró una ligera mejora respecto a la edición anterior, su posición evidencia una fuerte dependencia de actividades intensivas en carbono, como la extracción de petróleo y gas. A esto se suma un presupuesto insuficiente para financiar la transición energética y la protección ambiental. México, siendo una de las principales economías de la región, tiene un papel vital en liderar la transición hacia energías limpias, pero sus políticas actuales han priorizado inversiones en combustibles fósiles, retrasando el desarrollo de proyectos de energías renovables y tecnologías sostenibles.

Por otro lado, países como Bolivia con 1.0 puntos y Trinidad y Tobago con 0.6 puntos se encuentran en el nivel **“BAJO”** de finanzas sostenibles, debido a su alta dependencia de actividades relacionadas con los combustibles fósiles y la limitada inversión en iniciativas climáticas. En el caso de Trinidad y Tobago, se debe a su alta dependencia en la producción de gas natural y petróleo. Por su parte, Bolivia presenta una economía centrada en la exportación de gas natural como principal fuente de ingresos. Ambas naciones enfrentan retos significativos para diversificar sus economías e invertir en sectores sostenibles que impulsen una transición energética efectiva.

Cuba, por otro lado, se enfrenta a desafíos adicionales, como restricciones económicas y estructurales, así como una falta de transparencia en datos clave, incluidos los ingresos y presupuestos vinculados a actividades intensivas en carbono. Esta opacidad no solo afecta su posición en el índice, que en esta edición fue de 0.5 puntos debido a la insuficiencia de datos para una estimación precisa, sino que también limita su capacidad para atraer financiamiento internacional. Si Cuba no mejora la disponibilidad y calidad de su información, corre el riesgo de ser excluida de futuras ediciones del índice, lo que podría dificultar aún más su acceso a recursos para enfrentar los desafíos del cambio climático y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Los resultados del Índice de Finanzas Sostenibles 2024 evidencian una realidad ineludible: América Latina y el Caribe se encuentra rezagado en la transición hacia modelos financieros sostenibles. Ninguno de los países de la región alcanzó los niveles **“MUY ALTO”** o **“ALTO”** de finanzas sostenibles, lo que demuestra una fuerte dependencia en actividades económicas de alto impacto ambiental,





como la minería intensiva, la explotación y comercialización de combustibles fósiles. Esta situación no solo contribuye al agravamiento de la crisis climática global, sino que también expone a la región a riesgos significativos en términos de estabilidad económica, social y ambiental.

A pesar de algunos avances, el panorama general muestra que los esfuerzos realizados hasta el momento son insuficientes para abordar la magnitud de los desafíos climáticos. La persistente brecha entre los ingresos generados por actividades sostenibles y aquellos provenientes de industrias intensivas en carbono es una prueba clara de la necesidad de una transformación estructural en las economías de la región. Este cambio requiere una reorientación estratégica de los flujos financieros hacia sectores de bajo impacto ambiental y alto potencial de desarrollo sostenible.

Asimismo, el índice revela deficiencias en la gobernanza climática y financiera. Muchos países de la región carecen de políticas robustas y mecanismos efectivos para atraer y canalizar recursos hacia proyectos sostenibles. Además, la falta de transparencia en la gestión de recursos y la ausencia de información confiable en algunos casos limita la capacidad de planificar e implementar estrategias efectivas para la transición. En este contexto, el IFS 2024 debe ser considerado un llamado urgente a la acción para los gobiernos, el sector privado y la comunidad internacional, con el objetivo de abordar estos desafíos y acelerar la transición hacia un futuro más sostenible.

### **2.2.2 Ingresos Sostenibles**

La variable de Ingresos Sostenibles (IS) sistematiza y analiza los ingresos provenientes de financiamiento para el desarrollo, específicamente aquellos dirigidos a la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Estos ingresos incluyen recursos de fuentes bilaterales, multilaterales y otros flujos oficiales reportados por donantes globales.

Para la presente edición, el cálculo de la variable de IS se basó en datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) recopilados en la plataforma Aid Atlas del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI, por sus siglas en inglés).<sup>8</sup> Este repositorio global detalla la información sobre financiamiento comprometido y desembolsado para el desarrollo, clasificado por objetivos clave, como la biodiversidad y el cambio climático. El análisis incluye el financiamiento para el desarrollo reportado por todos los financiadores, lo que abarca la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), los flujos de proveedores privados y otros recursos oficiales.

Para estimar la variable de IS, se calcula el porcentaje del financiamiento total destinado a objetivos de biodiversidad y cambio climático en relación con el monto total del desarrollo. La información utilizada corresponde al año 2021, la más reciente disponible al momento de la consulta, realizada en septiembre de 2024.

Es importante mencionar que Chile, Trinidad y Tobago, y Uruguay no figuran como receptores de este tipo de financiamiento, por lo que no se dispone de datos para estos países. Además, el indicador de

---

<sup>8</sup> Ambas fuentes de información están disponibles para su consulta en los siguientes enlaces:

Aid Atlas: [Aid Atlas | Visualise international development finance](#)

OECD: [OECD Data Explorer • CRS: Creditor Reporting System \(flows\) \[cloud replica\]](#)



IS se actualiza de manera continua conforme se disponen de nuevos datos, asegurando su precisión y relevancia.

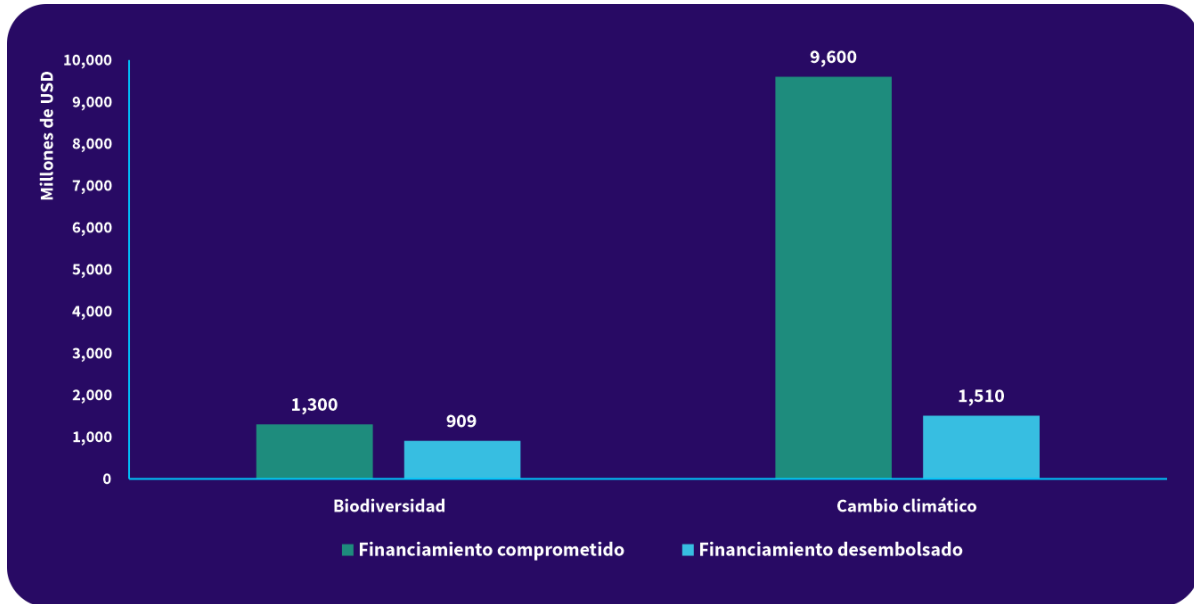
### **2.2.2.1 Tendencias regionales**

En el año 2021, el financiamiento total para el desarrollo a nivel global alcanzó los 394 mil millones de dólares en recursos comprometidos, de los cuales se desembolsaron 354 mil millones de dólares. América Latina y el Caribe recibió 54.8 mil millones de dólares en compromisos financieros, lo que equivale al 13.91% del total global. De este monto, se desembolsaron 47.8 mil millones de dólares, reflejando un nivel de ejecución de 87.22%.

De los recursos asignados a América Latina y el Caribe, 10.9 mil millones de dólares fueron dirigidos a los sectores clave de biodiversidad y cambio climático, representando el 17.22% del total comprometido para la región. Este financiamiento se desglosó de la siguiente manera, para el sector de biodiversidad se destinaron 1.3 mil millones de dólares comprometidos (2.37% del total comprometido para la región) y 909 millones de dólares desembolsados, reflejando una ejecución del 69.92% de los compromisos en este objetivo. Aunque este porcentaje es relativamente alto, el bajo monto asignado a la biodiversidad es preocupante, dado que América Latina y el Caribe albergan una de las mayores concentraciones de biodiversidad del mundo, cuya conservación es vital tanto a nivel regional como global.

Por su parte, el sector de cambio climático recibió 9.6 mil millones de dólares comprometidos (17.51% del total comprometido para la región), sin embargo, se desembolsaron únicamente 1.5 mil millones de dólares, lo que representa una ejecución del 15.62% en este objetivo. En general, estas asignaciones exponen no solo la insuficiencia del financiamiento dirigido a sectores clave, sino también la ineficiencia en la ejecución de los recursos comprometidos. La baja asignación a la biodiversidad y la escasa ejecución en el cambio climático muestran la falta de prioridad política y financiera para abordar los retos ambientales en una región que depende de gran medidas de sus recursos naturales y que enfrenta crecientes riesgos climáticos. A continuación, se presenta una gráfica que ilustra la distribución del financiamiento comprometido y desembolsado para ambos sectores.

**Gráfica 30. Financiamiento comprometido y desembolsado en América Latina y el Caribe para la biodiversidad y el cambio climático en millones de dólares en 2021**

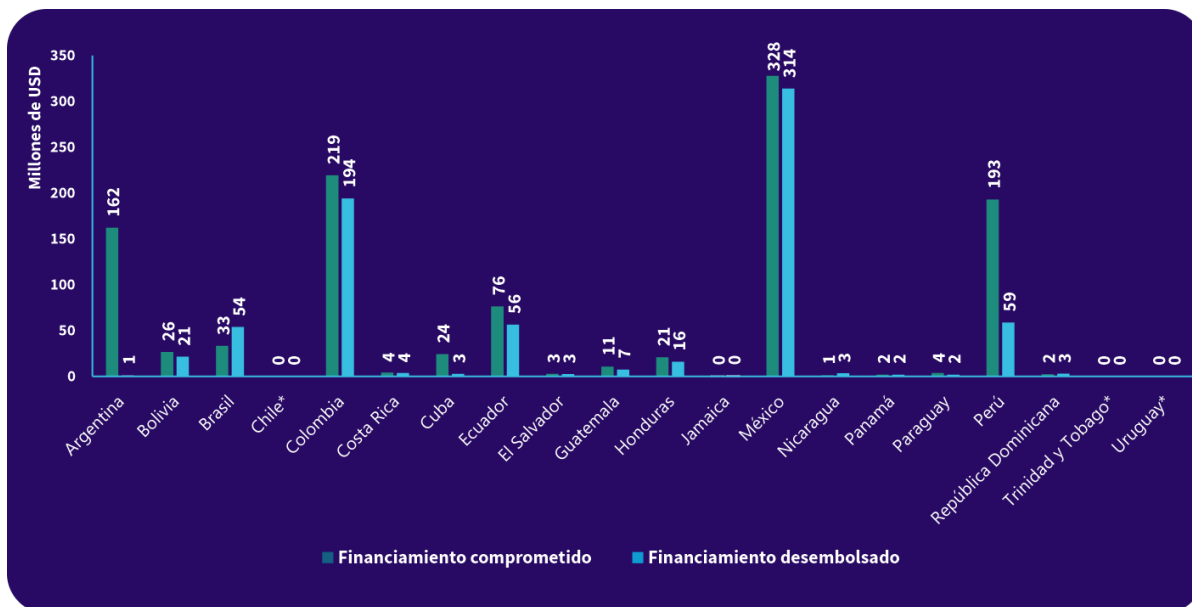


Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

En 2021, México fue el país con el mayor monto de financiamiento recibido para la protección de la biodiversidad, con 327 millones de dólares comprometidos y 314 millones de dólares desembolsados, lo que corresponde a una tasa de desembolso del 96.02%. Otros países destacados son Colombia, con 219 millones de dólares comprometidos y 194 millones de dólares, logrando una tasa de desembolso del 88.58%. Por su parte, Perú recibió 192 millones de dólares comprometidos, pero sólo se desembolsó 58.6 millones de dólares, lo que se traduce en una preocupante tasa de ejecución del 30.52%. Esta diferencia muestra la necesidad de mejorar las capacidades institucionales en algunos países para traducir los compromisos en acciones concretas y efectivas.

Por otro lado, países como Panamá con 1 millón de dólares, Nicaragua con 0.97 millones de dólares y Jamaica con apenas 0.08 millones de dólares recibieron cantidades significativamente menores de financiamiento comprometido para la biodiversidad. Estas cifras ilustran una alarmante disparidad en la distribución de los recursos dentro de la región, lo cual podría estar relacionado con limitaciones en la atracción de financiamiento internacional, falta de proyectos consolidados o capacidades insuficientes para gestionar fondos externos. La gráfica siguiente visualiza el financiamiento comprometido y desembolsado para el sector objetivo de biodiversidad.

**Gráfica 31. Financiamiento comprometido y desembolsado destinados para la biodiversidad en los 20 países de estudio en millones de dólares en 2021**



(\*) Sin datos

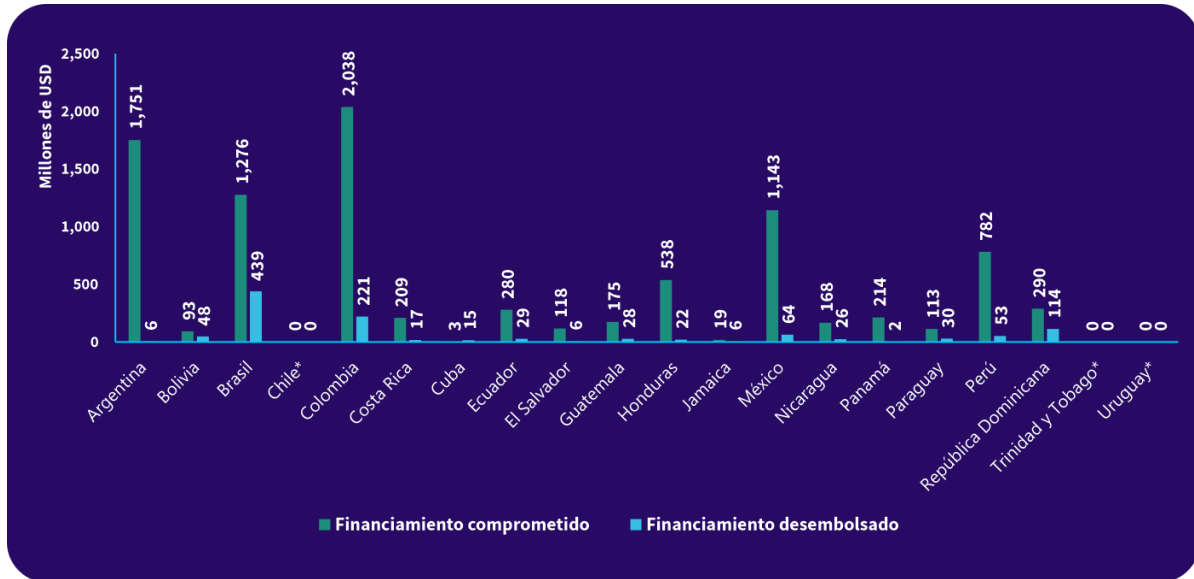
Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

En términos de financiamiento para el cambio climático, Colombia fue el mayor receptor, con 2.0 mil millones de dólares comprometidos, aunque sólo 221 millones de dólares fueron desembolsados, lo que representa una baja tasa de ejecución del 11.05%. Del total de los fondos comprometidos, 1.5 mil millones de dólares se destinaron a actividades de mitigación, 398 millones de dólares a actividades de adaptación y 105 millones de dólares a ambas actividades.

Le siguieron Argentina, con 1.7 mil millones de dólares comprometidos, Brasil con 1.2 mil millones de dólares y México con 1.1 mil millones de dólares. Aunque estos montos sugieren cierto reconocimiento de la necesidad de abordar el cambio climático, la baja tasa de ejecución observada en varios países muestran la existencia de barreras en la implementación efectiva de proyectos climáticos.

Por otro lado, Bolivia con 92 millones de dólares, Jamaica con 18 millones de dólares y Cuba con 2 millones de dólares se ubicaron en el extremo inferior en la asignación del financiamiento comprometido. Estas cifras señalan una preocupante inequidad en la asignación de recursos, que podrían estar relacionada con diversos factores como la falta de propuestas de proyectos sólidos, desafíos institucionales o una percepción internacional de menor prioridad climática en estos países. A continuación, se presenta la gráfica que ilustra el financiamiento comprometido y desembolsado para el sector objetivo de cambio climático.

**Gráfica 32. Financiamiento comprometido y desembolsado destinados para el cambio climático en los 20 países de estudio en millones de dólares en 2021**

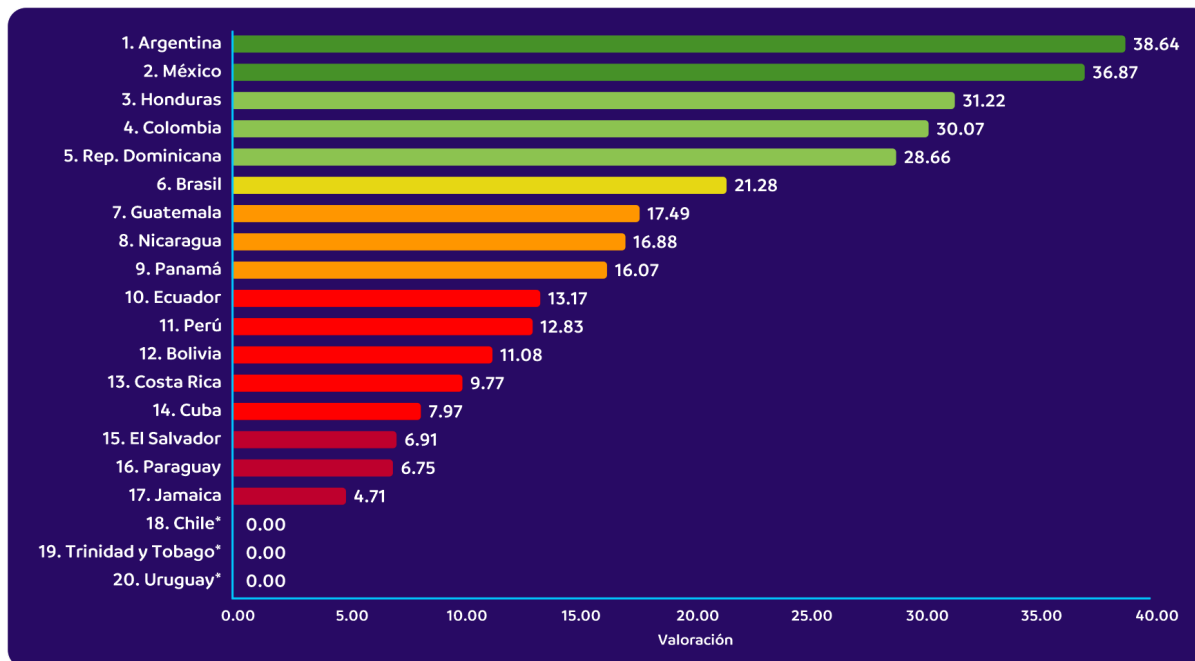


(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

## 2.2.2.2 Resultados de la variable de Ingresos Sostenibles

Gráfica 33. Ranking de Ingresos Sostenibles 2023




(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

Los resultados muestran que Argentina y México se destacan como los principales receptores de financiamiento para la biodiversidad y el cambio climático en la región, alcanzando un nivel **“ALTO”** de ingresos sostenibles. Argentina recibió un total de 2.0 mil millones de dólares destinados a biodiversidad y cambio climático, lo que representa el 38.64% de su financiamiento total para el desarrollo. No obstante, más del 90% de estos recursos, equivalente a 1.9 mil millones de dólares, provienen de préstamos, indicando una gran dependencia de mecanismos crediticios. Esta situación plantea riesgos importantes para la sostenibilidad fiscal del país, ya que el incremento del endeudamiento podría limitar su capacidad para implementar políticas climáticas y de conservación a largo plazo. Por su parte, México registró 2.3 mil millones de dólares, que representa el 36.87% de su financiamiento total. Este nivel de asignación evidencia el reconocimiento de México como un actor estratégico en las agendas globales de biodiversidad y cambio climático, dada su riqueza en biodiversidad y su vulnerabilidad a los impactos climáticos. Sin embargo, al igual que Argentina, el país enfrenta desafíos importantes en la implementación efectiva de estos recursos, especialmente en términos de garantizar un impacto significativo y sostenible en la conservación y mitigación climática.

En el nivel **“MEDIO ALTO”** de ingresos sostenibles se ubican Honduras con 31.22%, Colombia con 30.07% y República Dominicana con 28.66%. Estos países han logrado canalizar una porción considerable de su financiamiento total para el desarrollo hacia iniciativas relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático. Por su parte, Brasil con 21.28% se posiciona en el nivel **“MEDIO”**, lo que resulta notable considerando el tamaño de su economía y la relevancia de sus ecosistemas



globales como la Amazonia. Sin embargo, su proporción es relativamente baja en relación con su relevancia regional, la cual plantea interrogantes sobre la efectividad de su estrategia para movilizar recursos internacionales destinados a la sostenibilidad. Esto podría afectar en su capacidad para implementar proyectos que cumplan con los estándares requeridos por los financiadores internacionales.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** se ubican Guatemala con 17.49%, Nicaragua con 16.88% y Panamá con 16.07%. Aunque estos países enfrentan limitaciones estructurales y financieras, un aspecto positivo de Guatemala, es que el 29.91% de su financiamiento provino de subvenciones, lo que equivale a 55 millones de dólares. Este tipo de financiamiento no reembolsable reduce significativamente los riesgos asociados al endeudamiento y permite una mayor flexibilidad para implementar proyectos sostenibles sin comprometer la estabilidad fiscal a largo plazo.

En el nivel **“BAJO”** de ingresos sostenibles se encuentran Ecuador con 13.17%, Perú con 12.83%, Bolivia con 11.08%, Costa Rica con 9.77% y Cuba con 7.97%. El caso de Cuba es particularmente relevante, ya que el 100% de su financiamiento sostenible provino de subvenciones, sumando un total de 27 millones de dólares. Este enfoque, basado exclusivamente en subvenciones, contrasta con otros países de la región que dependen en gran medida de préstamos para financiar sus proyectos climáticos y de biodiversidad. Aunque esto puede interpretarse como una ventaja para Cuba en términos de evitar endeudamiento, la cantidad limitada de recursos disponibles sugiere una baja capacidad para implementar proyectos de gran escala.

En el nivel **“MUY BAJO”** se encuentran El Salvador con 6.91%, Paraguay con 6.75% y Jamaica con 4.71%. Estos países enfrentan desafíos importantes en la movilización de financiamiento sostenible. Sus bajos porcentajes pueden estar vinculados a restricciones estructurales en sus economías, así como a limitaciones en sus capacidades institucionales para acceder a fondos internacionales. Esto incluye problemas como marcos regulatorios inadecuados, falta de transparencia en el manejo de recursos y carencias en la planificación estratégica de proyectos sostenibles, que limitan la confianza de los financiadores internacionales.

Además, el análisis de la variable de IS muestra que, en conjunto, los países de estudio recibieron un total de 11.8 mil millones de dólares en financiamiento para la protección de la biodiversidad y el cambio climático. Estos recursos incluyen tanto financiamiento para el desarrollo como emisiones de bonos verdes y sostenibles, sin embargo, reflejan una notable desigualdad en su distribución entre las naciones de la región.

Colombia obtuvo la mayor recepción del financiamiento para el desarrollo, con 8.2 mil millones de dólares, una cifra 24 veces mayor al financiamiento recibido por Cuba, que fue de 341 millones de dólares. Esta ventaja no solo posiciona a Colombia como un actor destacado en la captación de recursos internacionales, sino que también muestra su capacidad de establecer estrategias y desarrollar proyectos alineados con las prioridades globales de sostenibilidad.

En el caso de los recursos asignados exclusivamente a biodiversidad y cambio climático, Colombia fue el principal país receptor con 2.2 mil millones de dólares, lo que equivale a un financiamiento 121 veces mayor al recibido por Jamaica, que obtuvo solo 18 millones de dólares. Otros países como



México, Argentina y Brasil también destacaron en la captación de recursos para estos objetivos, aunque en menor proporción en comparación con Colombia.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes en 2023, seis países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México) han implementado la emisión de bonos verdes y sostenibles como una estrategia complementaria para financiar proyectos ambientales. En total, estos países emitieron 1.5 mil millones de dólares en este tipo de instrumentos financieros, siendo México el país que más emitió con 881 millones de dólares, representando el 58.73% del total regional.

Colombia ocupa el segundo lugar con emisiones por 230 millones de dólares, lo que resalta su posición como un actor relevante en la captación de financiamiento sostenible. Otros países como Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador tuvieron participaciones más modestas. La desigualdad en la emisión de bonos verdes y sostenibles puede estar relacionada con el tamaño de las economías, la profundidad de los mercados financieros, la estabilidad política y la capacidad técnica para estructurar y gestionar este tipo de financiamiento.

Este análisis muestra los retos y desigualdades entre los países de la región en términos de su capacidad para captar financiamiento y emitir bonos verdes y sostenibles. Por un lado, los países con las economías más grandes y mercados financieros desarrollados tienen mayor acceso a instrumentos de financiamiento innovadores, como bonos verdes y sostenibles, debido a su mayor capacidad de crédito y la confianza de los inversionistas internacionales. Sin embargo, esta ventaja puede ir acompañada de un enfoque desigual en la asignación de recursos, donde las comunidades más vulnerables no siempre se benefician de los proyectos financiados.

Por otro lado, los países más pequeños o con economías menos diversificadas enfrentan retos mayores para atraer financiamiento climático sostenible. Esto puede deberse a la falta de mercados regulatorios adecuados o una percepción de mayor riesgo por parte de los financiadores. Además, las prioridades de políticas internas pueden estar más enfocadas en problemas como el crecimiento económico o la reducción de la pobreza, dejando en segundo plano las inversiones en sostenibilidad ambiental.

A continuación, se presenta una tabla detallada con los flujos de financiamiento recibido por cada país en los sectores de biodiversidad, cambio climático y emisiones de bonos verdes y sostenibles, proporcionando una visión general de la distribución y las estrategias de captación de recursos en la región.

**Tabla 6. Rubros de la variable de ingresos sostenibles en los países de estudio en dólares**

País	Financiamiento total para el desarrollo	Financiamiento total destinado a la biodiversidad y el cambio climático	Financiamiento total destinado a la biodiversidad	Financiamiento total destinado al cambio climático	Bonos verdes y sostenibles
<b>Argentina</b>	5,390,000,000	1,913,019,083	162,090,078	1,750,929,005	169,838,346
<b>Bolivia</b>	1,210,000,000	119,300,128	26,478,402	92,821,726	14,784,362

<b>Brasil</b>	6,840,000,000	1,309,355,119	33,286,180	1,276,068,939	145,955,172
<b>Chile</b>	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Colombia</b>	8,270,000,000	2,256,879,977	219,290,952	2,037,589,025	230,000,000
<b>Costa Rica</b>	2,180,000,000	213,051,882	4,053,668	208,998,214	Sin datos
<b>Cuba</b>	341,000,000	27,163,718	24,323,491	2,840,227	Sin datos
<b>Ecuador</b>	3,310,000,000	355,783,242	76,201,193	279,582,049	80,000,000
<b>El Salvador</b>	1,740,000,000	120,170,870	2,613,045	117,557,825	Sin datos
<b>Guatemala</b>	1,060,000,000	185,431,662	10,620,990	174,810,672	Sin datos
<b>Honduras</b>	1,790,000,000	558,754,751	20,744,165	538,010,586	Sin datos
<b>Jamaica</b>	396,000,000	18,636,756	84,570	18,552,186	Sin datos
<b>México</b>	6,380,000,000	1,471,000,256	327,694,523	1,143,305,733	881,555,820
<b>Nicaragua</b>	1,000,000,000	168,772,466	973,242	167,799,224	Sin datos
<b>Panamá</b>	1,340,000,000	215,380,667	1,779,139	213,601,528	Sin datos
<b>Paraguay</b>	1,730,000,000	116,778,221	3,626,959	113,151,262	Sin datos
<b>Perú</b>	7,600,000,000	975,192,621	192,901,494	782,291,127	Sin datos
<b>República Dominicana</b>	1,020,000,000	292,382,140	2,291,688	290,090,452	Sin datos
<b>Trinidad y Tobago</b>	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Uruguay</b>	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Total Regional</b>	<b>51,597,000,000</b>	<b>10,317,053,559</b>	<b>1,109,053,779</b>	<b>9,207,999,780</b>	<b>1,522,133,700</b>

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilados en el Aid Atlas (2021) y del Greenbondtransparency (2023), consultados en 2024.

El análisis de los flujos de financiamiento para biodiversidad y cambio climático en América Latina y el Caribe presenta una preocupante dependencia de los préstamos como principal fuente de recursos. Del total de 9.5 mil millones de dólares asignados a estos sectores, el 92.6% provino de préstamos, mientras que solo el 7.4% correspondió a subvenciones. Esta estructura de financiamiento no solo genera una carga financiera significativa para los países receptores, sino que también compromete su capacidad fiscal a largo plazo. Los préstamos, a menudo acompañados de intereses considerables, reducen el margen de maniobra de los gobiernos para atender otras prioridades estratégicas.

Países como Argentina, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana figuran entre los más afectados, con más del 95% de su financiamiento ambiental proveniente de préstamos. Esta alta dependencia crediticia refleja la limitada disponibilidad de financiamiento no reembolsable y muestra las barreras estructurales que enfrentan los países para acceder a mecanismos de financiamiento más equitativos. La siguiente tabla presenta una comparación detallada de los montos y porcentajes de financiamiento provenientes de préstamos y subvenciones por país.


**Tabla 7. Financiamiento destinado a la biodiversidad y el cambio climático vía préstamos y subvenciones en dólares y en porcentaje**

País	Financiamiento total destinado a la biodiversidad y el cambio climático en dólares	Financiamiento total destinado a la biodiversidad y el cambio climático vía préstamos en dólares	Financiamiento total destinado a la biodiversidad y el cambio climático vía subvenciones en dólares	Financiamiento total destinado a la biodiversidad y el cambio climático vía préstamos en porcentaje	Financiamiento total destinado a la biodiversidad y el cambio climático vía subvenciones en porcentaje
Argentina	1,913,019,083	1,910,137,083	2,882,000	99.8%	0.2%
Bolivia	119,300,128	92,700,128	26,600,000	77.7%	22.3%
Brasil	1,309,355,119	1,188,455,119	120,900,000	90.8%	9.2%
Chile	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Colombia	2,256,879,977	2,112,339,977	144,540,000	93.6%	6.4%
Costa Rica	213,051,882	208,451,882	4,600,000	97.8%	2.2%
Cuba	27,163,718	0	27,163,718	0.0%	100.0%
Ecuador	355,783,242	298,733,242	57,050,000	84.0%	16.0%
El Salvador	120,170,870	112,527,825	7,643,045	93.6%	6.4%
Guatemala	185,431,662	129,981,662	55,450,000	70.1%	29.9%
Honduras	558,754,751	494,910,586	63,844,165	88.6%	11.4%
Jamaica	18,636,756	17,252,186	1,384,570	92.6%	7.4%
México	1,471,000,256	1,392,350,256	78,650,000	94.7%	5.3%
Nicaragua	168,772,466	142,485,224	26,287,242	84.4%	15.6%
Panamá	215,380,667	214,450,767	929,900	99.6%	0.4%
Paraguay	116,778,221	112,785,221	3,993,000	96.6%	3.4%
Perú	975,192,621	838,142,621	137,050,000	85.9%	14.1%
República Dominicana	292,382,140	287,400,452	4,981,688	98.3%	1.7%
Trinidad y Tobago	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
Uruguay	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Total Regional</b>	<b>10,317,053,559</b>	<b>9,553,104,231</b>	<b>763,949,328</b>	<b>92.6%</b>	<b>7.4%</b>

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilada en el Aid Atlas (2021), consultados en 2024.

Si bien los préstamos son una herramienta válida, depender casi exclusivamente de ellos en una región con altos niveles de desigualdad y vulnerabilidad climática es insostenible. Un cambio fundamental para aliviar esta presión consiste en aumentar las subvenciones, especialmente en un contexto donde muchas economías de la región enfrentan vulnerabilidades estructurales.

Sin embargo, el incremento de las subvenciones no debe ser visto como una solución numérica, sino como una oportunidad para optimizar el uso de estos recursos. Es indispensable que los fondos



destinados a la protección de la biodiversidad y el cambio climático se asignen a proyectos con impacto reales y medibles, garantizando su efectividad y contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la conservación de los ecosistemas. De lo contrario, incluso un aumento en la cantidad de recursos podría no generar los resultados esperados.

Para avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente, no basta con incrementar el financiamiento disponible, sino que es importante asegurar que este se distribuya de manera justa y equitativa entre los países más necesitados, sin perpetuar las necesidades estructurales. Esto implica que la comunidad internacional debe asumir una responsabilidad compartida con el diseño de mecanismos financieros más inclusivos, que promuevan el desarrollo económico sostenible sin poner en peligro la estabilidad fiscal de los países de la región.

### **2.2.3 Ingresos Intensivos en Carbono**

En América Latina y el Caribe, las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y minerales, junto con la comercialización y exportación de combustibles fósiles, representan una fuente importante de ingresos fiscales y no fiscales para muchos países de la región. Sin embargo, estas actividades también son responsables de generar emisiones significativas de gases de efecto invernadero, lo que plantea diversos retos en el contexto de la transición energética global y en la lucha contra el cambio climático.

La variable de Ingresos Intensivos en Carbono (IIC) analiza la cantidad de recursos que provienen de esquemas tributarios y no tributarios asociados a la comercialización y exportación de combustibles fósiles, así como de ingresos derivados de la producción y exportación de hidrocarburos y minerales. Este análisis permite evaluar la dependencia económica de los países respecto a actividades altamente intensivas en carbono y revela los desafíos que enfrentan para diversificar sus economías en favor de modelos más sostenibles.

Para esta edición, se utilizaron datos públicos y oficiales correspondientes al año 2023 de los 20 países de estudio. El cálculo se basa en el porcentaje que representan estos ingresos respecto al ingreso total recaudado por cada país. Es importante mencionar que, debido a limitaciones de acceso de datos desagregados, no se logró incluir información específica de Cuba, lo que limita parcialmente la representatividad total de los resultados.

#### **2.2.3.1 Tendencias regionales**

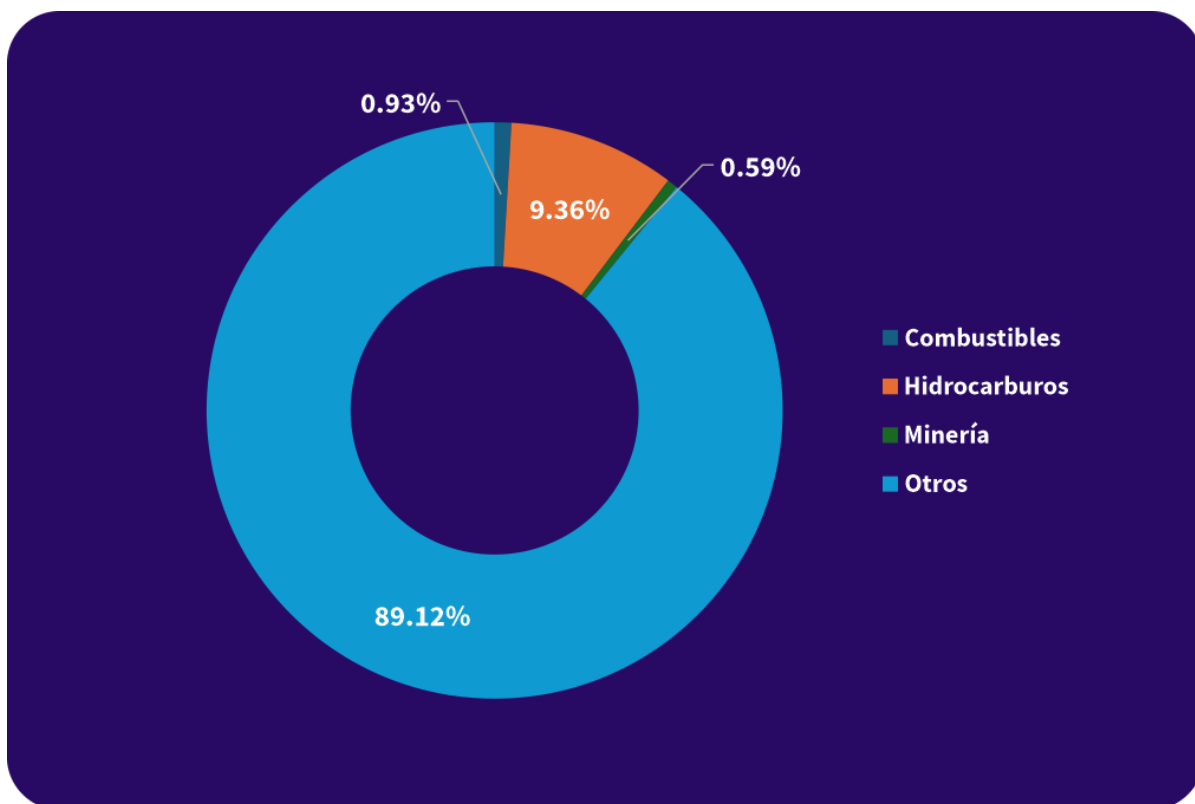
El análisis regional de la variable de IIC muestra que los 20 países de estudio generaron en conjunto 233.3 mil millones de dólares por actividades relacionadas con hidrocarburos, combustibles fósiles y minería. Este monto representa el 10.88% del ingreso total recaudado por las economías de la región en 2023, revelando no solo la importancia económica de estos sectores, sino también los desafíos estructurales que enfrentan los países de la región en su búsqueda de una transición hacia modelos económicos más sostenibles.

El sector de hidrocarburos fue el mayor generador de ingresos, aportando 197.6 mil millones de dólares, equivalentes al 9.36% del ingreso total regional. La dependencia de la producción y exportación de petróleo y gas natural sigue siendo fundamental para la economía de varios países, como Ecuador, México y Trinidad y Tobago. Sin embargo, esta dependencia plantea grandes desafíos

en la transición hacia energías renovables y menos contaminantes, ya que muchos modelos económicos siguen basados en la extracción de recursos naturales.

Por su parte, las actividades relacionadas con la comercialización de combustibles fósiles aportaron 19.7 mil millones de dólares, representando el 0.93% del ingreso total regional. Este rubro comprende principalmente los recursos obtenidos por la venta y distribución de combustibles, un sector que, aunque más pequeño que la extracción de hidrocarburos, sigue siendo fundamental para la infraestructura energética de la región. Mientras que la explotación y exportación de minerales generó 12.3 mil millones de dólares, equivalentes al 0.59% del ingreso total. Aunque esta participación es menor en comparación con los hidrocarburos, la minería sigue siendo un sector clave para varios países de la región, especialmente aquellos ricos en recursos como cobre, litio y oro. En la siguiente gráfica, se detalla la proporción de ingresos generados por cada rubro de la variable IIC, evidenciando el peso relativo que tienen estos sectores en la estructura económica regional.

**Gráfica 34. Ingresos públicos obtenidos por concepto de combustibles, hidrocarburos y minería en los 20 países de estudio en porcentaje en 2023**



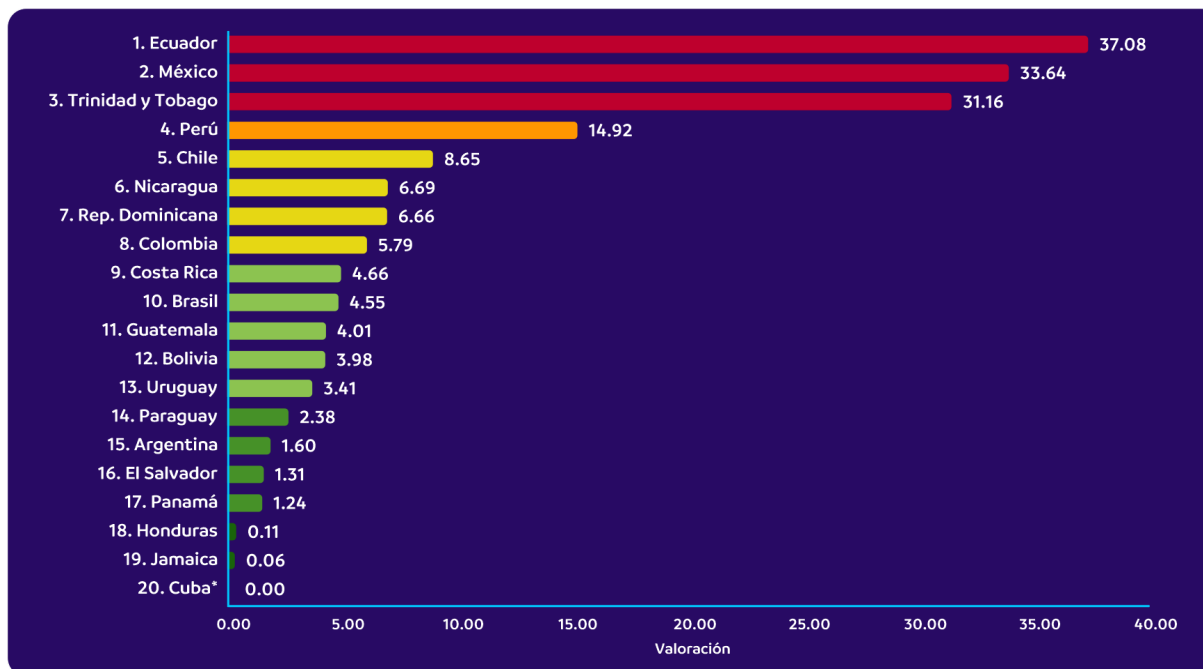
Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

A pesar de los esfuerzos por diversificar las economías de América Latina y el Caribe, los sectores de hidrocarburos, combustibles fósiles y minería siguen jugando un papel crucial en los ingresos de la región. Este modelo económico altamente dependiente de estos recursos presenta grandes retos. Si bien el potencial de estos sectores han impulsado un crecimiento económico en el pasado, su

sostenibilidad en el largo plazo está en juego, especialmente frente a los impactos del cambio climático.

### 2.2.3.2 Resultados de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono

Gráfica 35. Ranking de Ingresos Intensivos en Carbono 2023



(\*) Sin datos


Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los datos indican que Ecuador, México y Trinidad y Tobago presentan una elevada dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, ubicándose en el nivel **“MUY ALTO”**. Ecuador generó 16.1 mil millones de dólares, lo que representa el 37.08% de su ingreso total. México registró 133.3 mil millones de dólares, equivalentes al 33.64% de su ingreso total. Trinidad y Tobago obtuvo 2.8 mil millones de dólares, lo que constituye el 31.15% de su ingreso total. Esta alta dependencia de recursos fósiles plantea importantes retos para la implementación de políticas de transición energética. A pesar de los compromisos globales para la descarbonización, estos países enfrentan presiones significativas para mantener la inversión en la industria de los combustibles fósiles, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para adoptar fuentes de energía más limpias y sostenibles.

En el nivel **“MEDIO ALTO”** se ubica Perú con un 14.92% de sus ingresos totales provenientes de actividades intensivas en carbono. La minería, especialmente de metales como el cobre, plata y el oro, representan un componente clave en su economía, vinculando directamente a emisiones de carbono a nivel global.

En el nivel **“MEDIO”** se encuentran Chile con 8.65%, Nicaragua con 6.69%, República Dominicana con 6.66% y Colombia con 5.79%. Estos países mantienen una dependencia moderada de las actividades





intensivas en carbono, aunque con una mayor diversificación económica en comparación con las economías más dependientes de los combustibles fósiles o la minería. No obstante, aún enfrentan grandes retos para reducir su exposición a estas fuentes de emisiones, particularmente en sectores estratégicos como la minería en Chile, que es uno de los mayores productores de cobre y molibdeno a nivel regional, y el sector de hidrocarburos en Colombia y República Dominicana.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** se ubican Costa Rica con 4.66%, Brasil con 4.55%, Guatemala con 4.01%, Bolivia con 3.98% y Uruguay con 3.41%, presentando una menor proporción de ingresos vinculados a actividades intensivas en carbono. Aunque su dependencia de estas fuentes es relativamente baja, estos países aún deben afrontar el reto de reducir gradualmente su huella de carbono mientras fomentan una economía sostenible. Para lograr esto, deben fortalecer políticas públicas que incentiven la inversión en energías limpias y apoyen en la diversificación económica hacia sectores menos intensivos en carbono.

En el nivel **“BAJO”** se sitúan Paraguay con 2.38%, Argentina con 1.60%, El Salvador con 1.31% y Panamá con 1.24%, lo que indica una baja dependencia de actividades intensivas en carbono. Por otro lado, Honduras con 0.11% y Jamaica con 0.06% se ubican en el nivel **“MUY BAJO”**, siendo las economías menos dependientes de actividades vinculadas a los combustibles fósiles en la región. Este escenario presenta una oportunidad para estos países, ya que podrían ser pioneros en la adopción de energías renovables y en el diseño de estrategias bajas en carbono. Sin embargo, este potencial debe ser respaldado por políticas proactivas, incentivos para la inversión climática y un fortalecimiento institucional que facilite el acceso a tecnologías limpias. Además, estos países deben aprovechar su baja dependencia para crear una infraestructura económica más sostenible y resiliente al cambio climático.

Por otra parte, el análisis de esta variable revela que Ecuador es el país con la mayor dependencia por actividades intensivas en carbono, acumulando un total de 16.1 mil millones de dólares, de los cuales 14.5 mil millones de dólares provinieron del sector de hidrocarburos y 1.6 mil millones de dólares del sector minero. Estos montos evidencian la urgente necesidad de diversificar su economía, especialmente considerando los riesgos asociados a la volatilidad de los mercados globales de combustibles fósiles y los compromisos internacionales de reducciones de emisiones.

México, en términos absolutos, cuenta con mayores ingresos por estas actividades, alcanzando 133.3 millones de dólares. De esta cifra, 121.9 millones de dólares provinieron del sector hidrocarburo y 11.4 millones de dólares del sector combustible. Estos montos muestran que la estructura económica de México está profundamente ligada a los combustibles fósiles, lo que plantea desafíos críticos para cumplir con los compromisos climáticos globales. Trinidad y Tobago, aunque con ingresos más modestos, con 2.8 mil millones de dólares, depende exclusivamente del sector hidrocarburos, lo que expone su economía a una alta vulnerabilidad debido a la transición energética a nivel global.

Por otro lado, países como El Salvador, Honduras y Jamaica presentan una menor dependencia de actividades intensivas en carbono. El Salvador generó 116 millones de dólares, de los cuales 104 millones provienen del sector de hidrocarburos. Honduras y Jamaica, con ingresos de 18 millones y 3 millones de dólares respectivamente, son las economías menos vinculadas a estos sectores. Aunque estas cifras son indicativas de una menor presión climática por parte de estas naciones, también plantea desafíos en términos de financiamiento para un desarrollo sostenible.



En suma, países como Ecuador, México y Trinidad y Tobago enfrentan el reto de descarbonizar sus economías fuertemente dependientes de actividades de alto impacto ambiental, naciones con menor dependencia, como El Salvador, Honduras y Jamaica, tienen una ventana de oportunidad para priorizar modelos de desarrollo bajo en carbono, siempre que reciban el apoyo financiero y técnico necesario. A continuación, se presenta una tabla que desglosa los ingresos generados por cada rubro dentro de la variable de IIC, proporcionando un panorama general de las economías regionales y su relación con los sectores intensivos en carbono.<sup>9</sup>


**Tabla 8. Ingresos públicos destinados a los rubros de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono en dólares en 2023**

País	Ingreso total	Ingreso de la variable IIC	Ingreso de la variable IIC: Combustibles	Ingreso de la variable IIC: Hidrocarburos	Ingreso de la variable IIC: Minería
<b>Argentina</b>	156,832,481,604	2,511,543,489	1,776,925,673	734,617,815	Sin datos
<b>Bolivia</b>	45,894,163,391	1,825,129,381	Sin datos	1,825,129,381	Sin datos
<b>Brasil</b>	1,071,230,633,929	48,745,670,719	92,287,683	46,541,097,373	2,112,285,663
<b>Chile</b>	84,315,116,317	7,295,937,243	3,100,414,251	Sin datos	4,195,522,992
<b>Colombia</b>	93,766,525,272	5,427,735,639	Sin datos	5,393,836,542	33,899,097
<b>Costa Rica</b>	22,547,223,412	1,051,363,064	1,049,484,863	Sin datos	1,878,201
<b>Cuba</b>	11,802,400,000	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Ecuador</b>	43,606,579,495	16,170,733,265	Sin datos	14,510,634,135	1,660,099,131
<b>El Salvador</b>	8,902,653,672	116,346,941	Sin datos	104,747,715	11,599,226
<b>Guatemala</b>	14,743,772,286	591,107,407	Sin datos	565,986,079	25,121,328
<b>Honduras</b>	15,956,086,748	18,069,106	Sin datos	14,634,146	3,434,959
<b>Jamaica</b>	6,829,695,378	3,771,767	Sin datos	2,407	3,769,360
<b>México</b>	396,360,349,099	133,342,944,820	11,434,847,973	121,908,096,847	Sin datos
<b>Nicaragua</b>	3,018,373,542	202,062,936	176,243,092	4,797,659	21,022,185
<b>Panamá</b>	27,579,449,552	342,289,000	300,000,000	21,176,000	21,113,000
<b>Paraguay</b>	14,455,937,864	344,152,275	330,112,319	Sin datos	14,039,956
<b>Perú</b>	44,970,658,565	6,710,745,028	926,083,064	1,539,135,563	4,245,526,401
<b>República Dominicana</b>	24,658,662,749	1,642,831,197	62,998,575	1,579,832,621	Sin datos
<b>Trinidad y Tobago</b>	9,228,594,640	2,875,245,018	Sin datos	2,875,245,018	Sin datos
<b>Uruguay</b>	13,586,483,308	463,639,258	459,144,771	Sin datos	4,494,487

Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Estos resultados muestran que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe dependen económicamente de las actividades intensivas en carbono. Esta situación no solo dificulta el avance

<sup>9</sup> Nota. Cuando la información aparece como “sin datos”, significa que no se identificó información en este rubro o que los datos abarcan múltiples rubros de la variable y sólo se considera en uno para evitar una sobrestimación.



hacia economías sostenibles, sino que también representa un obstáculo importante para cumplir con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático, como los establecidos en el Acuerdo de París. En este sentido, la urgencia de implementar estrategias integrales para disminuir esta dependencia es fundamental. Estas estrategias deben centrarse en la diversificación económica, promoviendo sectores que reduzcan la vulnerabilidad de las economías frente a los mercados de combustibles fósiles y minerales. Asimismo, la transición hacia economías bajas en carbono requiere un rediseño de los esquemas tributarios, introduciendo impuestos ambientales que desincentiven las prácticas nocivas y fomenten alternativas sostenibles.

### **2.2.3.3 Impuestos al carbono**

El impuesto al carbono se presenta como una herramienta fiscal fundamental para que los países de América Latina y el Caribe enfrenten los desafíos del cambio climático y aceleren la transición hacia economías más sostenibles. En una región con alta dependencia de actividades intensivas en carbono, como la extracción de hidrocarburos y la minería, este impuesto no solo busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también incentivar la inversión en fuentes de energía renovable y tecnologías limpias.

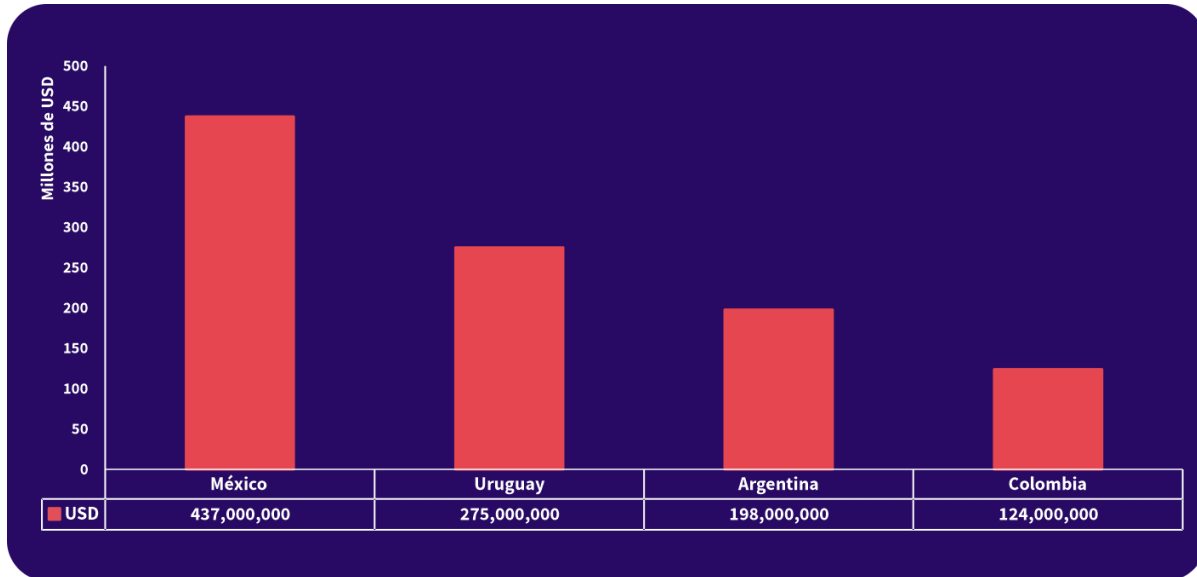
El impuesto al carbono tiene el potencial de desincentivar actividades contaminantes al internalizar los costos ambientales asociados, de promover la diversificación económica favoreciendo sectores menos intensivos en carbono y en la generación de recursos fiscales que puedan destinarse a programas de mitigación y adaptación climática. Sin embargo, su implementación enfrenta importantes desafíos económicos y políticos. Muchos países de la región dependen significativamente de sectores intensivos en carbono, lo que complica la adopción de políticas que graven estas actividades sin afectar la estabilidad económica. Adicionalmente, este impuesto puede ser percibido como una carga para ciertos sectores productivos y consumidores, lo que exige una cuidadosa planificación para garantizar una transición justa.

De acuerdo con datos del Banco Mundial en 2023, sólo 4 de los 20 países evaluados en la región han implementado un impuesto al carbono.<sup>10</sup> En total, estos países recaudaron 1.03 mil millones de dólares a través de este instrumento. México lidera la recaudación con 437 millones de dólares, seguido de Uruguay con 275 millones de dólares. Otros países con impuestos al carbono incluyen a Chile y Colombia, aunque sus aportes fiscales son más modestos. La siguiente gráfica ilustra la emisión del impuesto al carbono en Argentina, Colombia, México y Uruguay.

---

<sup>10</sup> La información sobre el impuesto al carbono corresponde a octubre de 2024. Los detalles están disponibles en: [Carbon Pricing Dashboard | Up-to-date overview of carbon pricing initiatives](#)

**Gráfica 36. Impuesto al carbono en Argentina, Colombia, México y Uruguay en millones de dólares en 2023**



Fuente. Elaboración propia con datos del Carbon Pricing del Banco Mundial (2023), consultados en 2024.


Para que el impuesto al carbono cumpla su propósito de manera eficaz, resulta esencial que los ingresos recaudados se canalicen de manera estratégica hacia iniciativas clave que impulsen la sostenibilidad. Estas deben incluir inversiones en energías renovables, mejoras en la eficiencia energética, programas que fortalezcan la resiliencia de comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático, e incentivos para la adopción de tecnologías limpias.

Además de ser una herramienta que permita la reducción de emisiones, el impuesto al carbono puede actuar como un catalizador para la reestructuración económica en la región, promoviendo modelos más sostenibles y resilientes. Sin embargo, su éxito no radica únicamente en la implementación del impuesto, sino en garantizar que esta medida sea inclusiva, transparente y coherente con las estrategias nacionales de desarrollo sostenible.

### 2.2.4 Presupuestos Sostenibles

La variable de Presupuestos Sostenibles (PS) evalúa los recursos presupuestarios asignados y etiquetados específicamente para sectores clave vinculados a la sostenibilidad y la acción climática. Esto incluye los rubros relacionados con la biodiversidad, el cambio climático y la gestión forestal en el sector ambiental; eficiencia energética y energías renovables en el sector energético; así como partidas destinadas a la prevención y atención de desastres naturales.

El objetivo principal del análisis de esta variable es identificar las prioridades presupuestarias de los gobiernos y cuantificar los recursos destinados a programas y proyectos dirigidos a mitigar el cambio climático, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la resiliencia frente a fenómenos naturales.



Dado que el cambio climático es una problemática transversal, asignar presupuestos específicos para su atención puede ser un proceso complejo. En este sentido, muchos países de la región no cuentan con un etiquetado claro que permita identificar la totalidad de los recursos destinados a esta agenda. Por ello, este análisis se centra únicamente en los presupuestos que tienen una asignación explícita y verificable en los sectores mencionados.

Para esta edición, el análisis de la variable de PS utiliza datos oficiales y públicos correspondientes al año 2023 de cada país de estudio. El cálculo se basa en el porcentaje que representan los presupuestos asignados a la biodiversidad, el cambio climático, las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión forestal y la atención a desastres naturales respecto al presupuesto total nacional.

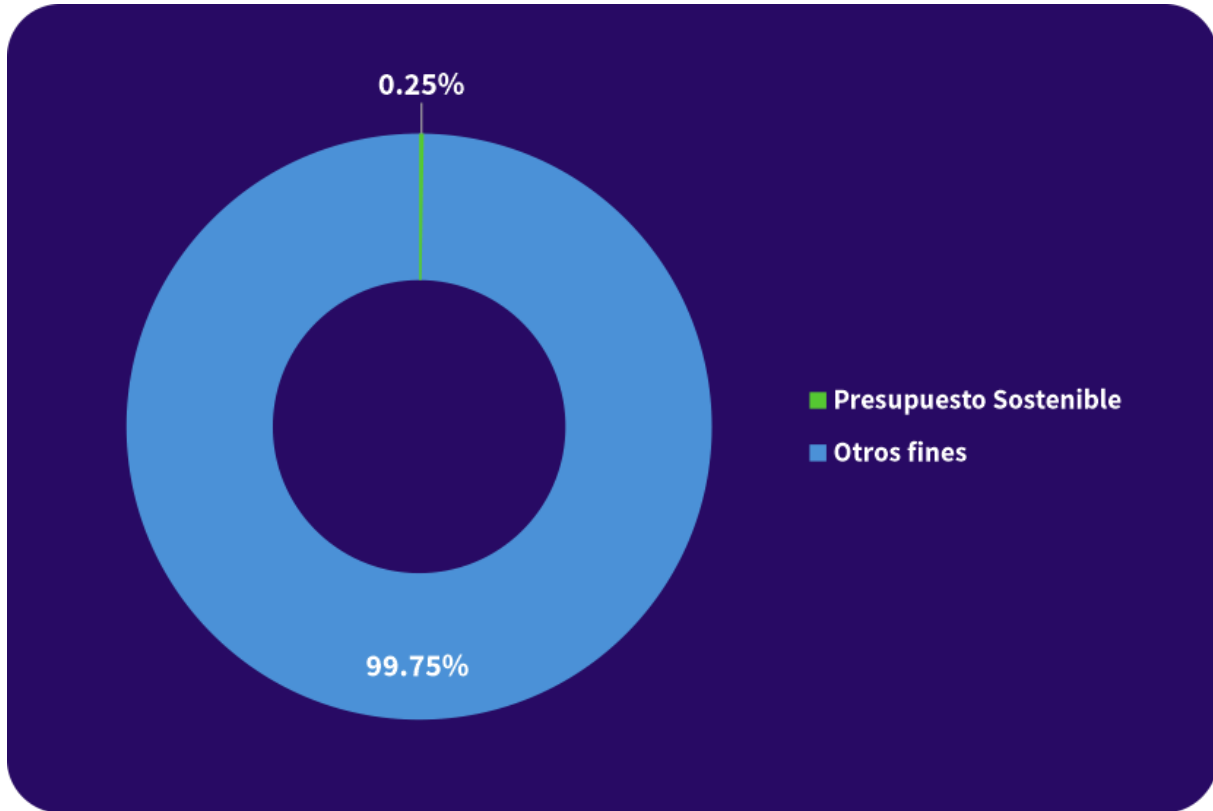
Es importante mencionar que, aunque los países podrían estar destinando recursos adicionales a estos sectores, la falta de un etiquetado claro dificulta su inclusión en el análisis. Este enfoque evita sobreestimaciones y proporciona una visión precisa de los recursos asignados exclusivamente para estas actividades.

#### **2.2.4.1 Tendencias regionales**

El análisis presupuestario de 2023 para América Latina y el Caribe muestra un bajo nivel en la asignación de recursos a sectores estratégicos relacionados con la sostenibilidad. De los 2,094.1 mil millones de dólares correspondientes del presupuesto total combinado de los 20 países de estudio, apenas 5.3 mil millones de dólares fueron dirigidos a rubros clave como biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, gestión forestal y atención a desastres naturales. Este monto equivale al 0.25% del presupuesto total, una cifra alarmantemente baja considerando la magnitud de los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta la región.

Este escenario pone de manifiesto una insuficiente priorización de recursos hacia iniciativas sostenibles, lo cual limita la capacidad de los países para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático. Además, refleja un desfase entre la urgencia de actuar frente a crisis ambientales y el esfuerzo presupuestario real que destinan los gobiernos de la región. En la siguiente gráfica se detalla la proporción del presupuesto sostenible asignado a nivel regional.

**Gráfica 37. Presupuesto sostenible asignado en conjunto a los 20 países con relación al presupuesto total en porcentaje en 2023**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

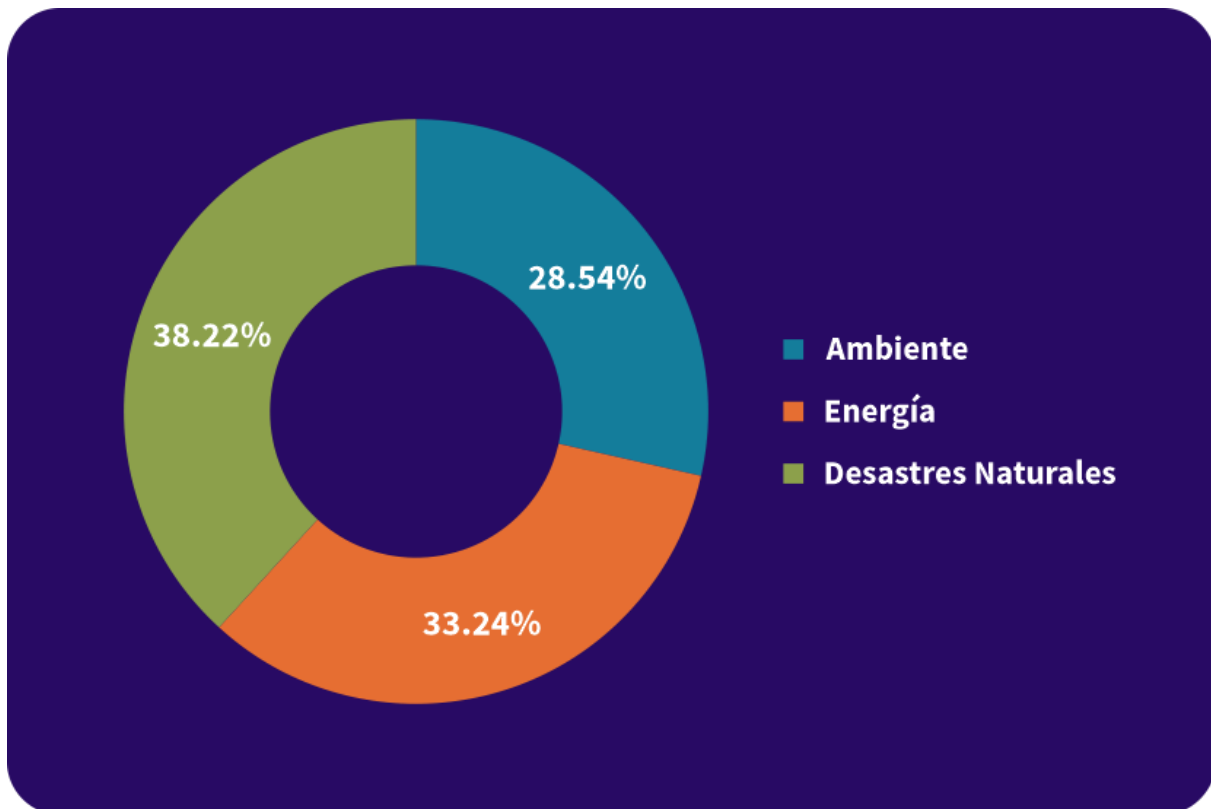
El análisis del presupuesto sostenible en la región muestra una distribución concentrada en tres sectores clave: atención a desastres naturales, energía y medio ambiente. De los 5.3 mil millones de dólares asignados, destaca que el sector de desastres naturales lidera las asignaciones con 2.1 mil millones de dólares, representando el 38.59% del presupuesto sostenible. Esta cifra evidencia la prioridad a fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante desastres naturales, una necesidad crítica en una región vulnerable a eventos climáticos extremos. Además, es un componente fundamental en la adaptación del cambio climático.

El sector energético con una asignación de 2.0 mil millones de dólares, equivalente al 36.02% del presupuesto sostenible, ocupa el segundo lugar. La inversión en eficiencia energética y energías renovables resulta estratégica para avanzar hacia una matriz energética más limpia y para reducir las emisiones de carbono. Este rubro es fundamental para que los países de la región cumplan con los objetivos establecidos en sus compromisos climáticos internacionales.

Por su parte, el sector ambiental recibió 1.4 mil millones de dólares, representado el 25.39% del presupuesto sostenible. Incluye iniciativas de conservación de ecosistemas, mitigación del cambio climático y gestión forestal, todas ellas vitales para preservar la biodiversidad y los recursos naturales, además de garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos esenciales.

A pesar de la importancia de estos sectores, los recursos asignados representan un porcentaje mínimo del presupuesto total regional, el 0.25%. Por ende, es urgente que los países de la región incrementen significativamente sus inversiones en sostenibilidad. A continuación, la gráfica siguiente ilustra cómo se distribuyen los recursos entre estos sectores, destacando su peso relativo dentro del presupuesto sostenible.

**Gráfica 38. Presupuesto sostenible destinado en conjunto de los 20 países por sector de la variable de presupuestos sostenibles en porcentaje en 2023**

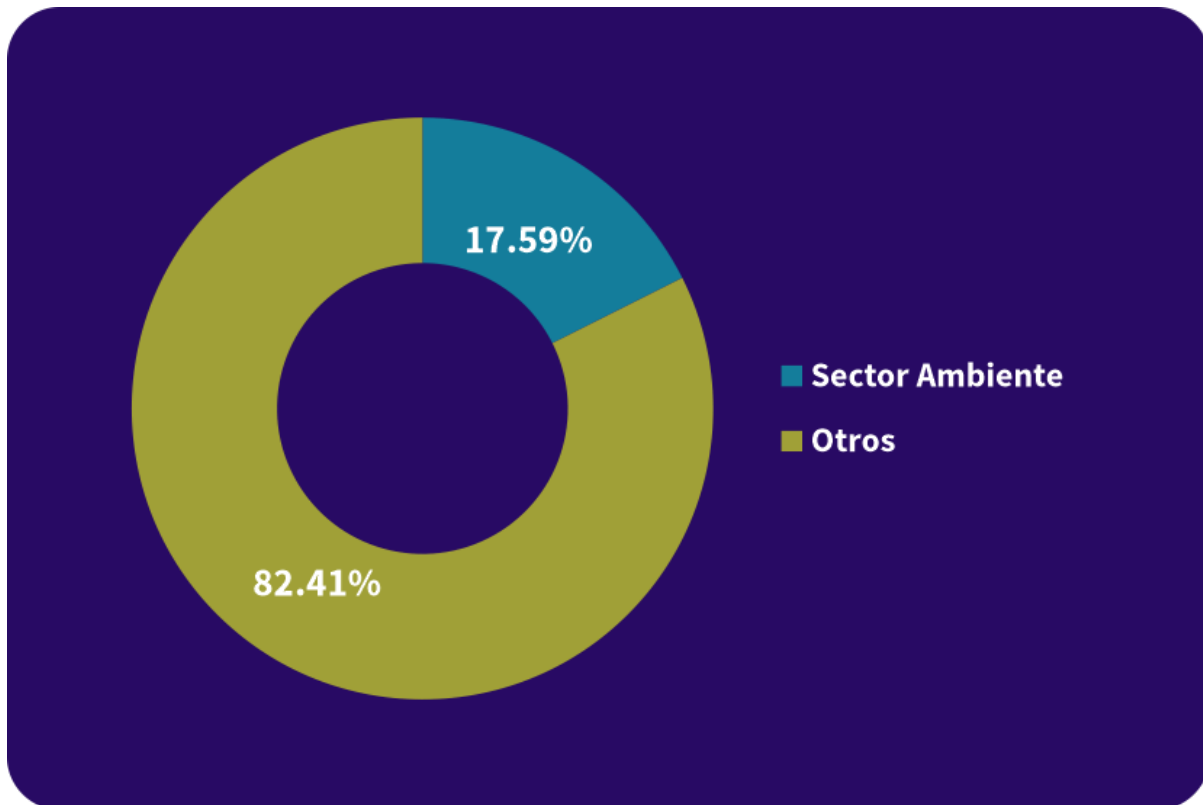


Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

En 2023, para el sector ambiental los 20 países de estudio destinaron 1.4 mil millones de dólares, asignados a los rubros de biodiversidad, cambio climático y gestión forestal, este monto representa únicamente el 17.59% del presupuesto total disponible de los Ministerios o Secretarías de Medio Ambiente.

El 84.41% restante de los recursos se destinó a actividades no directamente relacionadas con estos rubros prioritarios, lo que muestra una desconexión importante entre los desafíos ambientales críticos de la región y las asignaciones presupuestarias. Estas cifras plantean la urgente necesidad de alinear los presupuestos hacia iniciativas que aborden directamente la conservación de los ecosistemas, la mitigación del cambio climático y la gestión forestal. La gráfica a continuación ilustra la proporción del presupuesto asignado al sector ambiental.

**Gráfica 39. Presupuesto asignado al sector ambiente con respecto al presupuesto destinado a los Ministerios o Secretaría de Medio Ambiente en conjunto de los 20 países en porcentaje en 2023**

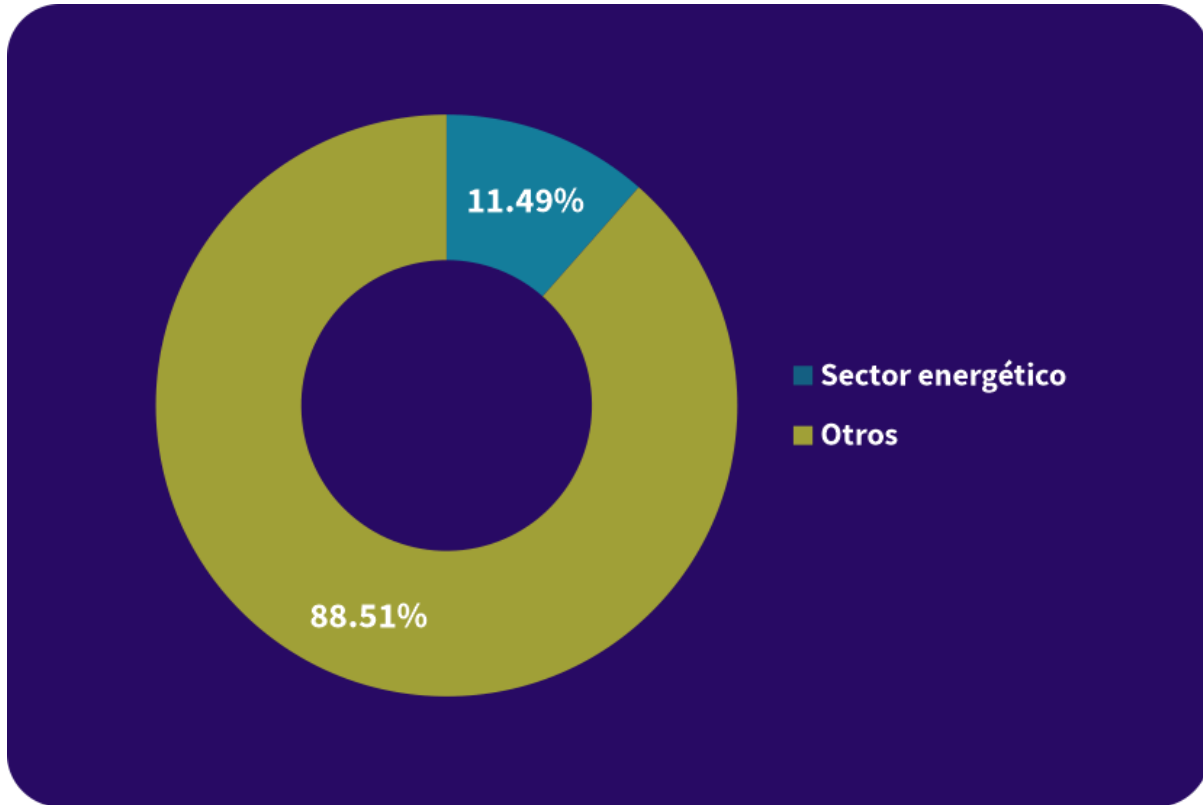


Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

En cuanto al sector energético, los países de la región destinaron un total de 2.0 mil millones de dólares a iniciativas específicas de eficiencia energética y energías renovables. Este monto representa el 11.49% del presupuesto total destinado al sector energético. El 88.51% restante del presupuesto energético se asignó a actividades no relacionadas directamente con estos sectores estratégicos, destacando un enfoque insuficiente en las prioridades necesarias para reducir las emisiones de carbono y cumplir con los compromisos globales en materia de cambio climático. La gráfica siguiente muestra la proporción del presupuesto asignado al sector energético.



**Gráfica 40. Presupuesto asignado al sector energético con respecto al presupuesto destinado al sector energía en conjunto de los 20 países en porcentaje en 2023**

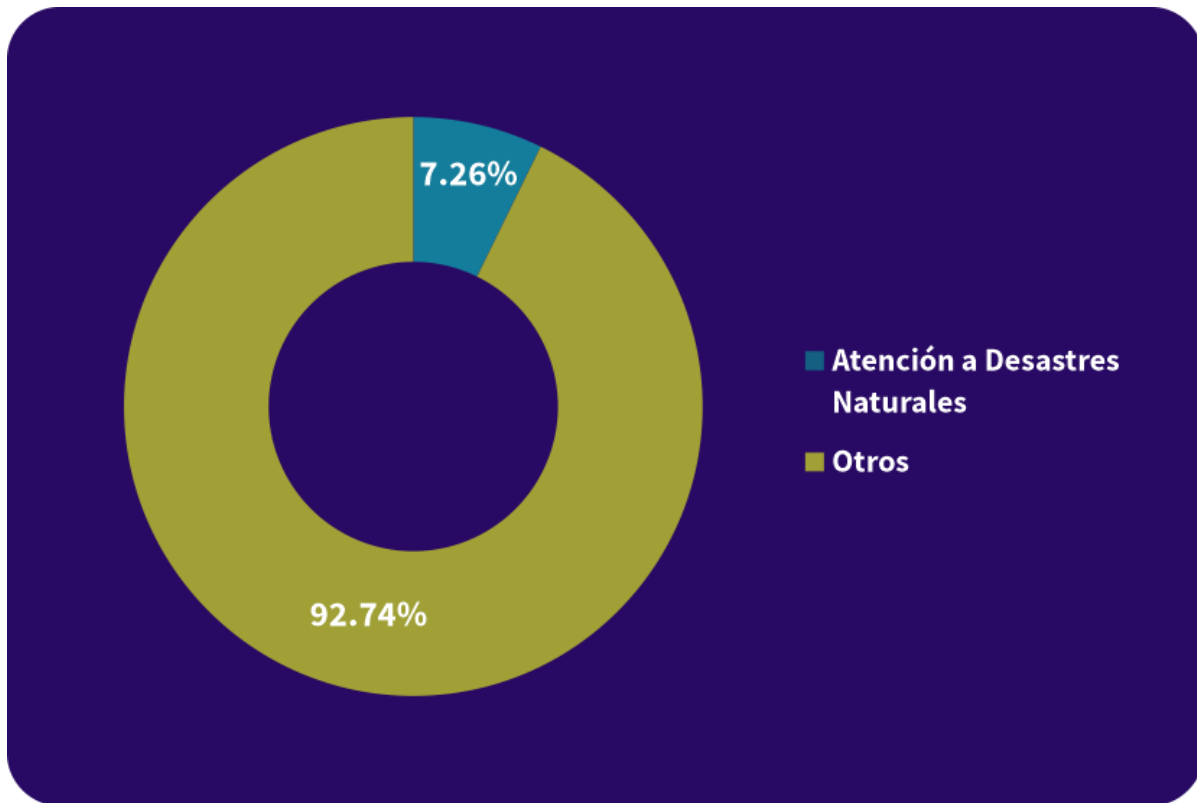


Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

En el análisis del sector de atención a desastres naturales, los países de la región asignaron un total de 2.1 mil millones de dólares, lo que representa el 7.26% del presupuesto total destinado por las instituciones responsables de gestionar y prevenir los impactos de fenómenos climáticos extremos. Este presupuesto se orientó hacia medidas de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, demostrando la importancia que los gobiernos atribuyen a este rubro frente a la creciente vulnerabilidad de la región a eventos extremos relacionados con el cambio climático.

Sin embargo, el porcentaje relativamente bajo indica que los esfuerzos presupuestarios son aún insuficientes para abordar los riesgos crecientes. Dado el impacto desproporcionado que estos eventos tienen en las economías y poblaciones más vulnerables, es fundamental reforzar la inversión en este sector. La gráfica que sigue detalla cómo se distribuyeron los recursos destinados a la atención de los desastres naturales.

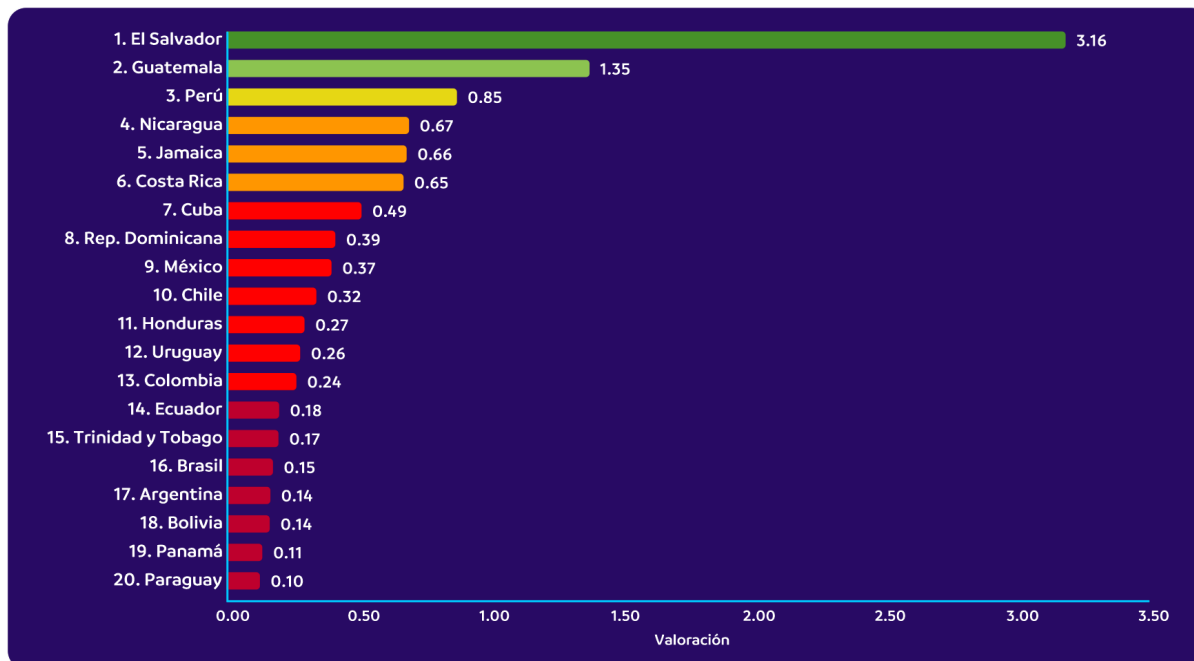
**Gráfica 41. Presupuesto asignado al sector de atención de desastres naturales con respecto al presupuesto destinado al sector que encarga de este sector en conjunto de los 20 países de estudio en 2023**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

## 2.2.4.2 Resultados de la variable de Presupuestos Sostenibles

Gráfica 42. Ranking de Presupuestos Sostenibles 2023




Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los resultados de la variable de Presupuestos Sostenibles (PS) indican que El Salvador es el país con mejor posición, ya que asignó 291 millones de dólares, lo que representa el 3.16% de su presupuesto total. Este porcentaje lo posiciona en el nivel **“ALTO”**, lo que sugiere una mayor consideración de la sostenibilidad en su planificación presupuestaria.

Guatemala, con una asignación de 199 millones de dólares, equivalentes al 1.35% de su presupuesto total, se posiciona en el nivel **“MEDIO ALTO”** de presupuestos sostenibles. No obstante, ningún otro país destina más del 1.0% de su presupuesto a los rubros vinculados con biodiversidad, cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, y atención a desastres naturales. Este panorama general, muestra una priorización limitada de la sostenibilidad ambiental y climática dentro de los presupuestos nacionales.

En el nivel **“MEDIO”**, se encuentra Perú con una asignación de 488 millones de dólares, lo que representa el 0.85% de su presupuesto total. Aunque esta cifra supera el promedio regional, parece insuficiente para responder de manera íntegra a los desafíos climáticos y ambientales que enfrenta el país. La alta incidencia de desastres naturales, como inundaciones y sequías, exige una planificación presupuestaria más robusta que priorice la resiliencia climática y la conservación de los recursos naturales.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** se ubican Nicaragua con 0.67%, Jamaica con 0.66% y Costa Rica con 0.65%. Estas asignaciones resultan insuficientes para afrontar los desafíos climáticos específicos de cada país. En el caso de Nicaragua, uno de los países más vulnerables a fenómenos climáticos extremos en



Centroamérica, requiere de recursos para mejorar su infraestructura resiliente y fortalecer la capacidad de adaptación de sus comunidades. Sin embargo, la baja asignación presupuestaria muestra la falta de priorización de estos desafíos críticos, dejando al país expuesto a impactos devastadores que afectan particularmente a las comunidades más vulnerables. Jamaica, como una isla caribeña, enfrenta grandes riesgos relacionados con la subida del nivel del mar, la degradación de ecosistemas costeros y la pérdida de biodiversidad marina. A pesar de estos desafíos, la falta de recursos asignados limita los esfuerzos para proteger sus ecosistemas. En términos generales, este bajo nivel de inversión no solo limita la implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que también retrasa el progreso hacia una transición energética sostenible y la consolidación de economías bajas en carbono.

En el nivel **“BAJO”** de presupuestos sostenibles se ubican Cuba con 0.49%, República Dominicana con 0.39%, México con 0.37%, Chile con 0.32%, Honduras con 0.27%, Uruguay con 0.26% y Colombia con 0.24%. Estos países de la región presentan una gran brecha entre sus capacidades económicas, compromisos climáticos y las necesidades reales para enfrentar el cambio climático. Estas cifras muestran una asignación presupuestaria limitada, que no está alineada con los retos climáticos ni con las capacidades de estas naciones. En el caso de México, la alta dependencia de sectores intensivos en carbono, como los hidrocarburos, dificulta la redistribución de recursos hacia sectores sostenibles y retrasa el progreso hacia una transición energética.

En el nivel **“MUY BAJO”** de presupuestos sostenibles se encuentran Ecuador con 0.18%, Trinidad y Tobago con 0.17%, Brasil con 0.15%, Argentina y Bolivia con 0.14%, Panamá con 0.11% y Paraguay con 0.10%. Estos países destinan menos del 0.20% de sus presupuestos nacionales a actividades sostenibles, situación que refleja una alarmante desconexión entre las prioridades presupuestarias y los retos ambientales críticos que enfrentan estas naciones, particularmente en contexto de alta vulnerabilidad climática y riqueza ecológica. En el caso de Ecuador y Bolivia, ambos países son altamente vulnerables a fenómenos climáticos extremos, que afectan tanto a sus economías como a sus poblaciones más vulnerables. Sin embargo, la limitada asignación de recursos a actividades sostenibles pone en riesgo su capacidad de implementar políticas de adaptación y mitigación efectivas. Por su parte, Brasil, hogar de la Amazonia, el ecosistema más grande y estratégico del mundo, enfrenta una contradicción entre el papel fundamental en la estabilidad climática global y la escasa inversión en sostenibilidad. La deforestación acelerada y la presión por expandir actividades extractivas no solo comprometen la biodiversidad, sino que también amenazan los compromisos internacionales de reducción de emisiones. Por tal motivo, es fundamental que estos países reevalúen sus prioridades presupuestarias y adopten estrategias que impulsen inversiones en sostenibilidad.

En términos absolutos, México fue el país que destinó una mayor asignación con 1.7 mil millones de dólares a actividades sostenibles. De este monto, 1.1 mil millones de dólares se destinaron a la atención de desastres naturales, cifra que muestra la alta vulnerabilidad del país frente a fenómenos climáticos extremos como huracanes e inundaciones. En el sector energético, México asignó 487 millones de dólares para impulsar la transición hacia fuentes renovables, mientras que únicamente 186 millones de dólares se dirigieron a la protección ambiental, una cifra modesta frente a la riqueza ecológica y biodiversidad del país. Es importante mencionar que este presupuesto representa sólo el 0.37% del presupuesto total nacional, es decir, una asignación muy preocupante entre la magnitud de los retos ambientales y los recursos destinados a enfrentarlos.

Brasil ocupó el segundo lugar en términos de recursos absolutos, con 1.5 mil millones de dólares asignados a actividades sostenibles. Sin embargo, esta cifra representa únicamente el 0.15% de su presupuesto total, un porcentaje alarmantemente bajo considerando la relevancia global de sus ecosistemas estratégicos, como la Amazonia.

Por su parte, Perú destinó 488 millones de dólares a actividades sostenibles, lo que equivale al 0.85% de su presupuesto total. Aunque esta asignación es menor en términos absolutos en comparación con Brasil y México, supera el promedio regional en términos porcentuales, lo que evidencia un esfuerzo más consistente para integrar la sostenibilidad en su planificación presupuestaria.

En el extremo inferior de la escala, países como Nicaragua con 19 millones de dólares, Trinidad y Tobago con 16 millones de dólares y Paraguay con 14 millones de dólares, reportaron las menores asignaciones. Aunque sus economías y presupuestos nacionales son considerablemente más pequeños, estas cifras son limitadas para abordar los desafíos climáticos y ambientales.

En términos generales, estos datos presentan la existencia de una brecha entre las necesidades urgentes de sostenibilidad y las prioridades presupuestarias de la región. Países con mayor riqueza natural y biodiversidad, como Brasil y México, aún no destinan recursos proporcionales a la escala de los desafíos que enfrentan, mientras que economías más pequeñas luchan por encontrar capacidad financiera para integrar medidas sostenibles. A continuación, se presenta una tabla que detalla el presupuesto destinado a cada sector que compone la variable de Presupuesto Sostenible.

**Tabla 9. Presupuesto destinado a los sectores de la variable de Presupuestos Sostenibles en dólares en 2023**

País	Presupuesto total	Presupuesto de la variable PS	Presupuesto de la variable PS: Sector ambiental	Presupuesto de la variable PS: Sector energético	Presupuesto de la variable PS: Sector de atención a desastres naturales
<b>Argentina</b>	97,731,827,837	139,744,863	134,094,911	4,509,867	1,140,085
<b>Bolivia</b>	45,894,163,391	64,316,095	48,864,493	15,397,754	53,848
<b>Brasil</b>	1,042,465,359,816	1,591,876,088	371,096,693	985,922,955	234,856,439
<b>Chile</b>	84,315,116,317	24,904,438	31,060,465	175,469,139	36,026,554
<b>Colombia</b>	93,766,525,272	226,421,747	46,595,024	1,618,142	178,208,581
<b>Costa Rica</b>	22,547,223,412	146,093,900	132,575,842	1,311,207	12,206,851
<b>Cuba</b>	14,495,679,167	70,833,333	Sin datos	Sin datos	70,833,333
<b>Ecuador</b>	31,502,865,594	55,475,642	34,029,842	8,056,581	13,389,220
<b>El Salvador</b>	8,902,653,672	281,337,275	25,253,525	249,380,790	6,702,960
<b>Guatemala</b>	14,743,772,286	199,568,390	101,453,913	7,513,652	90,600,825
<b>Honduras</b>	15,954,460,731	43,404,225	17,041,059	1,165,071	25,198,095
<b>Jamaica</b>	6,627,352,394	43,748,268	32,276,388	Sin datos	11,471,880
<b>México</b>	467,322,511,261	1,751,298,599	186,595,852	487,113,997	1,077,588,750

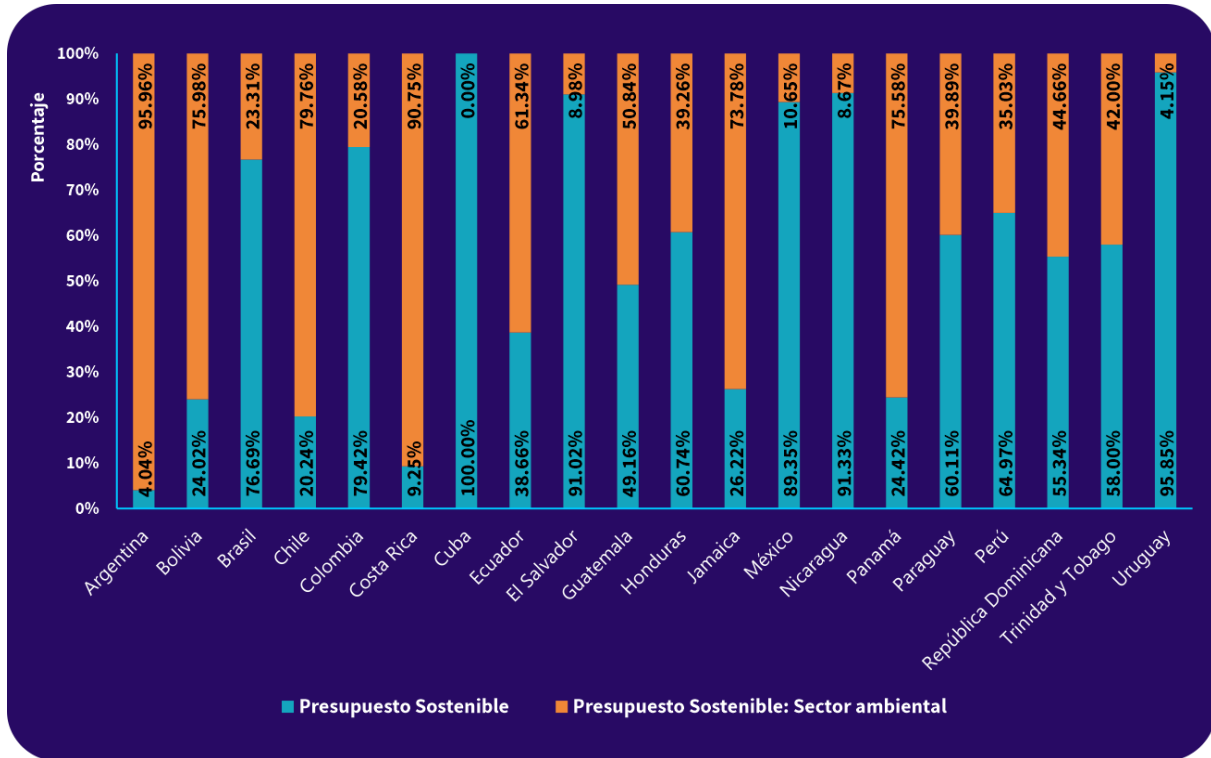
<b>Nicaragua</b>	2,888,669,148	19,318,364	1,675,575	14,842,734	2,800,055
<b>Panamá</b>	25,579,449,552	28,777,499	21,750,293	7,027,206	Sin datos
<b>Paraguay</b>	14,455,937,864	14,899,747	5,944,249	1,266,654	7,688,844
<b>Perú</b>	57,430,554,559	488,489,276	171,106,078	Sin datos	317,383,198
<b>República Dominicana</b>	25,094,358,300	97,744,974	43,655,771	37,457,645	16,631,558
<b>Trinidad y Tobago</b>	9,594,830,653	16,660,637	6,997,481	7,076,489	2,586,667
<b>Uruguay</b>	18,053,657,908	46,242,195	1,917,182	476,430	43,848,583

Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

El análisis sectorial del presupuesto sostenible muestra notables variaciones en la asignación de recursos entre los sectores ambiental, energético y de atención a desastres naturales. En el caso del sector ambiental, Argentina se destaca en la región, destinando el 95.96% de su presupuesto sostenibles a este sector, lo que equivale a 134 millones de dólares. Esta alta asignación se destina principalmente a la protección de ecosistemas y la conservación ambiental, áreas clave para mitigar la pérdida de biodiversidad y preservar los servicios ecosistémicos. Otros países como Costa Rica con 90.74% y Chile con 79.76% también priorizan este sector, demostrando un compromiso con la sostenibilidad ambiental en sus agendas presupuestarias.

Por otro lado, los países como Perú, con un 8.97%, República Dominicana, con un 8.67% y Trinidad y Tobago, con un 4.14% asignaron proporciones considerablemente más bajas al sector ambiental. Estas cifras plantean preocupaciones, dado que estos países enfrentan desafíos ambientales importantes y la insuficiencia de los recursos podría limitar su capacidad para implementar medidas efectivas de conservación y restauración, agravando las amenazas a la biodiversidad. En este sentido, es fundamental que los países con asignaciones insuficientes reconsideren sus prioridades presupuestarias y redirijan recursos hacia el fortalecimiento del sector ambiental. La siguiente gráfica ilustra la proporción de recursos destinados a este sector.

**Gráfica 43. Presupuesto destinado al sector ambiental con respecto al total del presupuesto sostenible en porcentaje en 2023**



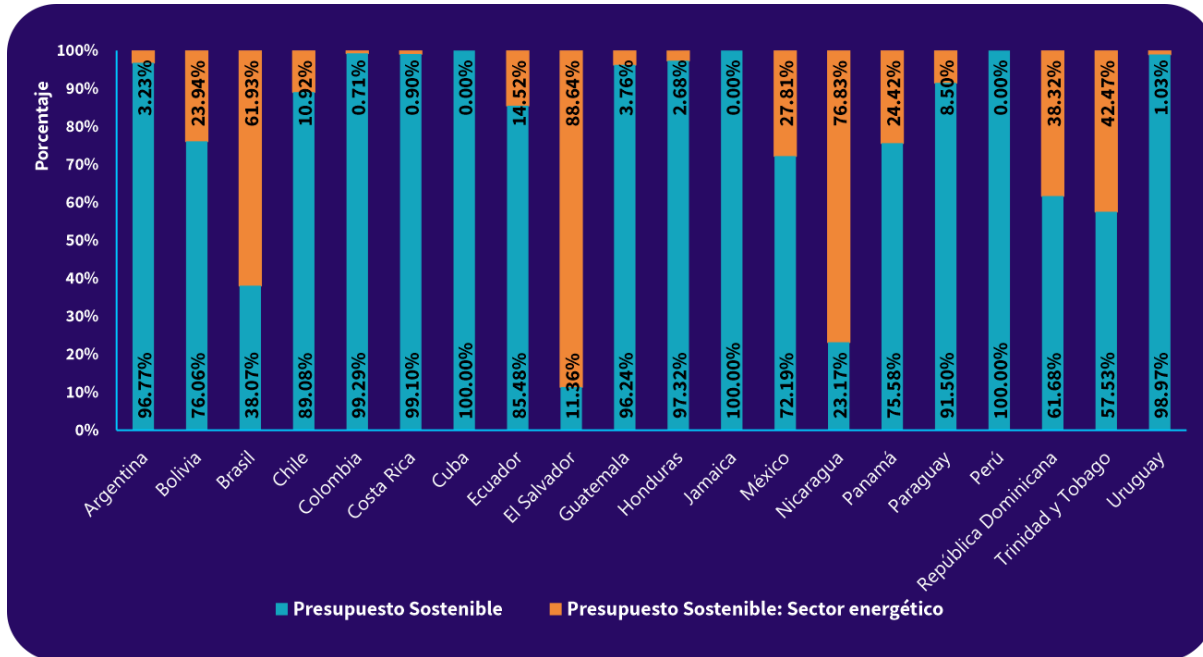
Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

En el caso del sector energético, El Salvador lidera las asignaciones presupuestarias, destinando el 88.64% de su presupuesto sostenible, equivalente a 249 millones de dólares, a proyectos relacionados con energías renovables y eficiencia energética. Un ejemplo destacado es la inversión en la hidroeléctrica del Río Lempa, que busca no solo diversificar la matriz energética nacional, sino también reducir la dependencia de combustibles fósiles. Nicaragua con un 76.83% de sus recursos asignados al sector, y Brasil, con un 61.93%, también sobresalen por su enfoque en fortalecer iniciativas energéticas sostenibles.

Por otro lado, países como Uruguay con 1.03%, Costa Rica con 0.89% y Colombia con 0.71% destinaron proporciones marginales de su presupuesto sostenible al sector energético. Para el caso de Cuba, Jamaica y Perú no se logró identificar recursos específicos asignados a este sector. Esto se puede deber a la falta de claridad en el etiquetado de estos rubros, así como una desconexión entre sus necesidad de transición energética y las decisiones presupuestarias. La siguiente gráfica ilustra las proporciones de recursos asignados al sector energético por país.



**Gráfica 44. Presupuesto destinado al sector energético con respecto al total del presupuesto sostenible en porcentaje en 2023**



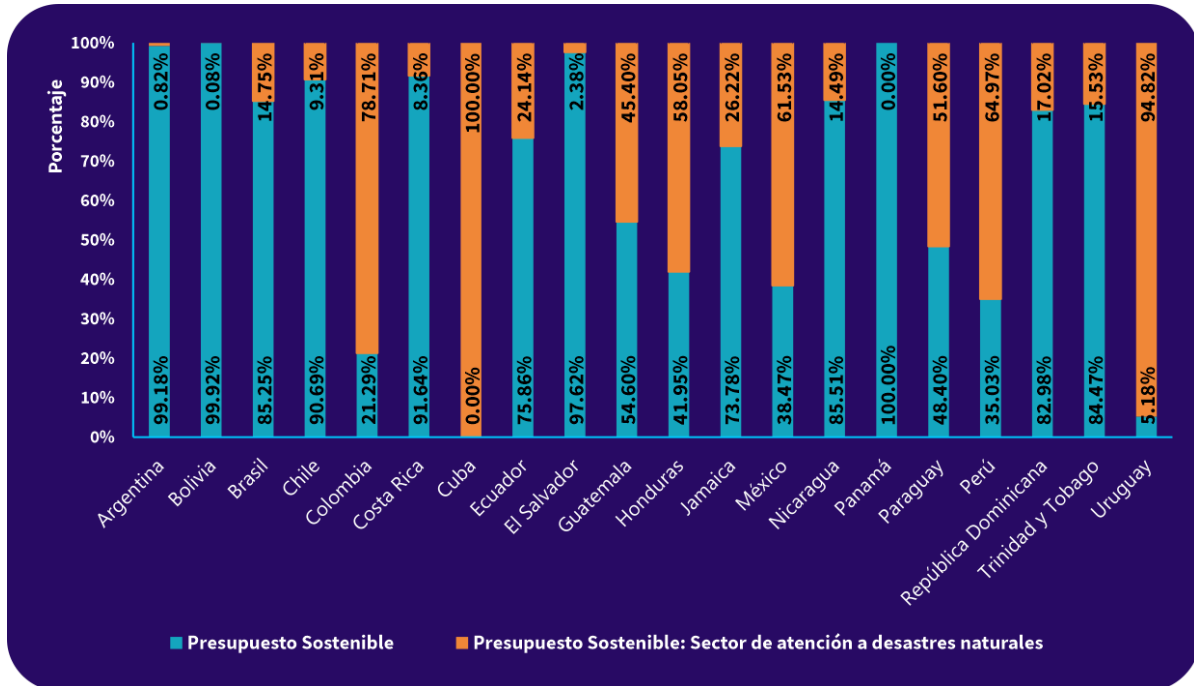
Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

La atención a desastres naturales constituye una prioridad crítica para los países de América Latina y el Caribe, dada su alta vulnerabilidad a eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias a este sector muestran grandes diferencias en las estrategias nacionales y en la capacidad de respuesta ante estos desafíos.

Cuba destinó el 100% de su presupuesto sostenible, equivalente a 70 millones de dólares, a la atención de desastres naturales. Aunque esta cifra se debe a que no se identificaron recursos dirigidos a otros sectores clave. Uruguay con 94.82%, Colombia con 78.70% y Perú con 64.97% también dedicaron una proporción significativa de su presupuesto sostenible a este sector, lo que denota un reconocimiento de la urgencia de abordar la gestión de riesgos climáticos y fortalecer su capacidad de respuesta y resiliencia.

En el otro extremo, países como El Salvador con 2.38%, Argentina con 0.81% y Bolivia con 0.08% asignaron una proporción mínima de sus recursos a la atención de desastres naturales, lo que contrasta con su exposición a eventos que afectan tanto a sus economías como a sus poblaciones vulnerables. En el caso de Panamá no se identificaron recursos específicos destinados a este sector. De manera general, la falta de recursos suficientes para la prevención, mitigación y respuesta ante desastres naturales no solo compromete la seguridad de las comunidades, sino que también pone en riesgo el desarrollo sostenible de la región. La gráfica a continuación detalla la proporción de recursos destinados a la atención de desastres naturales.

**Gráfica 45. Presupuesto destinado al sector de atención a los desastres naturales con respecto al total del presupuesto sostenible en porcentaje en 2023**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los resultados evidencian una preocupante realidad: la mayoría de los países de América Latina y el Caribe asignan una fracción mínima de sus presupuestos nacionales a sectores críticos como la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la transición hacia energías renovables y la gestión de desastres naturales. Estos sectores no solo son fundamentales para abordar la creciente crisis climática, sino también para garantizar la resiliencia y sostenibilidad de sus economías a largo plazo.

Aunque países como El Salvador y Guatemala han destacado por asignar porcentajes relativamente más altos dentro del contexto regional, sus esfuerzos resultan insuficientes frente a la escala y urgencia de los desafíos climáticos y ambientales. La mayoría de las naciones continúan rezagadas, destinando menos del 1% de sus presupuestos nacionales a actividades sostenibles. Este nivel de inversión es preocupante, ya que no solo limita la capacidad de respuesta ante los impactos del cambio climático, sino que también compromete el desarrollo socioeconómico y aumenta la vulnerabilidad de sus poblaciones.

Para revertir esta tendencia, los gobiernos deben adoptar un enfoque transformador que combine un incremento sustancial en la asignación de recursos con estrategias integrales y coordinadas. Es fundamental priorizar áreas clave como la mitigación del cambio climático, las energías renovables y la conservación de ecosistemas críticos. Además, se deben implementar sistemas de etiquetado presupuestario claros y efectivos, que permitan rastrear los recursos destinados a iniciativas



sostenibles, mejorando la transparencia, la rendición de cuentas y el monitoreo del impacto de las inversiones.

La transición hacia economías verdes y resilientes no solo depende del volumen de recursos asignados, sino también de la calidad y efectividad de su uso. Requiere un compromiso por parte de los gobiernos para redefinir sus estrategias, integrando la sostenibilidad como un eje central y transversal en sus políticas públicas. En este contexto, la acción inmediata y decisiva será clave para enfrentar los desafíos climáticos, cumplir con los compromisos internacionales y garantizar un futuro sostenible para la región.

### **2.2.5 Presupuestos Intensivos en Carbono**

En América Latina y el Caribe, los presupuestos públicos destinados a actividades intensivas en carbono presentan un eje crucial en la transición hacia economías más sostenibles y resilientes frente al cambio climático. La evaluación de estas asignaciones es fundamental para alinear las políticas fiscales con los compromisos internacionales de reducción de emisiones y para identificar alternativas para redirigir estos recursos hacia sectores sostenibles.

La variable de Presupuestos Intensivos en Carbono (PIC) analiza el presupuesto asignado a actividades como la explotación de hidrocarburos, incluyendo la exploración y extracción, refinación petroquímica y transporte, entre otras actividades dentro del sector energético. Además, incluye información sobre el presupuesto destinado a empresas estatales encargadas de la explotación de gas y petróleo, en los países que cuentan con este tipo de empresas.

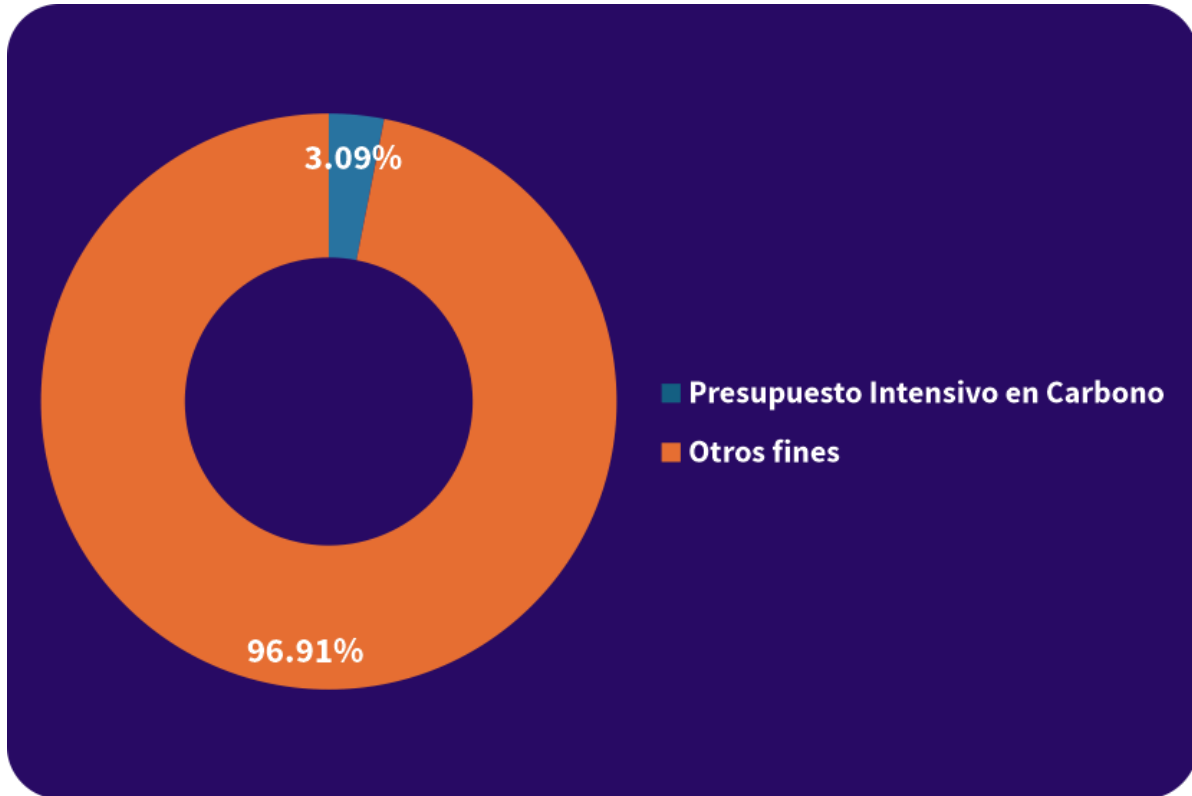
Para esta edición, se analizó los datos presupuestarios públicos y oficiales disponibles para cada país, correspondientes al año 2023. El cálculo de la variable PIC se realizó en base al porcentaje que estas asignaciones representan con respecto al presupuesto total de cada país. Es importante señalar que el estudio enfrenta limitaciones, particularmente en el caso de Cuba que quedó fuera del análisis debido a la falta de datos desagregados.

#### **2.2.5.1 Tendencias regionales**

El análisis de la variable PIC destaca que en 2023, los 20 países de estudio destinaron colectivamente 66.8 mil millones de dólares a actividades relacionadas con sectores altamente emisores de gases contaminantes, cifra que equivale al 3.09% de sus presupuestos totales. Este monto incluye recursos asignados específicamente a la exploración y explotación de hidrocarburos, refinación de combustibles fósiles y otras industrias directamente intensivas en carbono.

Estos datos son contradictorios con las estrategias presupuestarias de la región, mientras los compromisos internacionales exigen reducir las emisiones de carbono, los gobiernos continúan destinando recursos significativos a sectores que perpetúan la dependencia de combustibles fósiles. Este patrón no sólo obstaculiza el progreso hacia la descarbonización, sino que también amplifica las vulnerabilidades climáticas y económicas de los países. La gráfica que acompaña este análisis ilustra la proporción de recursos asignados a estos sectores emisores.

**Gráfica 46. Presupuesto Intensivo en Carbono asignado en conjunto a los 20 países con relación al presupuesto total en porcentaje en 2023**

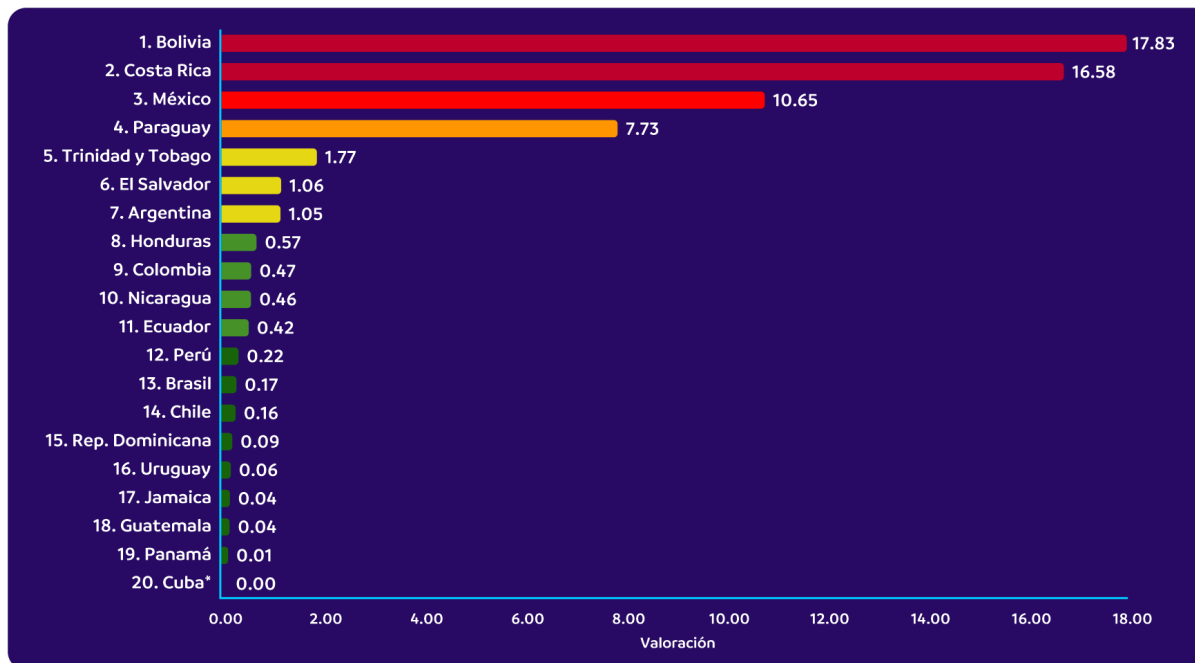


Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Abordar esta situación requiere un cambio en la asignación presupuestaria, orientando los recursos hacia actividades sostenibles y alineadas con los objetivos climáticos globales. La transformación del sistema financiero debe incluir la eliminación progresiva de subsidios y financiamientos destinados a sectores intensivos en carbono, así como la implementación de políticas que incentiven la inversión en alternativas limpias y resilientes. Solo a través de un replanteamiento integral de las prioridades financieras será posible cumplir con los compromisos climáticos asumidos por los países de la región.

## 2.2.5.2 Resultados de la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono

Gráfica 47. Ranking de Presupuestos Intensivos en Carbono 2023




(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Los resultados revelan que Bolivia y Costa Rica son los países con mayor proporción de su presupuesto nacional asignado a actividades relacionadas con la explotación y producción de hidrocarburos, ubicándose en el nivel **“MUY ALTO”** de presupuestos intensivos en carbono. Bolivia destinó 8.1 mil millones de dólares a este sector, lo que representa el 17.82% de su presupuesto total, una cifra que refleja su fuerte dependencia económica en la explotación de hidrocarburos. Este enfoque presupuestario muestra la contradicción entre la necesidad de diversificar su economía y su persistente inversión en sectores con altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.

Por su parte, Costa Rica destinó 3.7 mil millones de dólares, equivalentes al 16.57% de su presupuesto total, principalmente a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). Esta distribución presupuestaria resalta la necesidad de mantener la infraestructura vinculada al consumo de combustibles fósiles, lo cual contrasta con sus esfuerzos de descarbonización y desarrollo sostenible.

La elevada asignación de recursos a sectores intensivos en carbono en ambos países no solo limita su capacidad de financiar la transición hacia modelos energéticos más sostenibles, sino que también incrementa su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado energético global y a los impactos del cambio climático. En el caso de Bolivia, esta estrategia muestra la falta de un enfoque diversificado que priorice sectores con potencial de crecimiento sostenible. Para Costa Rica, la inversión en RECOPE plantea interrogantes sobre cómo el país podrá avanzar en sus compromisos climáticos sin un cambio estructural en sus prioridades presupuestarias.



En el nivel **“ALTO”** de presupuestos intensivos en carbono se encuentra México, que destinó el 10.65% de su presupuesto total a actividades relacionadas con la industria petrolera, mostrando una marcada dependencia de este sector. Una parte significativa de estos recursos se destinaron a Petróleos Mexicanos (PEMEX), enfocándose en proyectos de exploración, extracción y refinanciamiento de hidrocarburos. Esta priorización no solo pone en duda la capacidad de México para cumplir con sus compromisos climáticos internacionales, sino que también contrasta con el enorme potencial del país en energías renovables, como la solar y eólica. La asignación actual perpetúa un modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, retrasando la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático.

Por su parte, Paraguay se encuentra en el nivel **“MEDIO ALTO”**, con el 7.33% de su presupuesto dedicado a actividades intensivas en carbono. Aunque la proporción es menor que la de México, esta asignación se destina a los combustibles fósiles, limitando su capacidad de avanzar hacia estrategias de sostenibilidad y diversificación energética.

En el nivel **“MEDIO”** países como Trinidad y Tobago con 1.77%, El Salvador con 1.06% y Argentina con 1.05% muestran una menor proporción de asignaciones a actividades intensivas en carbono. Esta diferencia podría reflejar tanto una priorización de otros sectores estratégicos en sus presupuestos nacionales como limitaciones fiscales para financiar grandes proyectos en hidrocarburos. Sin embargo, este nivel de asignación también abre una ventana de oportunidad para que estos países redirijan recursos hacia iniciativas más sostenibles, como la transición energética y el fortalecimiento de sectores bajos en emisiones.

En el nivel **“BAJO”** de presupuestos intensivos en carbono se sitúan Honduras con 0.57%, Colombia con 0.47%, Nicaragua con 0.46% y Ecuador con 0.42%. Estas cifras sugieren una menor asignación directa a sectores como hidrocarburos y minería, lo que podría ser un indicador positivo en el contexto de la transición hacia economías menos dependientes del carbono. Esta tendencia, en principio, ofrece una oportunidad para que estos países prioricen inversiones en sectores sostenibles, como energías renovables y conservación ambiental. No obstante, esta baja proporción de asignación presupuestaria podría en muchos casos, estar influenciada por restricciones fiscales que limitan la capacidad de inversión en proyectos de infraestructura energética.

En el nivel **“MUY BAJO”** de presupuestos intensivos en carbono se encuentran Perú con 0.22%, Brasil con 0.17%, Chile con 0.16%, República Dominicana con 0.09%, Uruguay con 0.06%, Jamaica y Guatemala con 0.04% y Panamá con 0.01%. Estos porcentajes muestran asignaciones mínimas a actividades relacionadas con sectores como hidrocarburos y minería, lo que en principio podría interpretarse como una oportunidad para transitar hacia economías más sostenibles. Sin embargo, este nivel de inversión también plantea interrogantes sobre las fuentes reales de emisiones y las estrategias gubernamentales para abordar los desafíos ambientales. En el caso de Brasil y Chile, a pesar de sus bajos porcentajes de asignación directa, sus economías están significativamente vinculadas a sectores de alto impacto ambiental. Esta discrepancia sugiere que su dependencia de actividades intensivas en carbono podría estar más asociada a incentivos fiscales, subsidios indirectos y políticas sectoriales que no necesariamente se reflejan en los presupuestos nacionales de manera explícita. Por tal motivo, estas situaciones resaltan la necesidad de conocer no solo las asignaciones



presupuestarias directas, sino también los marcos regulatorios y los incentivos económicos que perpetúan las emisiones de carbono.

En términos absolutos, México se posiciona como el país que más recursos destinó a actividades intensivas en carbono, con una asignación de 49.7 mil millones de dólares, representando el 10.65% de su presupuesto total. Este elevado monto muestra la fuerte dependencia del país en sectores como la extracción y explotación de hidrocarburos, así como la producción de combustibles fósiles. Bolivia, con 8.1 mil millones de dólares, y Costa Rica, con 3.7 mil millones de dólares, siguen a México en términos de recursos destinados a sectores intensivos en carbono. En ambos casos, estas cifras plantean retos importantes para cumplir con los compromisos climáticos y avanzar hacia una transición energética justa y sostenible.

En el lado opuesto, los países con menores asignaciones en este ámbito fueron Guatemala con 5.6 millones de dólares, Jamaica con 2.8 millones de dólares y Panamá con 2.6 millones de dólares. Aunque estas cifras pueden interpretarse como una menor dependencia de sectores extractivos, también podrían ser indicativas de economías con menores capacidades fiscales para financiar este tipo de sectores. La siguiente tabla presenta un desglose detallado del presupuesto asignado por país a actividades intensivas en carbono.

**Tabla 10. Presupuesto destinado a la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono (hidrocarburos) en dólares en 2023**

País	Presupuesto total	Presupuesto de la variable PIC
Argentina	97,731,827,837	1,023,293,479
Bolivia	45,894,163,391	8,181,110,537
Brasil	1,042,465,359,816	1,818,874,113
Chile	84,315,116,317	132,201,541
Colombia	93,766,525,272	437,012,628
Costa Rica	22,547,223,412	3,737,972,993
Cuba	14,495,679,167	Sin datos
Ecuador	31,502,865,594	131,531,811
El Salvador	8,902,653,672	94,469,351
Guatemala	14,743,772,286	5,641,262
Honduras	15,954,460,731	91,319,960
Jamaica	6,627,352,394	2,859,386
México	467,322,511,261	49,753,320,389
Nicaragua	2,888,669,148	13,357,348
Panamá	25,579,449,552	2,639,608
Paraguay	14,455,937,864	1,117,260,888
Perú	57,430,554,559	123,888,666
República Dominicana	25,094,358,300	23,258,803
Trinidad y Tobago	9,594,830,653	169,770,370
Uruguay	18,053,657,908	10,884,742





Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Este análisis evidencia la urgencia de reorientar los presupuestos nacionales hacia actividades sostenibles, marcando un paso fundamental para enfrentar los retos del cambio climático y promover un desarrollo económico resiliente. La persistente asignación de recursos a sectores intensivos en carbono obstaculiza no sólo la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la transición hacia economías diversificadas y menos dependientes de combustibles fósiles.

La reorientación del presupuesto hacia alternativas limpias y sostenible no es únicamente una cuestión ambiental, sino una estrategia integral para garantizar la estabilidad y seguridad económica a largo plazo. Al adoptar políticas fiscales y presupuestarias que prioricen la inversión en energías renovables y conservación ambiental, los países de la región podrán ser menos dependientes del carbono y más resilientes a las crisis globales, y preparados para transitar hacia un modelo más justo y sustentable.

## **2.3 Resultados del análisis comparativo de las variables**

### **2.3.1 Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono**

El análisis comparativo entre los Ingresos Sostenibles y los Ingresos Intensivos en Carbono evidencian una dicotomía importante en la región de América Latina y el Caribe. A pesar de los esfuerzos internacionales y los fondos destinados a la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, muchos países continúan dependiendo considerablemente de sectores altamente contaminantes como la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. Estos sectores representan una fuente vital de ingresos fiscales, pero al mismo tiempo aumentan la vulnerabilidad ambiental y climática de la región, perpetuando modelos económicos insostenibles.

Este análisis expone grandes discrepancias entre los recursos dirigidos a actividades sostenibles y aquellos derivados de sectores intensivos en carbono. Mientras que los ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono son sustanciales y en algunos casos fundamentales para las economías de los países, los recursos asignados a iniciativas sostenibles suelen ser insuficientes para abordar la magnitud de los retos climáticos y ambientales. Esta situación dificulta la transición hacia modelos económicos bajos en carbono.

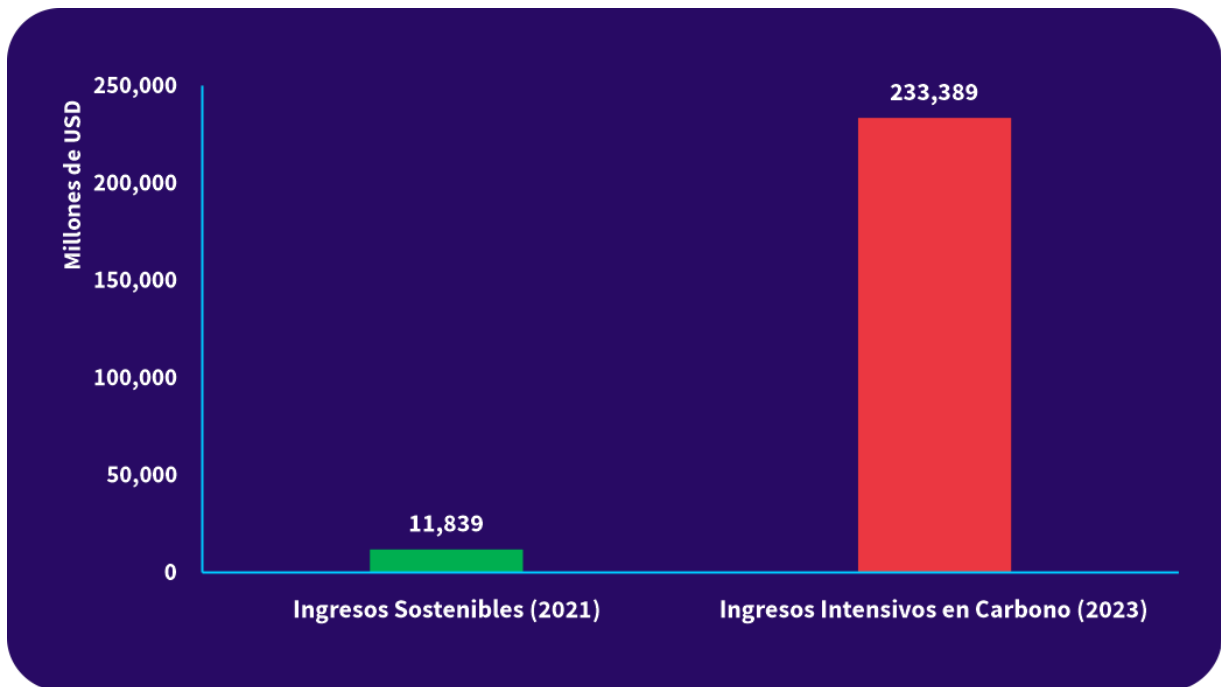
#### **2.3.1.1 Tendencias regionales**

Los datos comparativos entre los Ingresos Sostenibles (2021) y los Ingresos Intensivos en Carbono (2023) revelan una preocupante realidad. En conjunto los 20 países analizados, los ingresos provenientes de actividades emisoras de carbono alcanzaron 233.3 mil millones de dólares, una cifra que supera 19 veces a los 11.8 mil millones de dólares generados por iniciativas sostenibles (financiamiento para la biodiversidad y el cambio climático). Este desbalance muestra la profunda dependencia económica de la región en sectores extractivos y altamente contaminantes, como la explotación de combustibles fósiles y la minería.

Esta brecha resalta la necesidad urgente de un cambio estructural en los modelos económicos y financieros de América Latina y el Caribe. Los ingresos derivados de actividades intensivas en carbono no solo perpetúan prácticas insostenibles, sino que también dificultan la asignación de recursos hacia

iniciativas alineadas con los objetivos climáticos internacionales y el desarrollo sostenible. En este contexto, el desafío de la región radica en diversificar sus fuentes de ingresos y fortalecer los mecanismos de financiamiento para actividades sostenibles. Esto requiere un sistema que integre la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles, la implementación de políticas fiscales que graven actividades contaminantes y dirijan esos recursos hacia la conservación de la biodiversidad, la transición energética y la resiliencia climática. La gráfica siguiente ofrece una representación clara de esta brecha entre los ingresos sostenibles y los intensivos en carbono.

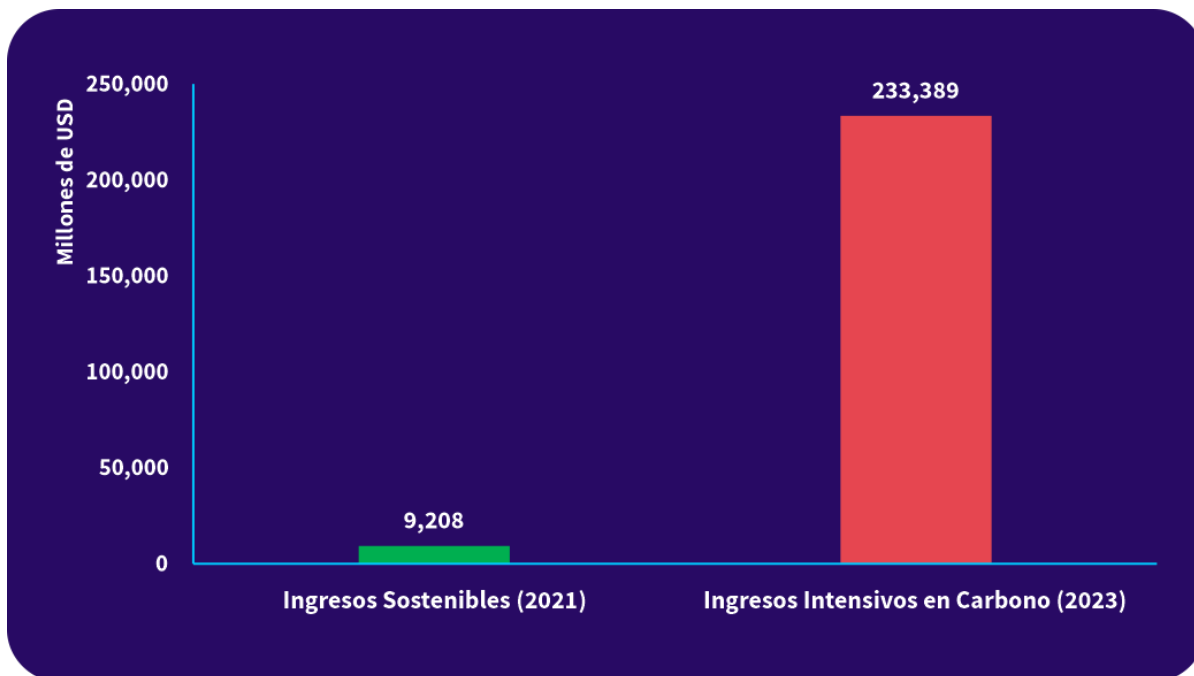
**Gráfica 48. Análisis regional: Ingresos Sostenibles (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)**



Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilada en el Aid Atlas (2021) y en diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

El análisis específico del financiamiento para el cambio climático muestra una brecha más alarmante, los ingresos derivados de actividades intensivas en carbono superan en 25 veces a los recursos destinados a combatir el cambio climático, que suman apenas 9.2 mil millones de dólares. Estas cifras resaltan la necesidad de un cambio estructural en las políticas económicas y de financiamiento. A pesar de los compromisos internacionales asumidos por los países de América Latina y el Caribe, los flujos financieros siguen priorizando actividades que perpetúan prácticas insostenibles, mientras que los fondos asignados a la mitigación y adaptación climática permanecen insuficientes.

**Gráfica 49. Análisis regional: Ingresos Sostenibles, considerando únicamente el financiamiento climático (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)**



Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilada en el Aid Atlas (2021) y en diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

### 2.3.1.2 Tendencias por país

En términos de financiamiento climático, Colombia recibió 2.4 mil millones de dólares, seguido de México con 2.3 mil millones de dólares y Argentina con 2.0 mil millones de dólares. Estos montos muestran el interés intencionalidad en apoyar proyectos sostenibles en países con mayor capacidad para implementar programas de mitigación y adaptación. Sin embargo, las cifras también revelan la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a financiamiento climático en países como Paraguay, Cuba y Jamaica, que recibieron sólo 116, 27 y 18 millones de dólares respectivamente. Estas naciones enfrentan desafíos importantes como limitaciones institucionales y problemas para acceder a fondos internacionales.

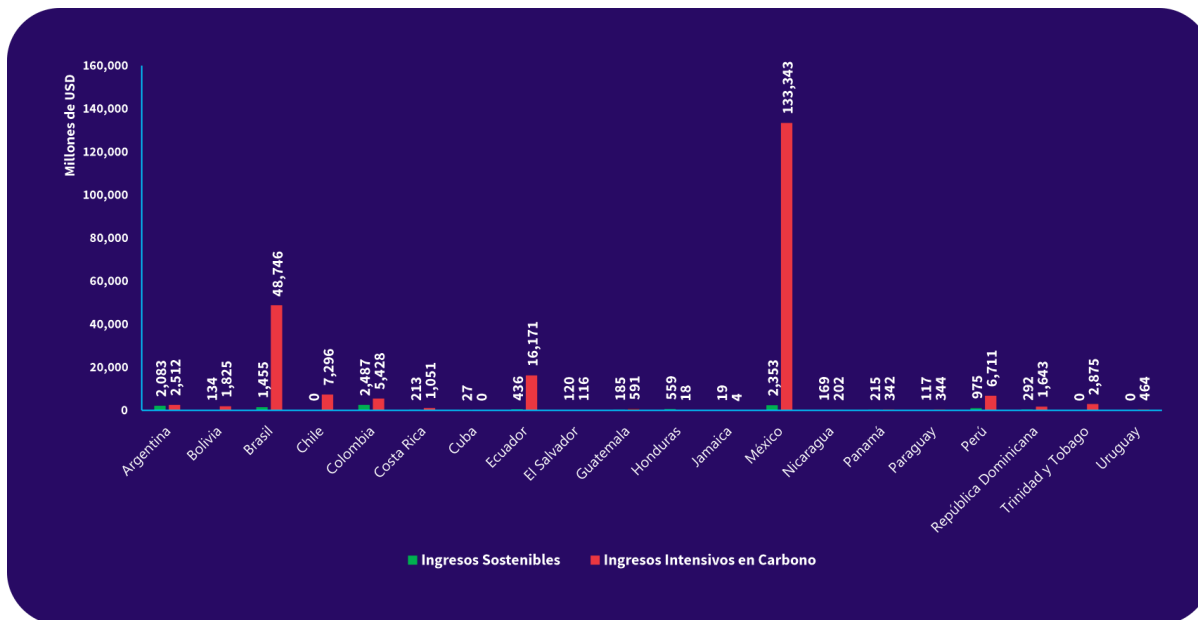
Por otro lado, los ingresos derivados de actividades intensivas en carbono exponen la continua dependencia de la región en sectores contaminantes. México encabeza la lista con 133.3 mil millones de dólares generados por actividades como la extracción de hidrocarburos y la minería, cifra que supera en 56 veces el financiamiento climático recibido. Brasil con 48.7 mil millones de dólares y Ecuador con 16.1 mil millones de dólares son los países con mayores ingresos en este rubro, lo que evidencia un modelo económico que prioriza los sectores emisores de carbono por encima de la transición hacia economías limpias.

En contraste, países como El Salvador con 116 millones de dólares, Honduras con 18 millones de dólares y Jamaica con 3 millones de dólares generaron los menores ingresos en actividades intensivas en carbono. Aunque estas cifras podrían interpretarse como un menor grado de dependencia de

sectores contaminantes, también se puede deber a limitaciones en su infraestructura y capacidades económicas para explotar estos recursos.

Por otro lado, es importante destacar la ausencia de datos específicos en países como Chile, Trinidad y Tobago, y Uruguay en cuanto a financiamiento climático, así como la falta de registros de Cuba sobre ingresos derivados de actividades intensivas en carbono. Estas lagunas de información dificultan una evaluación integral y resalta la importancia de mejorar la transparencia y el acceso de datos. La gráfica siguiente ilustra el comparativo entre los ingresos sostenibles y los intensivos en carbono por país.

**Gráfica 50. Análisis por país: Ingresos Sostenibles (2021) versus Ingresos Intensivos en Carbono (2023)**



Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilada en el Aid Atlas (2021) y en diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

En general, las cifras muestran una clara dicotomía, mientras algunos países avanzan en la captación de financiamiento climático, otros continúan dependiendo de modelos económicos basados en sectores emisores. Para cerrar esta brecha, es fundamental rediseñar políticas nacionales, fomentar el acceso equitativo a financiamiento climático internacional y redirigir los recursos hacia actividades sostenibles que permitan cumplir con los objetivos globales de descarbonización y desarrollo sostenible.

### 2.3.2 Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono

El análisis comparativo entre los Presupuestos Sostenibles y los Presupuestos Intensivos en Carbono permite identificar los contrastes en las prioridades de asignación de recursos en América Latina y el Caribe. Aunque los países de la región han incrementado progresivamente sus inversiones en actividades sostenibles, como la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático,

estos esfuerzos permaneces obstaculizados por la gran cantidad de recursos que se destinan a las actividades intensivas en carbono, como la extracción de combustibles fósiles y la minería.

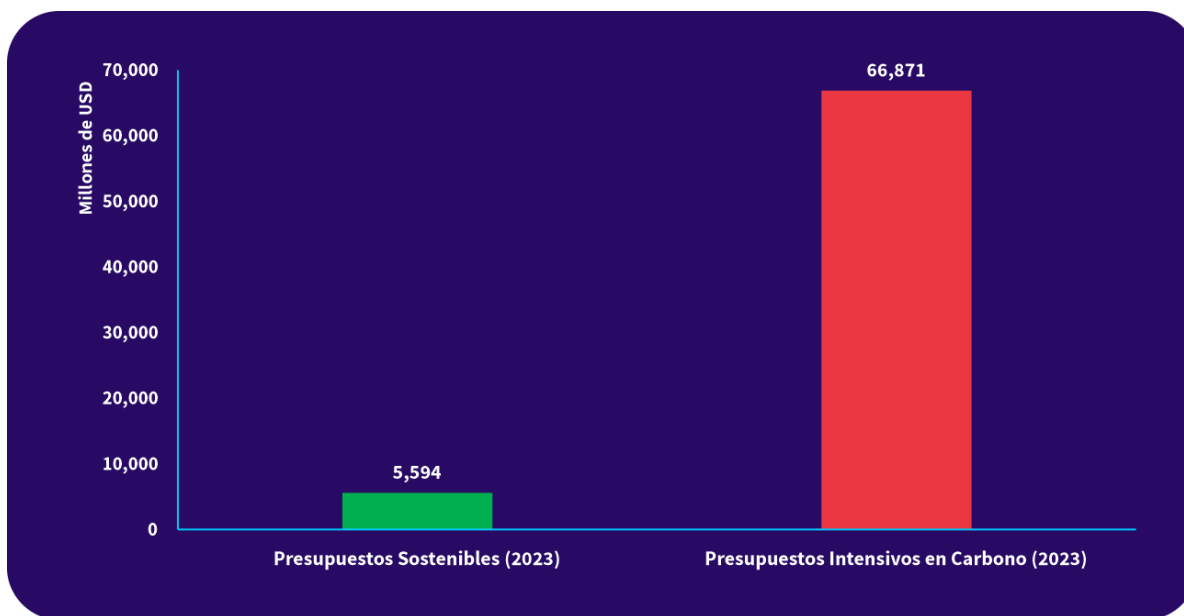
Este contraste resulta en una paradoja preocupante, mientras se destinan fondos a iniciativas para enfrentar la crisis climática, simultáneamente se financian actividades que incrementan sus efectos. Para abordar este desafío, los países de la región deben adoptar un enfoque presupuestario más equilibrado y alineado con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.

### 2.3.2.1 Tendencias regionales

El análisis comparativo entre los presupuestos sostenibles y los presupuestos intensivos en carbono en 2023 revelan una preocupante realidad sobre las asignaciones de recursos públicos en los 20 países de estudio. Mientras que las actividades intensivas en carbono recibieron 66.8 mil millones de dólares, los presupuestos destinados a iniciativas sostenibles alcanzaron apenas 5.5 mil millones de dólares. Este desequilibrio implica que, en promedio, los países asignaron 12 veces más recursos a sectores que contribuyen significativamente a las emisiones de carbono que a aquellos orientados a mitigar el cambio climático y promover la sostenibilidad.

Por otro lado, es importante destacar que la falta de claridad en la etiquetación presupuestaria y la insuficiente transparencia en los reportes gubernamentales pueden estar subestimando los recursos efectivamente destinados a actividades sostenibles. Este problema evidencia la urgente necesidad de mejorar los sistemas de etiquetado y monitoreo presupuestario, para garantizar una visión más precisa y fomentar la rendición de cuentas. La gráfica a continuación ilustra claramente la disparidad en la asignación presupuestaria entre iniciativas sostenibles y actividades intensivas en carbono.

**Gráfica 51. Análisis regional: Presupuestos Sostenibles (2023) versus Presupuestos Intensivos en Carbono (2023)**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

### 2.3.2.2 Tendencias por país

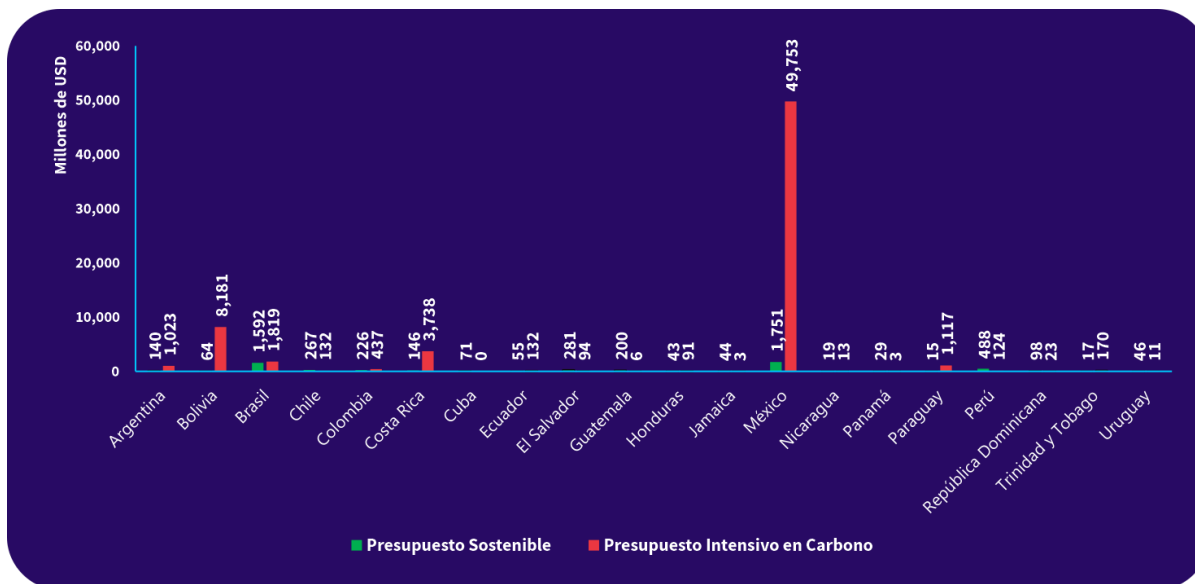
En el ámbito de los presupuestos sostenibles, México destinó 1.7 mil millones de dólares, seguido de Brasil con 1.5 mil millones y Perú con 488 millones de dólares. Estas cifras pueden atribuirse a las mayores capacidades fiscales de estas naciones, que les permiten destinar recursos más amplios a iniciativas relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático. Sin embargo, la proporción destinada con respecto a su presupuesto total sigue siendo muy limitada en relación con los desafíos ambientales y climáticos que enfrentan.

Por otro lado, países como Nicaragua con 19 millones de dólares, Trinidad y Tobago con 16 millones y Paraguay con 14 millones de dólares, asignaron menos recursos hacia iniciativas sostenibles. Este patrón muestra la necesidad de fortalecer capacidades institucionales y mecanismos de financiamiento climático para equilibrar las asignaciones.

En cuanto a las actividades intensivas en carbono, México nuevamente se posiciona como el mayor asignador de recursos, con 49.7 mil millones de dólares, cifra que es 28 veces superior a su presupuesto destinado a actividades sostenibles. Este desbalance resalta la fuerte dependencia del país en industrias como la petrolera. Le siguen Bolivia con 8.1 mil millones de dólares y Costa Rica con 3.7 mil millones de dólares, reflejando una similar dependencia a las industrias de combustibles fósiles.

En el otro extremo, países como Guatemala con 5 millones de dólares, Jamaica y Panamá con 2 millones de dólares, son los que destinaron presupuestos más bajos a actividades intensivas en carbono, lo que representa una menor dependencia directa de estos sectores extractivos. Cabe destacar que no se disponen de datos específicos sobre las asignaciones a actividades intensivas en carbono en Cuba, lo que limita una evaluación completa de su desempeño en esta variable. La gráfica siguiente resume el contraste en las asignaciones presupuestarias para actividades sostenibles e intensivas en carbono.

**Gráfica 52. Análisis por país: Presupuestos Sostenibles (2023) versus Presupuestos Intensivos en Carbono (2023)**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

### 2.3.3 Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado

Nicholas Stern, propuso en su informe “*The Economics of Climate Change: The Stern Review*” la necesidad de que los gobiernos destinen al menos el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) anual para enfrentar los desafíos globales del cambio climático.<sup>11</sup> Esta propuesta parte del entendimiento de que la crisis climática no solo representa una amenaza ambiental, sino también un riesgo económico, cuyas consecuencias podrían superar los costos de la inversión anticipada.

En el caso de la región de América Latina y el Caribe, esta recomendación adquiere una especial relevancia, dado que la región presenta una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático con una economía que aún depende en gran medida de actividades extractivas e intensivas en carbono. Es por ello, que en este apartado se analiza qué tan lejos o cerca se encuentran los países de la región de alcanzar la propuesta de Stern. Este ejercicio sugiere estimar el presupuesto público necesario que los países de estudio debieron de asignar en 2023 para cumplir con la meta de destinar al menos el 2% de su PIB, con la finalidad de compararlo con el presupuesto destinado para atender el cambio climático, presupuesto estimado en la variable de Presupuesto Sostenible.

En este sentido, es importante aclarar que la estimación de la variable de Presupuesto Sostenible, del IFS, contempla únicamente los recursos públicos etiquetados para la biodiversidad, el cambio climático y forestal dentro del sector ambiental; el presupuesto etiquetado para eficiencia energética y energías renovables dentro del sector energético; y el presupuesto etiquetado para la atención de desastres naturales dentro del sector encargado de coordinar dicha política en el país.

<sup>11</sup> El informe de Nicholas Stern está disponible para su consulta en el siguiente enlace: [The Economics of Climate Change](#)



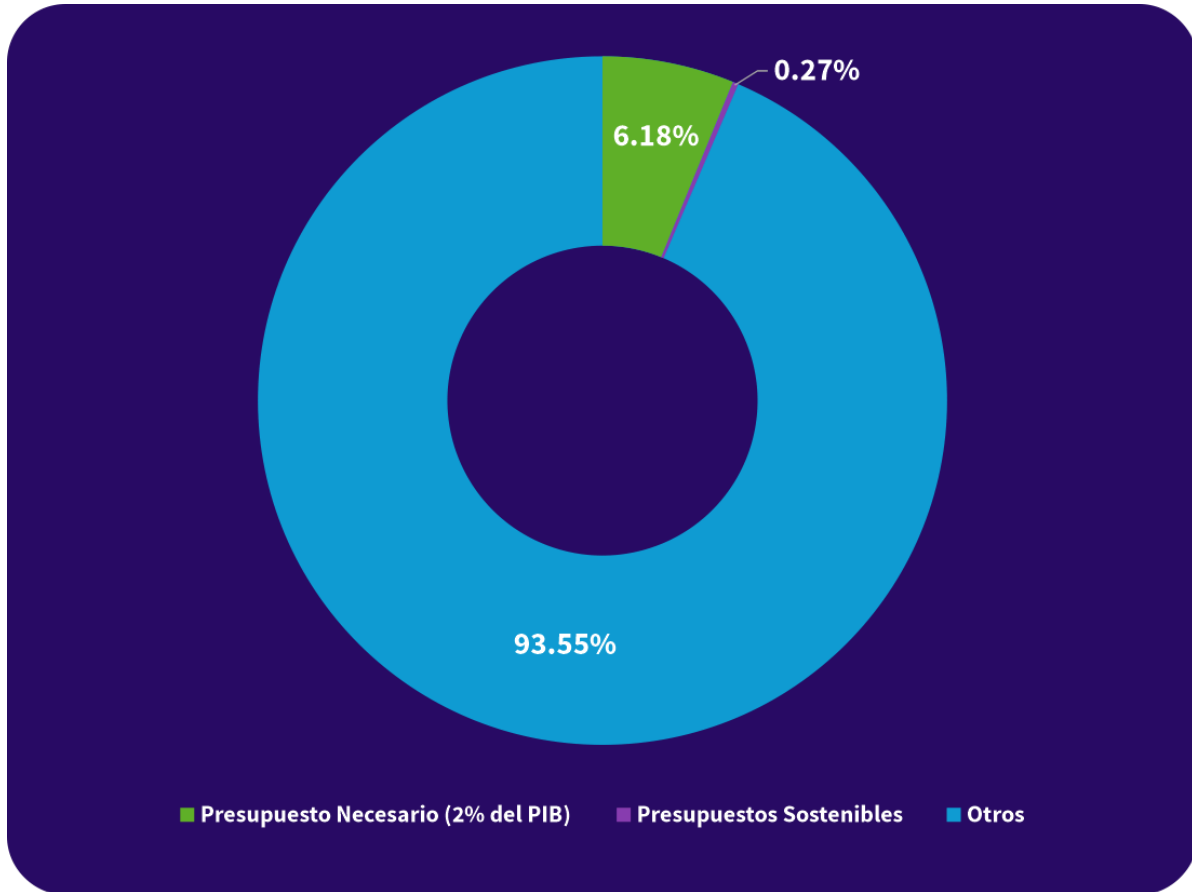


### **2.3.3.1 Tendencias regionales**

El análisis muestra que en 2023 los 20 países de estudio destinaron, en conjunto, solo 5.5 mil millones de dólares a iniciativas sostenibles, representado apenas el 0.27% de sus presupuestos totales. Esta cifra está muy lejos de la recomendación de Nicholas Stern, quien sugiere que al menos el 2% del PIB debe dirigirse a combatir el cambio climático, cifra que en términos presupuestarios equivale a un mínimo de 129.7 mil millones de dólares, lo que representa el 6.18% de los presupuestos totales de la región.

Esta brecha financiera pone de manifiesto la insuficiencia de los recursos actuales para abordar las crecientes demandas de acción climática en una región que ya enfrenta graves impactos del cambio climático, así como la falta de alineación de las políticas fiscales con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Mientras que los países de la región han adoptado acuerdos globales, como el Acuerdo de París, la inversión concreta en acciones climáticas sigue siendo insuficiente para cumplir con estos objetivos. La siguiente gráfica ilustra la magnitud de esta brecha, destacando la urgente necesidad de aumentar significativamente las asignaciones presupuestarias hacia iniciativas sostenibles y climáticas.

**Gráfica 53. Presupuesto Sostenible versus presupuesto necesario estimado con respecto del 2% del PIB como porcentaje del presupuesto total en conjunto de los 20 países de estudio en 2023**



Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial y de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

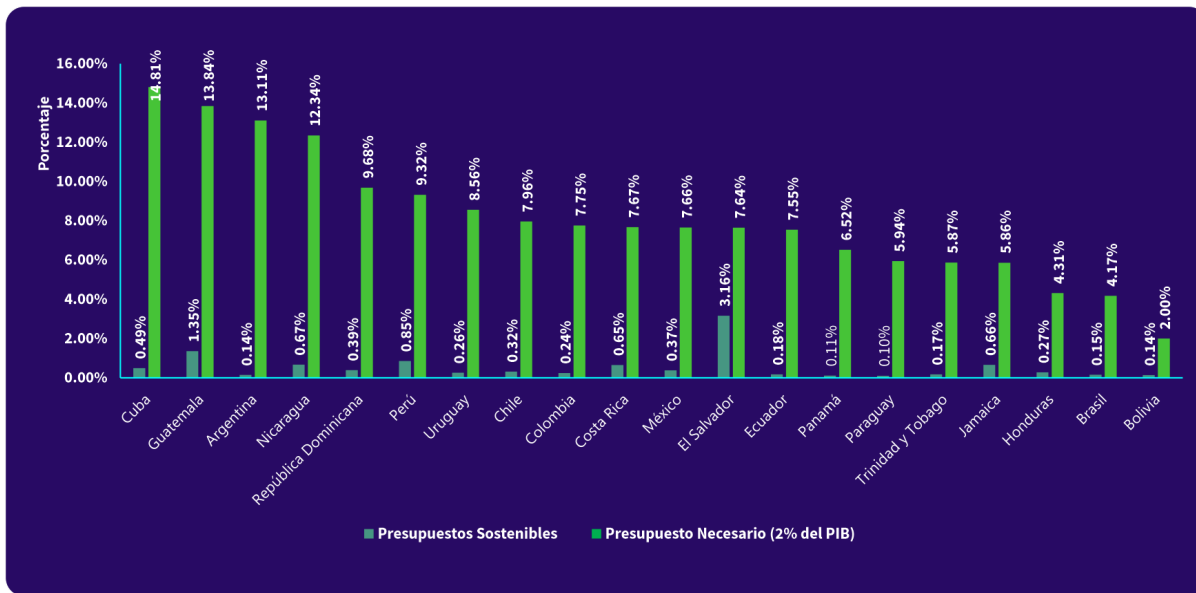
### 2.3.3.2 Tendencias por país

El análisis desglosado por país revela importantes discrepancias entre los presupuestos sostenibles actuales y los niveles mínimos necesarios para enfrentar de manera efectiva la crisis climática. Entre los países con menor disparidad relativa se encuentra Bolivia, que asignó un 0.14% de su presupuesto a iniciativas sostenibles, en contraste con el 2.0% recomendado. Le sigue Brasil, con una asignación del 0.15% frente al 4.17% requerido, y Honduras, que destinó un 0.27% frente al 4.31% necesario. Aunque estas asignaciones son menores en proporción comparativa, siguen siendo insuficientes para abordar los crecientes impactos del cambio climático.

Por otro lado, las mayores disparidades se observan en países como Cuba, Guatemala y Argentina. En el caso de Cuba, se asignó sólo el 0.49% de su presupuesto a iniciativas sostenibles, muy por debajo del 14.81% necesario para enfrentar los desafíos climáticos. Guatemala destinó el 1.35%, contrastando con el 13.84% requerido, mientras que Argentina asignó un escaso 0.14% en comparación con el 13.11% necesario. Estas cifras presentan la enorme brecha entre la asignación actual y el

financiamiento mínimo necesario para implementar acciones climáticas efectivas. La siguiente gráfica detalla estas discrepancias, proporcionando una visión clara de la asignación que cada país debe destinar para cumplir con la meta propuesta por Nicholas Stern.

**Gráfica 54. Presupuestos Sostenibles versus presupuesto necesario estimado con respecto del 2% del PIB como porcentaje del presupuesto total para los 20 países de estudio en 2023**



Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial y de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2023.

Estos resultados son alarmantes, ya que revelan que los países de la región están muy lejos de alcanzar la meta propuesta por Stern de destinar al menos el 2% de su PIB a la lucha contra el cambio climático. Esta brecha crítica entre los recursos asignados y los requeridos son una muestra clara de la falta de alineación entre las prioridades nacionales y la urgencia global de enfrentar la crisis climática. La ausencia de mecanismos claros para la etiquetación y el monitoreo presupuestario complica aún más la capacidad de rastrear y evaluar la eficacia de los recursos destinados a iniciativas sostenibles. Además, es importante que los países de la región reestructuren las políticas fiscales para priorizar sectores sostenibles y fortalecer la capacidad institucional para acceder y gestionar financiamiento climático internacional.



### 3. Evolución del Índice de Finanzas Sostenibles: Un análisis comparativo a través del tiempo

El análisis comparativo del Índice de Finanzas Sostenibles a lo largo de sus cinco ediciones ofrece una visión integral de las brechas, desafíos y oportunidades que enfrentan los países de América Latina y el Caribe en su transición hacia un modelo de financiamiento sostenible y alineado con los compromisos internacionales en materia de acción climática.<sup>12</sup>

Desde su creación, el IFS se ha consolidado como una herramienta clave para monitorear y evaluar el desempeño de los países en la movilización y asignación de recursos hacia actividades sostenibles. Con cada nueva edición, se han incorporado mejoras metodológicas significativas, ajustes en los indicadores y un acceso más amplio a datos desagregados, lo que ha permitido un análisis más preciso y detallado. Este enfoque ha facilitado la identificación de tendencias emergentes y áreas críticas que requieren una intervención urgente.

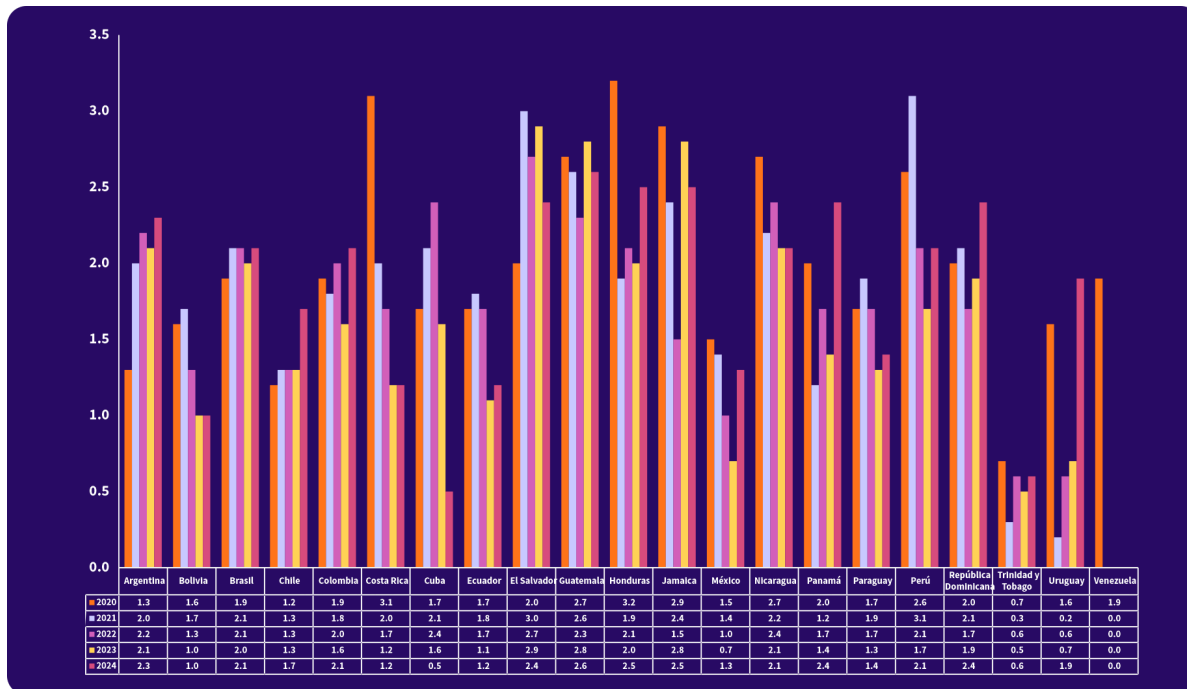
A través de este proceso, el IFS ha desempeñado un papel fundamental en la promoción del diálogo regional sobre la necesidad de reorientar las políticas financieras hacia un sistema financiero más sostenible. Además, ha resaltado la importancia de establecer marcos regulatorios que impulsen una economía baja en carbono y más resiliente al cambio climático.

Sin embargo, a pesar de estos avances, el análisis comparativo también muestra que la falta de un compromiso sistemático y de largo plazo en la asignación de recursos a actividades sostenibles sigue siendo una barrera significativa para cumplir con los compromisos climáticos internacionales.

---

<sup>12</sup> En la edición 2020 del Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) se analizaron 21 países. Sin embargo, en las cuatro ediciones siguientes (2021, 2022, 2023 y 2024), el análisis se redujo a 20 países debido a la exclusión de Venezuela por la falta de información pública y actualizada.

**Gráfica 55. Análisis comparativo: Índice de Finanzas Sostenibles**




Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Los resultados del análisis comparativo del Índice de Finanzas Sostenibles en sus cinco ediciones muestran que ningún país de la región ha alcanzado el nivel de finanzas sostenibles clasificado como **“MUY ALTO”**. Este hallazgo resalta la persistente insuficiencia de los flujos financieros provenientes de actividades sostenibles frente a aquellos derivados de actividades intensivas en carbono. Este desequilibrio sigue siendo un obstáculo para lograr una transición efectiva hacia economías bajas en carbono y enfrentar los retos del cambio climático.

En el nivel **“ALTO”**, los resultados han sido dispersos a lo largo de las ediciones del IFS, para la edición del IFS 2020 se ubicaron Honduras con una puntuación de 3.2 puntos y Costa Rica con una puntuación de 3.1 puntos. Para el caso del IFS 2021, se posicionaron Perú con una puntuación de 3.1 puntos y El Salvador con una puntuación de 3.0 puntos. Para el IFS 2022 no se situó ningún país. Para el IFS 2023, se ubicó El Salvador con una puntuación de 2.9 puntos, y finalmente para el IFS 2024 no se ubicó ningún país. Esta evolución evidencia que, aunque algunos países han mostrado avances puntuales en determinadas ediciones, no se han mantenido consistentemente en el nivel **“ALTO”** y mucho menos han alcanzado obtener una mayor valoración y un nivel **“MUY ALTO”** de finanzas sostenibles.

En el nivel **“MEDIO ALTO”** de finanzas sostenibles, para el IFS 2020 se posicionaron Jamaica con una puntuación de 2.9 puntos, Guatemala y Nicaragua con una puntuación de 2.7 puntos y Perú con una puntuación de 2.6 puntos. Para el IFS 2021 se posicionaron Guatemala con una puntuación de 2.6 puntos, Jamaica con una puntuación de 2.4 puntos, Nicaragua con una puntuación de 2.2 puntos, Brasil, Cuba y República Dominicana con una puntuación de 2.1 puntos. Para el IFS 2022 se ubicaron El



Salvador con una puntuación de 2.7 puntos, Cuba y Nicaragua con una puntuación de 2.4 puntos y Guatemala con una puntuación de 2.3 puntos. Para el IFS 2023 se situaron Guatemala y Jamaica con una puntuación de 2.8 puntos. Para el IFS 2024, se ubicó Guatemala con una puntuación de 2.6 puntos, Honduras y Jamaica con una puntuación de 2.5 puntos, El Salvador, Panamá y República Dominicana con 2.4 puntos y Argentina con una puntuación de 2.3 puntos.


En el nivel **“MEDIO”** de finanzas sostenibles, para el IFS 2020 se ubicaron El Salvador, Panamá y República Dominicana con una puntuación de 2.0 puntos. Para el IFS 2021 se posicionaron Argentina y Costa Rica con una puntuación de 2.0 puntos. Para el IFS 2022 se situaron Argentina con una puntuación de 2.2 puntos, Honduras y Perú con una puntuación de 2.1 puntos, Brasil con una puntuación de 2.0 puntos y Colombia con una puntuación de 1.9 puntos. Para el IFS 2023 se posicionaron Argentina y Nicaragua con una puntuación de 2.1 puntos, Brasil y Honduras con una puntuación de 2.0 puntos y República Dominicana con una puntuación de 1.9 puntos. Para el IFS 2024 se ubicaron Brasil, Colombia, Nicaragua y Panamá con 2.1 puntos y Uruguay con 1.9 puntos.

En el nivel **“MEDIO BAJO”** de finanzas sostenibles, para el IFS 2020 se situaron Brasil, Colombia y Venezuela con una puntuación de 1.9 puntos, Cuba, Ecuador y Paraguay con una puntuación de 1.7 puntos, Bolivia y Uruguay con una puntuación de 1.6 puntos. Para el IFS 2021 se ubicaron Honduras y Paraguay con una puntuación de 1.9 puntos, Colombia y Ecuador con una puntuación de 1.8 puntos y Bolivia con una puntuación de 1.7 puntos. Para el IFS 2022 se situaron Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana con una puntuación de 1.7 puntos, Jamaica con una puntuación de 1.5 puntos, Bolivia y Chile con una puntuación de 1.3 puntos. Para el IFS 2023 se posicionaron Perú con una puntuación de 1.7 puntos, Colombia y Cuba con una puntuación de 1.6 puntos, Panamá con una puntuación de 1.4 puntos, Chile y Paraguay con una puntuación de 1.3 puntos y Costa Rica con una puntuación de 1.2 puntos. Para el IFS 2024, se ubicaron Chile con 1.7 puntos, Paraguay con 1.4 puntos, México con 1.3 puntos y Costa Rica y Ecuador con 1.2 puntos.

En el nivel **“BAJO”** de finanzas sostenibles, para el IFS 2020 se ubicaron México con una puntuación de 1.5 puntos, Argentina con una puntuación de 1.3 puntos y Chile con una puntuación de 1.2 puntos. Para el IFS 2021 se situaron México con una puntuación de 1.4 puntos, Chile con una puntuación de 1.3 puntos y Panamá con una puntuación de 1.2 puntos. Para el IFS 2022 se posicionaron México con una puntuación de 1.0 puntos, Trinidad y Tobago y Uruguay con una puntuación de 0.6 puntos. Para el IFS 2023 se situaron Ecuador con una puntuación de 1.1 puntos, Bolivia con una puntuación de 1.0 puntos, México y Uruguay con una puntuación de 0.7 puntos. Para el IFS 2024 se posicionaron Bolivia con una puntuación de 1.0 puntos y Trinidad y Tobago con una puntuación de 0.6 puntos.

Finalmente, en el nivel **“MUY BAJO”** de finanzas sostenibles, para el IFS 2020 se posicionó Trinidad y Tobago con una puntuación de 0.7 puntos. Para el IFS 2021 se ubicaron Trinidad y Tobago con una puntuación de 0.3 puntos y Uruguay con una puntuación de 0.2 puntos. Para el IFS 2022 ningún país se encontró en este nivel. Para el IFS 2023 se situó Trinidad y Tobago con una puntuación de 0.5 puntos. Para el IFS 2024 se ubicó Cuba con una puntuación de 0.5 puntos, en este caso se debe a la falta de información en algunas variables del IFS.

En síntesis, el análisis de las cinco ediciones del IFS confirma que ningún país de la región ha alcanzado el nivel **“MUY ALTO”** en finanzas sostenibles. Sin embargo, la edición del IFS 2024 destaca un progreso relativo en varios países: 13 naciones mejoraron su posición en el ranking en comparación



con 2023, reflejando avances en sus políticas y acciones hacia la sostenibilidad. Estos países incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

A pesar de estos avances, no todos los países lograron mejoras. Cuba, El Salvador, Guatemala y Jamaica experimentaron una disminución en su puntuación respecto al año anterior, mientras que Bolivia, Costa Rica y Nicaragua mantuvieron sus valoraciones sin cambios. Este contraste refleja las desigualdades estructurales y los retos inherentes que enfrenta la región en su transición hacia un modelo financiero sostenible. Factores como la fragilidad institucional, la falta de incentivos claros para la inversión sostenible y la dependencia de sectores de alto carbono continúan limitando el progreso.

El análisis comparativo del IFS resalta la necesidad urgente de superar barreras estructurales que obstaculizan el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Entre los principales desafíos se encuentra la transición hacia economías bajas en carbono, una meta que contrasta con la persistente dependencia de la región en industrias extractivas como la minería, el petróleo y el gas. Esta dependencia no solo desacelera los avances hacia la sostenibilidad, sino que también aumenta la vulnerabilidad económica de los países frente a los efectos de la descarbonización global, poniendo en riesgo su competitividad a largo plazo.

Asimismo, los marcos regulatorios actuales resultan insuficientes para atraer inversiones sostenibles de manera efectiva. La falta de políticas claras, coherentes y robustas limita la confianza de los inversores, reduciendo el flujo de capital hacia sectores sostenibles. A esto se suman las desigualdades en el acceso al financiamiento sostenible: mientras algunos países avanzan lentamente, otros enfrentan grandes dificultades para acceder a los recursos necesarios, perpetuando brechas estructurales que impiden abordar de manera positiva los desafíos del cambio climático.

Los resultados del IFS no solo ofrecen un diagnóstico claro del estado actual de las finanzas sostenibles de la región, sino que también muestran la urgencia de una reforma del sistema financiero. Esta reforma debe priorizar la diversificación de las fuentes de financiamiento mediante instrumentos innovadores como los bonos verdes y sostenibles, y el financiamiento mixto que combine recursos públicos y privados. Es fundamental promover la cooperación internacional para garantizar que los países con menores recursos accedan a financiamiento en condiciones más justas priorizando las subvenciones sobre los préstamos para evitar el sobreendeudamiento.

La evolución del IFS entre 2020 y 2024 evidencia ciertos avances, pero también muestra limitaciones persistentes que comprometen la capacidad de la región para cumplir con sus compromisos climáticos globales. Un enfoque más ambicioso, coordinado y estratégico es imprescindible. Esto requiere no solo la implementación de políticas nacionales más alineadas con los objetivos de sostenibilidad, sino también un esfuerzo regional colectivo para redefinir la gestión y priorización de los recursos financieros en un contexto global en transición hacia una economía sostenible y resiliente.

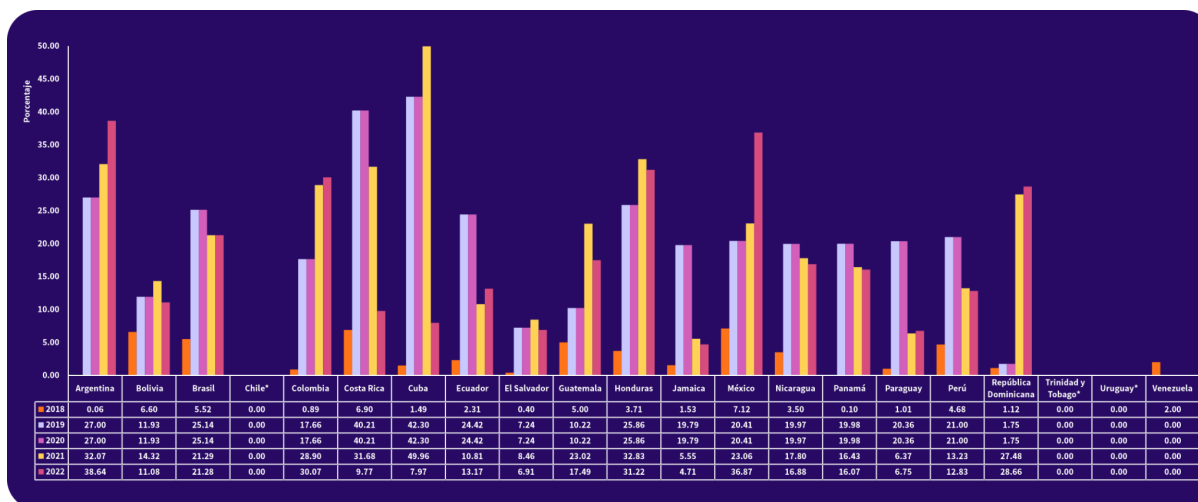


### 3.1 Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles

El análisis de la variable de IS en las cinco ediciones del IFS destaca un incremento gradual en los recursos destinados a la protección de la biodiversidad y mitigación del cambio climático en América Latina y el Caribe. Este crecimiento refleja un reconocimiento creciente de la importancia de redirigir fondos hacia actividades sostenibles que ayuden a reducir los impactos climáticos y garantizar la preservación de los ecosistemas esenciales para la región.

No obstante, este progreso resulta aún insuficiente frente a la magnitud y urgencia de los desafíos climáticos actuales. Las necesidades financieras para enfrentar el cambio climático y promover una transición efectiva hacia economías bajas en carbono superan ampliamente los flujos actuales de financiamiento sostenible. Este déficit revela la urgencia de adoptar estrategias más ambiciosas para movilizar capital internacional que permita cerrar estas brechas. La siguiente gráfica muestra una comparación de los Ingresos Sostenibles a lo largo de las cinco ediciones del índice.

**Gráfica 56. Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles (% del total de su financiamiento)**




(\*) Sin datos

Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilada en el Aid Atlas (2021) y de la base de datos Finance Sustainable Development de la OECD para 2018, 2020, y 2021.

En esta última edición del IFS 2024, hay cambios significativos en la proporción del financiamiento destinado a la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático con relación al total de los recursos recibidos para el desarrollo.<sup>13</sup> Destacan Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y República Dominicana, que lograron incrementar esta proporción, consolidándose como referentes de la región.

Entre los casos más destacados está México, que experimentó el mayor incremento porcentual en esta categoría, pasando de un 23.06% en la edición anterior a un 36.87% en 2024, un aumento de 13.81%

<sup>13</sup> Es importante destacar que, para la edición 2024 del Índice de Finanzas Sostenibles, se incluyó por primera vez el financiamiento destinado a la biodiversidad dentro de la variable de Ingresos Sostenibles, un sector que no había sido considerado en las cuatro ediciones anteriores.



puntos porcentuales. Le siguen Argentina, con un aumento del 6.57% y Ecuador, con un incremento de 2.36%. Estos avances se deben a la priorización de acciones sostenibles y en línea con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y conservación de la biodiversidad.

En contraste, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Perú reportaron una disminución en la proporción del financiamiento destinado a biodiversidad y cambio climático respecto al total de recursos para el desarrollo en comparación con el año anterior. Cabe señalar que esta disminución no necesariamente implica una reducción absoluta del financiamiento sostenible, sino que los recursos pudieron haberse redirigido hacia otros sectores prioritarios, como infraestructura, salud o educación.

Es relevante mencionar que Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay no figuran como receptores de este tipo de financiamiento. Además, la recopilación y análisis de la información para esta variable ha sido de la siguiente manera, para la edición del IFS 2020, se emplearon datos correspondientes a 2018. En el IFS 2021 y el IFS 2022, los datos utilizados corresponden al año 2020, debido a la falta de información actualizada al momento de análisis. Para el IFS 2023 y el IFS 2024, se usaron datos de 2021, con la particularidad de que esta última edición incorporó información específica sobre financiamiento para biodiversidad, que no había sido considerada en análisis previos.

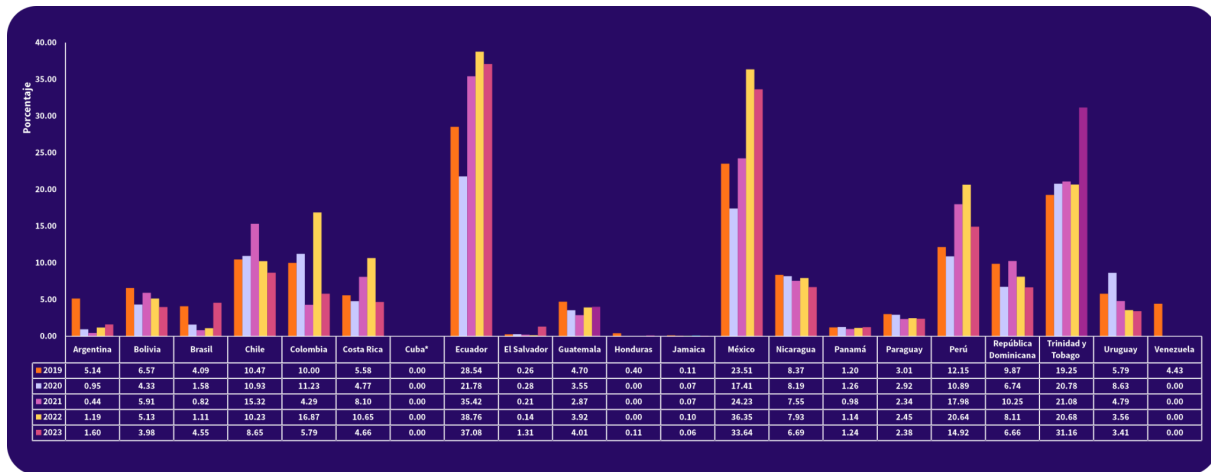
El análisis comparativo de esta variable muestra una tendencia alentadora hacia una mayor financiamiento destinado a la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, el ritmo de incremento es insuficiente para responder a las crecientes demandas ambientales y climáticas que enfrenta la región. Este desajuste entre las necesidades urgentes y los recursos disponibles resalta la urgencia de adoptar enfoques más estratégicos e innovadores para movilizar el financiamiento sostenible. Para lograr un cambio importante se requiere de esfuerzos concertados en la diversificación e identificación de nuevas fuentes de ingresos sostenibles, así como en garantizar que su distribución sea equitativa y que su uso sea efectivo en proyectos de alto impacto climático. Solo de esta manera, la región podrá enfrentar de manera integral los desafíos climáticos y avanzar hacia un futuro más resiliente y sostenible.

### **3.2 Análisis comparativo: Ingresos Intensivos en Carbono**

El análisis comparativo en las cinco ediciones de la variable de IIC pone de manifiesto la persistente dependencia económica de muchos países de América Latina y el Caribe en sectores altamente contaminantes, como la extracción de hidrocarburos, la minería y otras actividades industriales intensivas en emisiones de carbono. Estos sectores, que aportan una parte significativa del financiamiento público en varios países de la región, se convierten en pilar económico difícil de reemplazar en corto plazo, pero también constituyen un obstáculo crítico para avanzar hacia una transición sostenible y de bajas emisiones.

Esta dependencia presenta un desafío estructural, por un lado, limita la capacidad de los gobiernos para diversificar sus economías y reducir su exposición a los riesgos asociados con la descarbonización global. Por otro lado, perpetúa la inversión en actividades que intensifican los impactos del cambio climático y degradan los recursos naturales, lo que agrava las vulnerabilidades sociales y económicas en la región. La siguiente gráfica presenta una comparación de la variable de Ingresos Intensivos en Carbono a lo largo de las cinco ediciones del índice.

**Gráfica 57. Análisis comparativo: Ingresos Intensivos en Carbono (% del total de sus ingresos)**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

La región de América Latina y el Caribe presenta una notable diversidad en términos de dependencia de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, lo que se refleja en las disparidades económicas y estructurales entre los países. Naciones como Ecuador y México dependen significativamente de la extracción y exportación de hidrocarburos, con ingresos provenientes de estas actividades que han superado el 30% de los ingresos fiscales totales en los últimos dos años.

Por su parte, Trinidad y Tobago mostró un notable incremento en su dependencia de ingresos intensivos en carbono, pasando del 20.68% en la edición del IFS 2023 al 31.16% en 2024, lo que representa un incremento del 10.48%. Este crecimiento se debe principalmente a un incremento en los recursos generados por los hidrocarburos. Mientras que Perú redujo su proporción de ingresos provenientes de estas actividades, pasando del 20.64% en 2023 al 14.92% en la edición de 2024. Esta disminución podría estar vinculada a esfuerzos de diversificación económica o fluctuaciones en la producción y exportación de recursos extractivos.

En el caso contrario, El Salvador, Panamá, Honduras y Jamaica cuentan con economías menos dependientes de los ingresos derivados de sectores intensivos en carbono, representando menos del 1.5% de sus ingresos totales. En el caso de El Salvador, aunque sus ingresos intensivos en carbono aumentaron del 0.14% en 2023 al 1.31% en 2024 (un incremento del 1.17%) esta dependencia sigue siendo marginal. Jamaica por su parte, registró una reducción porcentual de estos ingresos, bajando del 0.10% al 0.06%, mostrando una limitada participación en actividades de este tipo.

Si bien los ingresos intensivos en carbono continúan siendo fundamentales para muchas economías de América Latina y el Caribe, también representan un obstáculo crítico en el camino hacia un desarrollo sostenible. La transición hacia una economía baja en carbono demanda un enfoque integral y estratégico que combine la diversificación económica, la implementación de reformas estructurales y una cooperación internacional más efectiva.

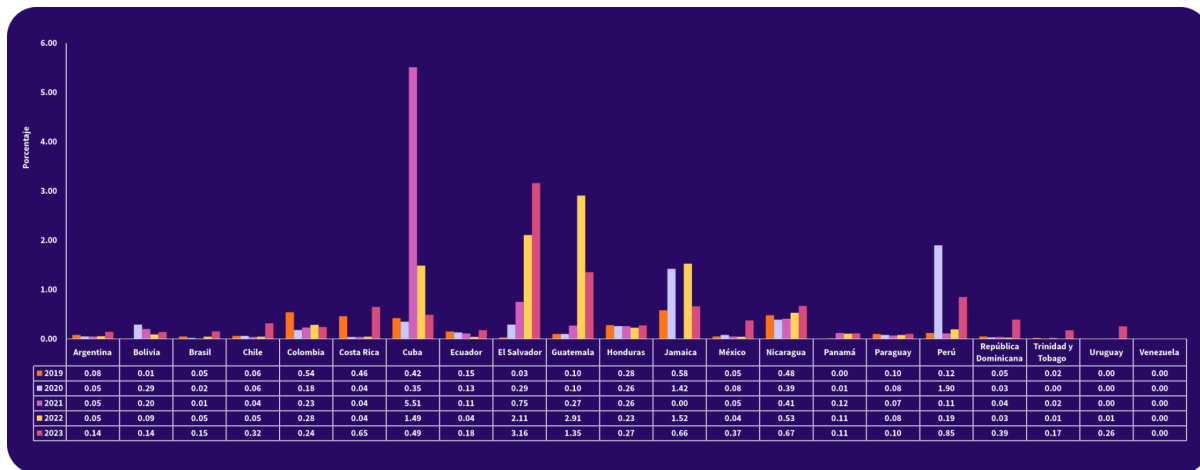
Este análisis revela que, aunque la región comparte una dependencia económica considerable de industrias intensivas en carbono, existen diferencias sustanciales en la magnitud y el impacto de dicha dependencia entre países. Estas diferencias responden a factores como la estructura económica, la disponibilidad de recursos naturales y la capacidad institucional para implementar políticas de transición. Por lo tanto, los países deben desarrollar políticas diferenciadas, adaptadas a sus realidades locales, que reduzcan gradualmente su dependencia de los ingresos provenientes de actividades de alto impacto ambiental.

En definitiva, avanzar hacia finanzas más sostenibles no solo implica reducir las emisiones de carbono, sino también garantizar la estabilidad económica y la protección de los ecosistemas. Solo mediante un enfoque coordinado, con políticas claras y un compromiso firme a nivel nacional y regional, será posible transformar las economías de la región y construir un futuro más resiliente, inclusivo y sostenible.

### 3.3 Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles


El análisis comparativo de las cinco ediciones de la variable de PS pone en evidencia que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe asignan menos del 1.0% de su presupuesto nacional a iniciativas clave como la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la promoción de un desarrollo sostenible. Esta limitada asignación presupuestal presenta un reto importante entre los compromisos climáticos asumidos a nivel internacional. La gráfica siguiente muestra una comparación de la variable de Presupuestos Sostenibles a lo largo de las cinco ediciones del índice.

**Gráfica 58. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles (% del total de sus presupuestos)**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Los resultados de esta variable muestran que algunos países han logrado destinar una parte significativa de sus recursos a actividades relacionadas con el cambio climático, la mayoría enfrentan dificultades para priorizar estas inversiones dentro de sus presupuestos nacionales. Entre los países que han destacado en términos porcentuales de su presupuesto asignado a actividades sostenibles se



encuentran Cuba que en la edición del IFS 2022, destinó el 5.51% de su presupuesto total, liderando la región. Sin embargo, en las ediciones posteriores se observó una notable disminución del 1.48% en la edición del IFS 2023 y apenas 0.49% en el IFS 2024. Este descenso se puede deber a la falta de datos en algunos rubros analizados, lo que podría haber afectado la precisión de la estimación.

Por su parte, Guatemala alcanzó su mayor asignación en la edición de 2023, destinando 2.91% de su presupuesto a actividades sostenibles. Sin embargo, en 2024 este porcentaje se redujo a 1.35%. El Salvador, el país con la mayor asignación porcentual en la presente edición del IFS, incrementando su presupuesto del 2.11% en la edición anterior, al 3.16%.

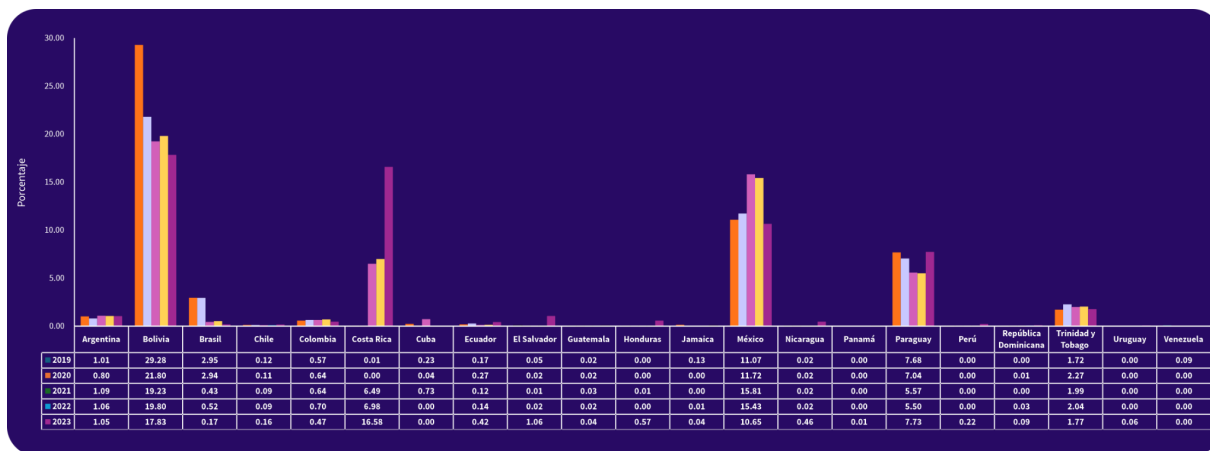
En contraste, la mayoría de los países de la región no han superado el 1.0% de su presupuesto total en ninguna de las cinco ediciones del IFS. En la edición más reciente, algunos países registraron asignaciones particularmente bajas, Argentina Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago destinaron menos del 0.20% de su presupuesto total a actividades sostenibles, lo que muestra un bajo compromiso en términos de la asignación de sus recursos para abordar los desafíos del cambio climático.

Estos resultados muestran que las prioridades presupuestarias destinadas a las actividades sostenibles son alarmante bajas en la mayoría de los países de la región. Ante este panorama es urgente que se incremente la asignación de los recursos y se redireccionen los presupuestos nacionales hacia actividades que promuevan la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad. Para lograr una transición efectiva, es imprescindible que los países fortalezcan sus capacidades institucionales donde desarrollen planes estratégicos que incorporen a la sostenibilidad en el eje central de su planificación fiscal, además de contar con mecanismos de rendición de cuentas, el cual garantice la transparencia en el uso de estos recursos.

### **3.4 Análisis comparativo: Presupuestos Intensivos en Carbono**

El análisis comparativo de las cinco ediciones de la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono pone en evidencia que una gran parte de los presupuestos de la región continúan asignando a actividades intensivas en carbono, particularmente en sectores como la explotación de hidrocarburos, los combustibles fósiles y procesos industriales generadores de altas emisiones. Este comportamiento, refleja no solo la histórica dependencia de las economías de América Latina y el Caribe en recursos naturales no renovables, sino también muestra la complejidad de cambiar con este modelo extractivista. La siguiente gráfica ilustra una comparación de la variable de Presupuestos Intensivos en Carbono a lo largo de las cinco ediciones del índice.

**Gráfica 59. Análisis comparativo: Presupuestos Intensivos en Carbono (% del total de sus presupuestos)**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Los resultados del análisis destacan que las economías de muchos países de la región están profundamente ligadas a sectores extractivos. Países como Bolivia, Costa Rica, México y Paraguay destinan una gran parte de sus recursos a la extracción de petróleo, gas y minerales. Bolivia en la edición del 2024 destinó el 17.83% de su presupuesto total a estos sectores, posicionándose como el país con la mayor asignación presupuestal. Esta alta dependencia, es resultado de la importancia de los recursos extractivos en su economía local.

Por su parte, Costa Rica incrementó su asignación a estos sectores, pasando del 6.98% en la edición del IFS 2020 al 16.58% en la edición del IFS 2024, lo que representa un aumento del 9.59%. México, aunque mostró una reducción en su asignación presupuestal a estos sectores extractivos, destinando el 10.65% en esta edición frente al 15.43% en la edición anterior, lo que representa una disminución del 4.78%, el país sigue siendo una de las economías con mayor dependencia por este tipo de actividad en la región.

En contraste, países como Guatemala, Jamaica, Panamá, República Dominicana y Uruguay han mostrado consistentemente una baja asignación presupuestaria a estos sectores extractivos, destinando menos del 0.10% de su presupuesto total en las últimas ediciones del IFS. Lo que quiere decir que estos países cuentan con una mayor oportunidad para diversificar su economía y transitar hacia modelos más sostenibles.

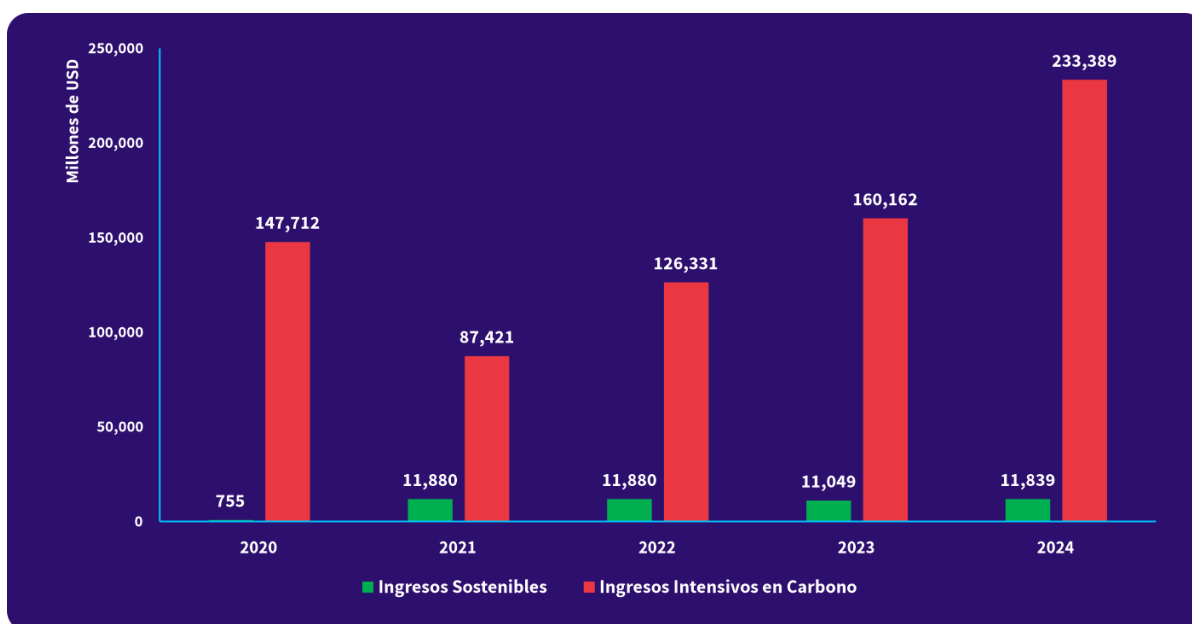
El predominio de presupuestos intensivos en carbono en América Latina y el Caribe plantean un desafío importante para avanzar hacia la sostenibilidad y cumplir con los compromisos climáticos internacionales. Para superar esta problemática, la región necesita adoptar una estrategia integral que contemple la diversificación económica, una reforma fiscal alineada con la agenda de acción climática y gestionar el acceso a financiamiento climático internacional, para lograr transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y bajos en carbono.



### 3.5 Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono

El análisis de las cinco ediciones entre las variables de Ingresos Sostenibles e Ingresos Intensivos en Carbono ofrece un panorama sobre las dinámicas económicas que predominan en América Latina y el Caribe. Este enfoque muestra que, si bien el financiamiento climático ha incrementado en los últimos años, su alcance sigue siendo insuficiente para enfrentar el impacto del cambio climático. Caso contrario con los ingresos provenientes de actividades extractivas que predominan en gran parte de los países de la región. La siguiente gráfica muestra una comparación entre los Ingresos Sostenibles y los Ingresos Intensivos en Carbono a lo largo de las cinco ediciones del índice.

**Gráfica 60. Análisis comparativo: Ingresos Sostenibles versus Ingresos Intensivos en Carbono**




Fuente. Elaboración propia con información de la OECD recopilada en el Aid Atlas (2021) y de diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

En la edición del IFS 2020, los ingresos intensivos en carbono superaron en 196 veces a los ingresos sostenibles, marcando la mayor brecha registrada hasta la fecha. Sin embargo, esta discrepancia se debe en parte a la limitada disponibilidad de datos relacionados con los ingresos sostenibles en ese momento.

En la edición del IFS 2021, esta diferencia disminuyó significativamente, con ingresos intensivos en carbono siendo 7 veces mayores que los ingresos sostenibles, representando la menor brecha en las cinco ediciones del índice.

Sin embargo, en las ediciones posteriores, la brecha volvió a ampliarse. Para el IFS 2022, los ingresos intensivos en carbono fueron 10 veces mayores, aumentando a 14 veces en la edición de 2023 y finalmente alcanzando 19 veces en la edición del IFS 2024. Este aumento ocurrió a pesar de la





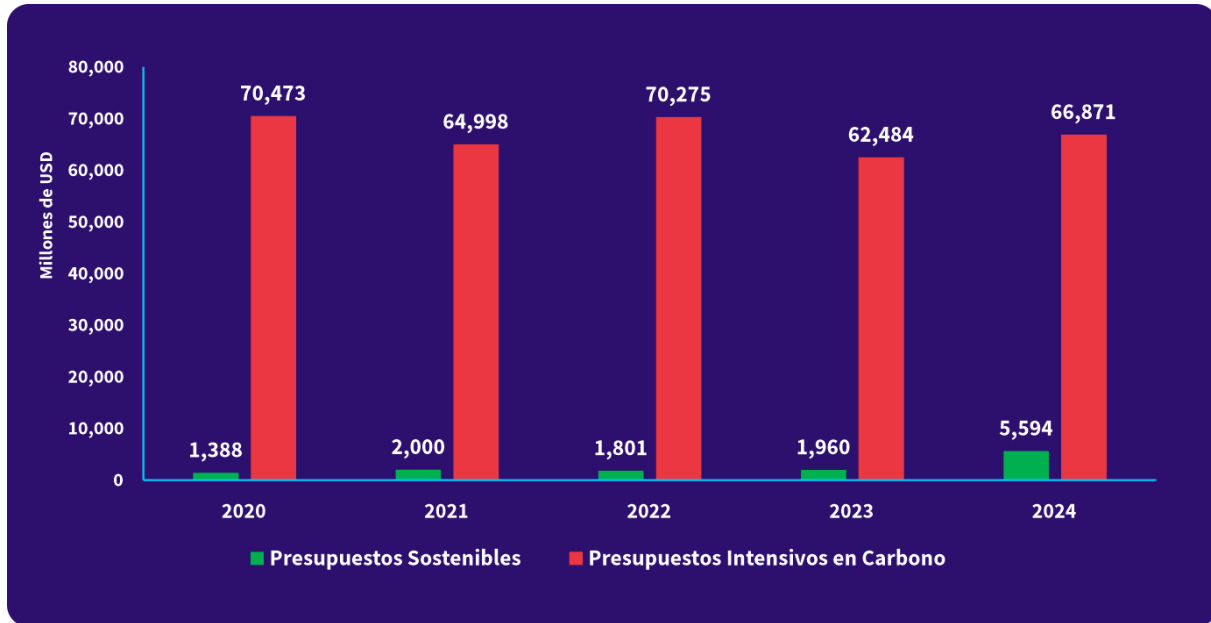
incorporación, en la última edición, de ingresos derivados de actividades de conservación de biodiversidad dentro de la categoría de ingresos sostenibles, reflejando la creciente dependencia de sectores de alto carbono en los países de la región.

En este sentido, América Latina y el Caribe necesita implementar estrategias que reduzcan la dependencia económica de actividades extractivas y promuevan la generación de recursos a través de actividades sostenibles y de bajo impacto ambiental. Además, es vital que los países de la región cuenten con un acceso más amplio y equitativo a recursos de financiamiento climático. Estos fondos deben ser gestionados de manera transparente y destinados eficazmente a mitigar el cambio climático, promover la adaptación y fortalecer las capacidades de los gobiernos para enfrentar los desafíos ambientales.

### **3.6 Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono**

El análisis comparativo de las cinco ediciones entre las variables de Presupuestos Sostenibles y Presupuestos Intensivos en Carbono muestra la complejidad de lograr la transición económica hacia modelos de desarrollo bajo en emisiones en América Latina y el Caribe. A pesar de los compromisos declarados por los países de la región para promover iniciativas sostenibles, los datos muestran que una gran proporción de los presupuestos públicos siguen destinando a actividades intensivas en carbono, perpetuando prácticas económicas que contribuyen al cambio climático. La siguiente gráfica presenta una comparación entre los Presupuestos Sostenibles y los Presupuestos Intensivos en Carbono a lo largo de las cinco ediciones del índice.

**Gráfica 61. Análisis comparativo: Presupuestos Sostenibles versus Presupuestos Intensivos en Carbono**



Fuente. Elaboración propia con diversos documentos fiscales de los 20 países de estudio en 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

En la edición del IFS 2020, los presupuestos intensivos en carbono superaron a los presupuestos sostenibles en 51 veces, marcando la brecha más amplia registrada. En la edición del IFS 2021, esta brecha disminuyó a 33 veces, indicando un leve avance hacia una mayor asignación de recursos a actividades sostenibles.

En la edición del IFS 2022 la diferencia volvió a ampliarse a 39 veces y en la edición del IFS 2021, la brecha disminuyó a 31 veces. Sin embargo, en la presente edición, la brecha entre los presupuestos intensivos en carbono y los presupuestos sostenibles se redujo a 11 veces, marcando el menor diferencial entre ambas variables en las cinco ediciones. Este progreso se debe en parte a la incorporación de nuevos sectores, como biodiversidad y manejo forestal, dentro de la variable de presupuestos sostenibles, información que no había sido considerada en análisis previos.

Este análisis evidencia la urgencia de adoptar políticas que reduzcan el apoyo a actividades contaminantes y favorezcan a sectores sostenibles. Para que los países de la región puedan cumplir con sus metas climáticas, es importante reorientar los recursos públicos hacia actividades que fomenten la protección del medio ambiente, además de fortalecer la capacidad institucional, la implementación de políticas fiscales y de desarrollar sistemas de monitoreo y transparencia que permitan medir el impacto ambiental en las decisiones presupuestales.



## 4. Conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados del IFS


El Índice de Finanzas Sostenibles 2024 emite un mensaje claro y urgente: América Latina y el Caribe tienen una oportunidad crucial para liderar la transición global hacia un modelo de desarrollo sostenible. Este reto, que también es una oportunidad, exige transformaciones profundas en las políticas nacionales y un firme respaldo por parte de la comunidad internacional. El índice no solo resalta las áreas de oportunidad, sino que también proporciona una guía estratégica para avanzar hacia un futuro inclusivo, resiliente y alineado con los desafíos climáticos y ambientales.

A nivel nacional, los países deben priorizar la implementación de reformas fiscales y presupuestarias orientadas hacia la sostenibilidad. Esto implica redirigir recursos hacia energías limpias, incentivar la eficiencia energética, fomentar la adaptación a los impactos del cambio climático y aplicar impuestos o gravámenes a actividades que generan altos niveles de contaminación. Estas reformas no solo contribuirán a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también posicionarán a la región como un referente global en innovación tecnológica, desarrollo económico sostenible y resiliencia climática. Además, es imprescindible fortalecer las capacidades institucionales para garantizar la ejecución efectiva de estas políticas, promoviendo la integración de metas climáticas en todos los sectores económicos.

Simultáneamente, la comunidad internacional, incluidos los países desarrollados, instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, debe desempeñar un papel fundamental para asegurar la viabilidad económica de los proyectos sostenibles en la región. Es importante facilitar el acceso directo a financiamiento para las comunidades más vulnerables y los sectores que enfrentan mayores riesgos climáticos, priorizando la equidad en la asignación de recursos. Los mecanismos de financiamiento deben incluir una combinación de subvenciones, créditos concesionales y otras formas de apoyo financiero que no incrementen la carga de deuda existente en los países de la región. Este respaldo es vital para que América Latina y el Caribe pueda implementar soluciones efectivas sin comprometer su estabilidad económica.

A nivel global, resulta indispensable un compromiso sólido y continuo para movilizar recursos financieros orientados a la acción climática, con énfasis en la adaptación. Enfrentar los impactos del cambio climático no solo requiere mitigar las emisiones de gases contaminantes, sino también fortalecer la capacidad de los países más afectados para anticiparse a las consecuencias futuras. Las inversiones en infraestructura resiliente, tecnologías de adaptación y programas de desarrollo inclusivo deben ser una prioridad para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Además, la cooperación internacional debe ser flexible y adaptada a las necesidades específicas de la región, reconociendo su riqueza en recursos naturales y su rol estratégico en los esfuerzos globales de conservación.

En suma, el Índice de Finanzas Sostenibles en sus cinco ediciones ha permitido identificar patrones y oportunidades claras para mejorar la gestión de recursos financieros con un enfoque sostenible. A lo largo de este proceso, se han generado recomendaciones clave, estructuradas en cuatro áreas estratégicas: ingresos, egresos, planeación y transparencia. Estas áreas abarcan desde el diseño de



reformas fiscales hasta la implementación de sistemas robustos de monitoreo y rendición de cuentas. A continuación, se detallan y desarrollan cada una de estas áreas.

## En materia de ingresos

### Reformas fiscales para la descarbonización:

La implementación de reformas fiscales orientadas a la descarbonización constituye un pilar fundamental para abordar los desafíos del cambio climático. Estas reformas deben incluir:

- **Impuesto al carbono:** Establecer impuestos sobre emisiones de carbono para incentivar la reducción de gases de efecto invernadero y promover tecnologías limpias. La recaudación derivada puede destinarse a proyectos de energía renovable y adaptación climática.
- **Gravámenes sobre actividades contaminantes:** Aplicar tasa a sectores con altos niveles de contaminación, como la minería, el transporte de combustibles fósiles y actividades intensivas en carbono.
- **Incentivos fiscales para la sostenibilidad:** Diseñar deducciones y exenciones fiscales en las cuales se adopten prácticas sostenibles, como la implementación de energías renovables y de eficiencia energética.

### Transparencia tributaria en el contexto ambiental:

La transparencia en la gestión de los ingresos fiscales vinculados al medio ambiente es esencial para garantizar la confianza y eficacia de las políticas. Las acciones incluyen:

- **Afectación específica de los ingresos:** Asegurar que los impuestos ambientales se destinen exclusivamente a iniciativas relacionadas con la transición ecológica, como la reforestación, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de infraestructuras sostenibles.
- **Portales de transparencia:** Crear plataformas digitales de acceso público que permitan rastrear en tiempo real la recaudación y el uso de los fondos destinados a proyectos ambientales. Estas herramientas deben incluir indicadores de impacto para evaluar la eficacia de las inversiones.
- **Auditorías ambientales:** Implementar auditorías periódicas para verificar el uso adecuado de los recursos y evitar desviaciones hacia fines no relacionados con el medio ambiente.

### Mecanismos alternativos de ingresos:

La exploración de fuentes de financiamiento innovadoras es fundamental para complementar los ingresos fiscales tradicionales. Algunas opciones incluyen:

- **Canjes de deuda por acción climática:** Promover acuerdos en los que se reduzca la deuda externa a cambio de compromisos para implementar proyectos de conservación ambiental, como la protección de bosques o la restauración de ecosistemas.

- **Pagos por servicios ecosistémicos:** Diseñar programas que compensen a comunidades locales y sectores vulnerables por mantener prácticas sostenibles que beneficien al medio ambiente global.
- **Fondo soberano verde:** Establecer un fondo de inversión respaldado por recursos naturales renovables, destinado a financiar iniciativas de desarrollo sostenible.

### **Fortalecimiento del mercado de bonos verdes:**

El fortalecimiento de bonos verdes representa una herramienta poderosa para movilizar capital hacia proyectos sostenibles. Las acciones prioritarias para su fortalecimiento incluyen:

- **Marco regulatorio robusto:** Desarrollar normativas alineadas con los estándares internacionales, como los Principios de Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés), para garantizar la transparencia y eficacia en el uso de los recursos.
- **Capacitación y asistencia técnica:** Proveer formación a emisores y actores del mercado financiero para fomentar la adopción de este tipo de instrumento.
- **Incentivos para la emisión:** Ofrecer beneficios fiscales o subvenciones a las instituciones que participen en la emisión de bonos verdes, incentivando su adopción masiva.

## **En materia de egresos**

### **Clasificadores presupuestarios específicos:**

La creación de clasificadores presupuestarios destinados al cambio climático, la biodiversidad y el desarrollo sostenible son esenciales para mejorar la planificación y el monitoreo de los recursos públicos. Esto permite:

- **Seguimiento eficiente:** Identificar de manera precisa los recursos asignados a proyectos relacionados con la sostenibilidad.
- **Evaluación de brechas:** Detectar áreas que carecen de financiamiento adecuado y priorizar inversiones estratégicas para maximizar el impacto.
- **Transparencia:** Fortalecer la rendición de cuentas mediante informes detallados que muestren el destino y el uso de los fondos.

### **Redireccionamiento de presupuestos intensivos en carbono:**

La reasignación progresiva de recursos desde actividades con altas emisiones de carbono hacia proyectos sostenibles es una prioridad. Para lograrlo, se deben implementar:

- **Planes de transición justa:** Asegurar que los trabajadores y comunidades afectadas por el cambio del modelo económico reciban apoyo mediante programas de capacitación, creación de empleo verde y acceso a oportunidades alternativas.
- **Mecanismos regulatorios:** Establecer normativas que favorezcan la inversión en tecnologías limpias y penalicen actividades contaminantes.
- **Incentivos para sectores sostenibles:** Promover la inversión en infraestructura verde, energías renovables y soluciones basadas en la naturaleza.

## Transversalización de la biodiversidad y el cambio climático:

Integrar las agendas de biodiversidad y cambio climático en los presupuestos de todos los sectores es clave para garantizar una acción coordinada. Las acciones prioritarias incluyen:

- **Incorporación de planes sectoriales:** Asegurar que cada ministerio y entidad gubernamental incluya metas de sostenibilidad en sus presupuestos.
- **Capacitación interinstitucional:** Proveer formación a los responsables de la planificación presupuestaria para que comprendan la importancia de integrar estos temas en sus decisiones.
- **Monitoreo y evaluación:** Desarrollar indicadores específicos para medir el progreso en la integración de estas agendas y su impacto en los objetivos de sostenibilidad.

## Innovación en la gestión del gasto:

Se deben explorar enfoques innovadores en la gestión de los egresos:

- **Presupuestos participativos:** Incluir a la sociedad civil y a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos ambientales.
- **Asociaciones público - privadas:** Fomentar la colaboración entre los sectores público y privado para financiar proyectos de alto impacto ambiental.
- **Evaluación del ciclo de vida del proyecto:** Incorporar análisis de impacto ambiental en las etapas de planificación y ejecución de proyectos para maximizar su sostenibilidad.

## En materia de planeación ambiental

### Incrementar la ambición de las NDC:

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para alinearse con las metas del Acuerdo de París. Las acciones prioritarias incluyen:

- **Metas más ambiciosas:** Establecer objetivos concretos no solo en reducción de emisiones, sino también en adaptación y resiliencia climática, incluyendo metas sectoriales específicas.
- **Monitoreo y reporte:** Implementar sistemas robustos para el seguimiento y evaluación del progreso de las NDC, con indicadores claros y públicos.
- **Participación multisectorial:** Involucrar a diversos actores, como gobiernos locales, sector privado y sociedad civil, en la actualización y cumplimiento de las metas.

### Estrategias nacionales de financiamiento sostenible:

El diseño de estrategias nacionales es importante para movilizar recursos de manera eficiente. Estas estrategias deben:

- **Identificar actores clave:** Mapear a las partes interesadas, incluyendo instituciones financieras, organismos internacionales y sectores productivos relevantes.



- **Establecer mecanismos de coordinación:** Crear plataformas de diálogo interinstitucional para garantizar la coherencia entre las políticas climáticas y financieras.
- **Diversificar fuentes de financiamiento:** Incorporar fondos internacionales, inversión privada y mecanismos innovadores como los bonos verdes y canjes de deuda.

### **Estimación de necesidades de financiamiento:**

Realizar análisis detallados para identificar las necesidades de inversión en sectores clave permite priorizar recursos de manera efectiva. Las acciones incluyen:

- **Diagnóstico sectorial:** Evaluar las brechas de financiamiento en áreas como energía renovable, eficiencia energética, atención a desastres naturales y actividades resilientes al clima.
- **Planes de inversión específicos:** Diseñar hojas de ruta que detallen los proyectos prioritarios y sus requerimientos financieros.
- **Herramientas analíticas:** Utilizar modelos económicos para proyectar los beneficios ambientales y sociales de las inversiones planificadas.

### **Protección y conservación de la biodiversidad:**

Establecer estrategias nacionales para la protección de la biodiversidad es fundamental. Las medidas prioritarias incluyen:

- **Enfoque en áreas prioritarias:** Identificar ecosistemas críticos y asignar recursos para su conservación.
- **Fondos específicos:** Crear mecanismos financieros específicos, como fondos fiduciarios, para garantizar la sostenibilidad de las acciones.
- **Participación comunitaria:** Involucrar las comunidades locales en la gestión y monitoreo de las iniciativas de conservación.

## **En materia de transparencia**

La transparencia es un elemento esencial para garantizar la eficacia, legitimidad y confianza en la gestión de los recursos destinados a la acción climática y la conservación de la biodiversidad. Las estrategias clave para fortalecer la transparencia en las finanzas incluyen:

### **Metodologías para integrar la biodiversidad y el cambio climático:**

- **Diseño de herramientas integradoras:** Desarrollar metodologías que permitan la incorporación sistemática de los objetivos climáticos y de biodiversidad en los procesos de planificación y asignación presupuestaria. Estas herramientas deben ser flexibles y adaptables a diferentes contextos nacionales y locales.
- **Estandarización de indicadores:** Establecer indicadores comunes para medir el impacto de las inversiones en biodiversidad y cambio climático. Esto facilitará la comparabilidad de los datos y el seguimiento del progreso hacia metas climáticas globales.



- **Capacitación técnica:** Promover programas de formación para los responsables de la elaboración de presupuestos, asegurando que comprendan y apliquen estas metodologías de manera efectiva.

#### **Transparencia presupuestaria:**

- **Publicación de informes regulares:** Divulgar informes periódicos que detallen los ingresos y egresos relacionados con la acción climática y la conservación. Estos informes deben ser accesibles para toda la ciudadanía, claros y basados en datos verificables.
- **Sistemas digitales de seguimiento:** Implementar plataformas digitales que permitan rastrear en tiempo real la asignación y el uso de recursos. Estas herramientas pueden incluir mapas interactivos, bases de datos abiertas y reportes de impacto.
- **Etiquetación de recursos:** Implementar sistemas de clasificación presupuestaria que etiqueten específicamente los recursos destinados a acciones climáticas y de biodiversidad.

#### **Sistemas de monitoreo, reporte y verificación (MRV):**

- **Diseño de sistemas robustos:** Establecer sistemas de MRV que recopilen, analicen y reporten información sobre la asignación y el uso de recursos, así como sobre los resultados e impactos de las inversiones.
- **Participación ciudadana:** Fomentar la realización de audiencias públicas y consultas ciudadanas sobre la asignación presupuestaria y la efectividad de los proyectos. Esto aumenta la rendición de cuentas y fortalece el apoyo público hacia las políticas ambientales.
- **Auditorías independientes:** Realizar auditorías periódicas a cargo de organismos externos para verificar la integridad y precisión de los datos reportados.

Las propuestas integradas de políticas fiscales, gestión de recursos, planificación estratégica y transparencia representan un conjunto de recomendaciones fundamentales para transformar las finanzas públicas y privadas en herramientas clave para abordar los retos climáticos y ambientales. Estos elementos no solo refuerzan la capacidad de los países para cumplir con sus compromisos climáticos internacionales, sino que también promueven el desarrollo de economías más resilientes, inclusivas y sostenibles.

En este sentido, el Índice de Finanzas Sostenibles se posiciona como una herramienta integral para guiar a los países de la región en la implementación de políticas efectivas. Este índice permite evaluar y monitorear el progreso en áreas clave como la recaudación de ingresos, la asignación transparente de recursos y el financiamiento destinado a acciones climáticas y las intensivas en carbono. A través de la implementación de estas recomendaciones, apoyadas por el Índice de Finanzas Sostenibles, puede marcar el inicio a la construcción de un sistema financiero alineado con los objetivos globales de sostenibilidad y de un futuro más justo, sostenible y resiliente para América Latina y el Caribe.

## 5. Fuentes de información

### 5.1 Fuentes de información general

Aid Atlas (2024). **Visualising global development finance flows**. [Aid Atlas | Visualise international development finance](#)

Banco Mundial (BM). (2019). **Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire doméstico y ambiental estandarizado por edad**. [Mortality rate attributed to household and ambient air pollution, age-standardized \(per 100,000 population\) | Data](#)

Banco Mundial (BM). (2021). **Agotamiento de los recursos naturales (% del INB)**. [Adjusted savings: natural resources depletion \(% of GNI\) | Data](#)

Banco Mundial (BM). (2022). **Consumo de energía renovable (% del consumo total de energía final)**. [Consumo de energía renovable \(% del consumo total de energía final\) | Data](#)

Banco Mundial (BM). (2023). Carbon Pricing Dashboard. [Carbon Pricing Dashboard | Up-to-date overview of carbon pricing initiatives](#)

Banco Mundial (BM). (2023). **Desempleo total (% de la fuerza laboral total)**. [Desempleo, total \(% de la fuerza laboral total\) \(estimación modelada de la OIT\) | Data](#)

Banco Mundial (BM). (2023). **Población total**. [Population, total | Data](#)

Banco Mundial (BM). (2023). **Producto Interno Bruto (PIB) a precios de mercado (USD actuales)**. [GDP \(current US\\$\) | Data](#)

Climate Investment Funds (CIF). (2024). **Country projects**. [Latin America and the Caribbean | Climate Investment Funds](#)

Climate Policy Initiative (CPI). (2023). **Global Landscape of Climate Finance 2023**. [Global Landscape of Climate Finance 2023 - CPI](#)

Germanwatch (2023). **Global Climate Risk Index 2021**. [Global Climate Risk Index | Germanwatch e.V.](#)

Global Environment Facility (GEF). (2024). **Country profiles**. [Country Profiles | GEF](#)

Green Bond Transparency Platform. (2023). **Green Bond Database**. [Bonds — GBTP](#)

Green Climate Fund (GCF). (2024). **Country profiles**. [Countries | Green Climate Fund](#)

Guzmán, Sandra (2020). **La incorporación del cambio climático en el presupuesto público de los países en desarrollo: un análisis de método mixto aplicado a los países en América Latina y el Caribe**. Departamento de Política, Universidad de York, Reino Unido.

International Budget Partnership (IBP). (2023). **Open Budget Survey 2023**. [Country results | International Budget Partnership](#)

International Energy Agency (IEA). (2021). **Energy Statistic Data Browser: Electricity consumption per capita**. [Energy Statistics Data Browser – Data Tools - IEA](#)

International Energy Agency (IEA). (2021). **Energy Statistic Data Browser: Total electricity consumption**. [Energy Statistics Data Browser – Data Tools - IEA](#)

International Energy Agency (IEA). (2022). **Total carbon dioxide (CO2) emissions from the combustion of fuels**. [Energy Statistics Data Browser – Data Tools - IEA](#)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). (2024). **Creditor Reporting System**. [OECD Data Explorer • CRS: Creditor Reporting System \(flows\) \[cloud replica\]](#)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). (2024). **Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2022, Climate Finance and the USD 100 Billion Goal**, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/19150727-en>.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2022). **Índice de Desarrollo Humano (IDH)**. [Human Development Index | Human Development Reports](#)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). **Índice de Pobreza Multidimensional Global 2023**. [Reports and Publications | Human Development Reports](#)

Stern, N. (2007). **The Economics of Climate Change: The Stern Review**. Cambridge: Cambridge University Press.

World Economic Forum (WEF). (2024). **Global Gender Gap Report 2024**. [Global Gender Gap Report 2024 | World Economic Forum](#)

World Resources Institute (WRI). (2021). **Climate Watch: GHG Historical Emissions**. [World | Total including LUCF | Greenhouse Gas \(GHG\) Emissions | Climate Watch](#)

## 5.2 Fuentes de información de finanzas públicas por país

### Argentina

- Administración Federal de Ingresos Públicos. Recaudación y Estadística Tributaria. Disponible en: [Recaudación y estadística tributaria | ARCA](#)
- Ministerio de Economía. Presupuesto Abierto. Recursos Tributarios. Disponible en: [Presupuesto Abierto | Sitio del ciudadano - Visualizaciones](#)
- Ministerio de Economía. Oficina Nacional de Presupuesto. Presupuesto 2023. Ley 27701 Disponible en: [Oficina Nacional de Presupuesto \(economia.gob.ar\)](#)

- Secretaría de Energía. Datos Energía. Regalías de Petróleo Crudo. Gas Natural. Gasolina y de Condensado.  
Disponible en: [Datos Energía - Regalías de Petróleo Crudo, Gas Natural, GLP, Gasolina y de Condensado](#)

## **Bolivia**

- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Información Presupuestaria y Contable. Presupuesto General del Estado 2023. Ley N° 1493.  
Disponible en: [MEFP | MEFP](#)

## **Brasil**

- Ministério do Planejamento e Orçamento en el apartado Lei Orçamentária Anual (LOA). LEI N° 14.535.  
Disponible en: [Lei Orçamentária Anual \(LOA\) — Ministério do Planejamento e Orçamento \(www.gov.br\)](#)

## **Chile**

- Dirección de Presupuestos. Ley de Presupuestos del Sector Público año 2023. Ley N° 21.516.  
Disponible en: [Ley de Presupuestos - 2023 - DIPRES Documentación](#)

## **Colombia**

- Banco de la República de Colombia. Gobierno Nacional Central. Balance Fiscal.  
Disponible en: [Gobierno nacional central \(GNC\) | Banco de la República](#)
- Ministerio de Hacienda. Presupuesto General de la Nación 2023. Ley de Presupuestos 2023. Ley No. 2276.  
Disponible en: [Decreto de Liquidación 2023 \(minhacienda.gov.co\)](#)

## **Costa Rica**

- Contraloría General de la República. Consulta sobre Presupuesto Público. Ingresos y Egresos. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).  
Disponible en: [Consultas sobre Presupuesto Público - CGR | Costa Rica](#)
- Ministerio de Hacienda. Proyectos de Ley de Presupuesto Nacional 2023.  
Disponible en: [Presupuesto - Ministerio de Hacienda - República de Costa Rica](#)

## **Cuba**

- Gaceta Oficial del Ministerio de Justicia. Gacetas y Normas Oficial. Ley 157/2022 “Del Presupuesto del Estado para el año 2023”.  
Disponible en: [Gaceta Oficial | \(gob.cu\)](#)

## Ecuador

- Banco Central del Ecuador. Información Económica. Sector Fiscal. Sector Público No Financiero.  
Disponible en: [Banco Central del Ecuador - Sector Fiscal](#)
- Ministerio de Economía y Finanzas. Estadísticas Fiscales 2023.  
Disponible en: [Estadísticas Generales de Recaudación SRI - intersri - Servicio de Rentas Internas](#)

## El Salvador

- Ministerio de Hacienda. Portal de Transparencia. Ingresos y Deuda del Estado. Ingresos por Impuesto.  
Disponible en: [Portal de Transparencia Fiscal de El Salvador:INICIO](#)
- Ministerio de Hacienda. Portal de Transparencia. Ley del Presupuesto 2023.  
Disponible en: [Portal de Transparencia Fiscal de El Salvador:GASTO DEL ESTADO](#)

## Guatemala

- Ministerio de Finanzas Públicas. Estadísticas Financieras. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Fiscal 2023.  
Disponible en: [Presupuesto 2023 \(minfin.gob.gt\)](#)

## Honduras

- Secretaría de Finanzas. Presupuesto Aprobado General de Ingresos y Egresos de la República. Ejercicio Fiscal 2023.  
Disponible en: [Rendición de Cuentas sobre la Gestión de la Hacienda Pública – SEFIN](#)

## Jamaica

- Ministry of Finance and the Republic Service. Budget. Budget Estimates. Annual Estimates. 2023-2024 Passed Estimates of Expenditure.  
Disponible en: [Annual and Supplementary Estimates – Ministry of Finance & Public Service \(mof.gov.jm\)](#)
- Ministry of Finance and the Public Service. Budget. Revenues Estimates & Financial Statements 2023 – 2024.  
Disponible en: [Revenue Estimates – Ministry of Finance & Public Service \(mof.gov.jm\)](#)

## México

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta Pública 2023.  
Disponible en: [Cuenta Pública \(hacienda.gob.mx\)](#)

## Nicaragua

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto General de la República 2023. Disponible en: [Presupuesto General de la República 2023 \(hacienda.gob.ni\)](https://www.hacienda.gob.ni)

## Panamá

- Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto General del Estado. Presupuesto 2023. Ley 336. Que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2023. Disponible en: [Dirección de Presupuesto de la Nación - Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá \(mef.gob.pa\)](https://www.mef.gob.pa)

## Paraguay

- Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto General de la Nación. Ley no. 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023. Disponible en: [Ministerio de Economía y Finanzas \(mef.gov.py\)](https://www.mef.gov.py)

## Perú

- Banco Central de Reserva del Perú. Estadísticas de Finanzas Públicas. Ingresos Anuales. Ingresos Corrientes 2023. Disponible en: [Buscador de Series](#)
- Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto Aprobado año 2023. Ley No. 30638. Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023. Disponible en: [PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2023 \(mef.gob.pe\)](https://www.mef.gob.pe)
- Ministerio de Economía y Finanzas. Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Estadísticas y Estudios. Información Tributaria 2023. Disponible en: [Nota Tributaria - Ingresos Recaudados](#)

## República Dominicana

- Ministerio de Hacienda. Dirección General de Política y Legislación Tributaria. Estadísticas Fiscales 2023. Disponible en: [Estadísticas fiscales Archive - Ministerio de Hacienda](#)
- Ministerio de Hacienda. Ley de Presupuesto General del Estado 2023. Disponible en: [digepres.gob.do/presupuesto/gobierno-general-nacional/ley-de-presupuesto-general-del-estado-2023/](https://www.digepres.gob.do/presupuesto/gobierno-general-nacional/ley-de-presupuesto-general-del-estado-2023/)

## Trinidad y Tobago

- Ministry of Finance. Details of Estimates of Recurrent Expenditure for the Financial Year 2023. Disponible en: [Estimaciones – Ministerio de Hacienda \(finance.gov.tt\)](https://www.finance.gov.tt)

- Ministry of Finance. Draft Estimates of Revenue for the Financial Year 2023.  
Disponible en: [Estimates – Ministry of Finance](#)

## Uruguay

- Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General Impositiva. Datos y Estadísticas. Informe de recaudación 2023.  
Disponible en: [Estadísticas | Dirección General Impositiva](#)
- Ministerio de Economía y Finanzas. Políticas y Gestión. Gestión Presupuestal. Presupuesto Nacional 2023.  
Disponible en: [Ley N° 19.924 | MEF](#)





**ifs24**  
Índice de Finanzas  
Sostenibles 2024

[www.sustainablefinance4future.org](http://www.sustainablefinance4future.org)